

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Vigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos
Del 9 al 13 de septiembre de 2013
Washington, DC

OEA/Ser.L.
SG/MESICIC/doc.383/13 rev. 4
13 septiembre 2013
Original: español

REPÚBLICA DE CHILE

INFORME FINAL

(Aprobado en la sesión plenaria del 13 de septiembre de 2013)

SUMARIO

El presente informe contiene el análisis integral de la implementación en Chile del artículo III, párrafo 9º, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, correspondiente a “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”, que fue seleccionado por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda; las buenas prácticas informadas por dichos órganos; y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones que se le formularon a Chile en la Primera Ronda.

El análisis se efectuó dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el Reglamento del Comité, y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas *in situ* y para la Cuarta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar el análisis sobre tratamiento igualitario para todos los Estados parte, equivalencia funcional, y el propósito tanto de la Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados Parte en la prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.

Para llevar a cabo el análisis se contó con la respuesta de Chile al cuestionario; la información suministrada por organizaciones de la sociedad civil; la información recabada por la Secretaría Técnica del Comité; y con una nueva e importante fuente de información, como lo fue la visita *in situ* realizada entre el 8 y el 10 de abril de 2013 por los miembros del Subgrupo de Análisis, integrado por representantes de El Salvador y Honduras, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con ocasión de la cual se pudo precisar, aclarar y complementar la información suministrada por Chile y escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, de asociaciones profesionales y académicos sobre temas útiles para el análisis, lo cual contribuyó a que el Comité contara con información objetiva y completa sobre dichos temas.

El análisis de los órganos de control superior se orientó, de acuerdo con lo previsto en la metodología para la Cuarta Ronda, a determinar si los mismos cuentan con un marco jurídico, si éste es adecuado para los propósitos de la Convención, y si existen resultados objetivos; y teniendo en cuenta lo observado e igualmente la información recibida se formularon las recomendaciones pertinentes al Estado analizado.

Los órganos de control superior de Chile analizados en este informe son: el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de la República (CGR), el Poder Judicial (PJUD), y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Algunas de las recomendaciones formuladas a Chile, para su consideración, en relación con los anteriores órganos apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:

Con respecto al MP, posibilitar la presentación en línea de reclamos o denuncias en cuanto a las funciones que cumple; fortalecer su dotación de personal; establecer una fiscalía especializada en delitos de corrupción; aprovechar la utilización de la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas para la detección e investigación de actos de corrupción, así como analizar las causas que podrían incidir en la aplicación de otras salidas judiciales en relación con los delitos funcionarios y elaborar estadísticas sobre prescripciones en relación con la investigaciones de corrupción que adelanta el MP.

En relación con la CGR, continuar desarrollando el proceso de armonización de la normativa del SICOGEN con los estándares internacionales de contabilidad pública, así como proyectos informáticos que faciliten sus labores, continuar brindando una mayor difusión al portal “Contraloría y Ciudadano” y fortalecer su mecanismo de rendición cuentas con una mayor participación ciudadana y dotarla de una mayor ingerencia y autonomía en la determinación y manejo de sus recursos presupuestarios.

En lo atinente al PJUD, adoptar las disposiciones pertinentes para contar con recursos humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con el juzgamiento de prácticas corruptas; continuar complementando los programas de la Academia Judicial con módulos de ética, probidad, y transparencia, brindar una mayor autonomía financiera; impulsar la implementación de su Plan Estratégico 2011-2015, así como analizar las causas que podrían estar incidiendo que sea mayor el número de casos relativos a estos delitos que terminan por sobreseimiento definitivo u otras causales a los que terminan por sentencia; además de elaborar información estadística sobre los procesos judiciales en relación con la generalidad de las prácticas corruptas y sobre los procesos ingresados o iniciados relacionados con delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos.

En lo concerniente a la UAF, fortalecer sus planes de capacitación con cursos o módulos que se relacionen con la investigación de delitos de corrupción y complementar los programas y acciones de difusión que realiza con actividades específicas relacionadas con la prevención de las prácticas corruptas; continuar implementando las etapas de la cuenta pública participativa y fortalecer la elaboración y mantenimiento de su información estadística con datos precisos sobre el número de ROS ingresados por año que se relacionen con delitos base de corrupción.

Las buenas prácticas sobre las que Chile suministró información se refieren, sintéticamente, al “Semáforo Municipal”, que consiste en la publicación en el sitio *web* institucional de la CGR del estado de cumplimiento de la obligación de las municipalidades de remitir mensualmente a ésta su información presupuestaria y contable a la CGR; los portales “Contraloría y Ciudadano”, de “Unidades de Control Interno” y de “*Asociativismo* Regional y Local” de la CGR que permiten, respectivamente, recepcionar denuncias en línea acerca de irregularidades administrativas e incorporar sugerencias de fiscalización de los ciudadanos en el proceso de planificación de las auditorías, ejercer una tuición técnica sobre las unidades de auditoría o control interno de las entidades fiscalizadas, y concentrar la información, marco regulatorio y jurisprudencia relevante acerca de las personas jurídicas de derecho privado conformadas con participación de gobiernos regionales y locales. La publicación y actualización de las “Agendas Públicas” de las autoridades de la CGR y la publicidad de los informes de auditoría por parte ésta y, el formulario electrónico “El Presidente Responde” del PJUD que permite a la ciudadanía presentar, ante el Presidente de la CSJ, reclamos, consultas o sugerencias relativas al funcionamiento y a la calidad de atención recibida en los distintos juzgados del país. Así como la divulgación trimestral de las sanciones administrativas ejecutoriadas contra entidades reguladas por incumplimiento de la normativa antilavado de activos, la publicación de categorías de PEPs y de un modelo de formulario para la declaración de este tipo de vínculo, la elaboración en desarrollo de un Manual de Probidad Funcionaria el que establece las responsabilidades administrativas y las inhabilidades e incompatibilidades de los cargos y el conjunto de recomendaciones para fortalecer las medidas preventivas antilavado de activos que desarrollan los sectores regulados por la UAF.

Con respecto al seguimiento de las recomendaciones formuladas a Chile en la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, con base en la metodología de la Cuarta Ronda y teniendo en cuenta la información suministrada por Chile en su respuesta al cuestionario y en la visita *in situ*, se definieron cuáles de dichas recomendaciones habían sido implementadas satisfactoriamente; cuáles requerían atención adicional; cuáles se replanteaban; y cuáles ya no tenían vigencia, y se hizo un recuento de las que quedan vigentes, el cual se incluye como anexo I del informe.

Entre los avances relativos a la implementación de tales recomendaciones se destacan, los diversos Dictámenes emitidos por la CGR que refieren a la normativa sobre conflictos de intereses y su aplicación a diversas autoridades públicas; el proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública que tiende a unificar la normativa vigente relativa a las declaraciones patrimoniales y de intereses y la publicidad de las mismas; la creación en el año 2009 del Consejo para la Transparencia; la promulgación de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública No. 20.500; la adopción de la “Política de Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad” y de los Instructivos Presidenciales No. 002 del año 2011 y 005 del año 2012 sobre participación ciudadana en la gestión pública y gobierno abierto.

Algunas de las recomendaciones formuladas a Chile en la Primera Ronda que quedan vigentes apuntan a propósitos, tales como: fortalecer las disposiciones relativas a las normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, regular la publicidad a las declaraciones patrimoniales y para optimizar los sistemas de análisis de su contenido, fortalecer los mecanismos de consulta existentes y a establecer otros, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación ciudadana especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción.

**COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN**

**INFORME RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA DE CHILE DE LA
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA
CUARTA RONDA, Y SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA^{1/}**

INTRODUCCIÓN

1. Contenido del Informe

[1] En el presente informe se hará referencia, en primer lugar, a la implementación, en la República de Chile, de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante “la Convención”) seleccionada por el Comité de Expertos del MESICIC para la Cuarta Ronda. La disposición seleccionada es la prevista en el párrafo 9º del artículo III de la Convención, relativa a los “órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas”.

[2] En segundo lugar, se hará referencia a las buenas prácticas que el Estado analizado consideró voluntariamente dar a conocer en relación con los órganos de control superior objeto de análisis del presente informe.

[3] En tercer lugar, conforme a lo acordado por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 9, inciso a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, este informe versará sobre el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a la República de Chile por el Comité en el Informe de la Primera Ronda y que hayan sido consideradas como objeto de atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas, disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/chl.htm

2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo

[4] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República de Chile ratificó la Convención el 22 de septiembre de 1998 y depositó el respectivo instrumento de ratificación el 27 de octubre del mismo año.

[5] Asimismo, la República de Chile suscribió la Declaración sobre el MESICIC el 4 de junio de 2001.

I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA

1. Respuesta de la República de Chile

[6] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República de Chile en todo el proceso de análisis y, en especial, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (en adelante “CAIGG”), la cual se hizo evidente, entre otros aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la

1. El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3, g) y 25 del Reglamento y Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 13 de septiembre de 2013, en el marco de su Vigésima Segunda Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 9 al 13 de septiembre de 2013.

disponibilidad que siempre mostró para aclarar o completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita *in situ* a la que se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. La República de Chile envió, junto con su respuesta, las disposiciones y documentos que estimó pertinentes, disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_chi.htm

[7] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la práctica de la visita *in situ* de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*^{2/}, la cual se realizó del 8 al 10 de abril de 2013, por parte de los representantes de las Repúblicas de El Salvador y Honduras, en su calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la citada *Metodología*.

[8] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por la República de Chile hasta el 10 de abril de 2013, y la que fue aportada y solicitada por la Secretaría Técnica, y por los integrantes del Subgrupo de Análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el *Reglamento y Normas de Procedimiento*; la *Metodología para el Análisis de la Implementación de la disposición de la Convención Interamericana contra la Corrupción Seleccionada en la Cuarta Ronda*; y la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_docs_sp.htm

2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros, de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e investigadores

[9] El Comité recibió también, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Cuarta Ronda, un documento de la organización de la sociedad civil “*Chile Transparente*” (Capítulo Nacional de Transparencia Internacional), el cual fue remitido por dicha organización de conformidad con lo previsto en el artículo 34 b) del Reglamento del Comité.^{3/}

[10] Asimismo, con ocasión de la práctica de la visita *in situ* realizada al Estado analizado, se recabó información de otras organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y académicos que fueron invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la *Metodología para la Realización de las Visitas in Situ*, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.

2. Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf

3. Este documento se recibió por correo electrónico el 12 de diciembre de 2012, y se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_resp_sc.pdf

II. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA LA CUARTA RONDA

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN)

[11] La República de Chile cuenta con un conjunto de órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, entre los que se destacan: el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Valores y Seguros.

[12] A continuación se hace una breve descripción de los propósitos y funciones de los cuatro órganos seleccionados por la República de Chile que serán analizados en el presente informe.

[13]– Ministerio Público (en adelante “MP”). Es el organismo autónomo, jerarquizado y de rango constitucional encargado de dirigir de manera exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito de aquellos que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Corresponde, igualmente, al MP ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley, así como la adopción de medidas para la protección a víctimas y testigos.

[14]– Contraloría General de la República (en adelante “CGR”). Es el organismo autónomo y de rango constitucional encargado de ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y demás órganos que señala la ley, además de examinar y juzgar las cuentas de las personas que tiene a su cargo bienes de esas entidades, además de llevar la Contabilidad General de la Nación.

[15]– Poder Judicial (en adelante “PJUD”). Es el órgano constitucional e independiente en el ejercicio de sus funciones, encargado de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar lo juzgado a través de los Tribunales de Justicia que en su conjunto lo conforman.

[16]– Unidad de Análisis Financiero (en adelante “UAF”). Es la entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda, encargada de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Chile, mediante la realización de inteligencia financiera, emisión de normativa y la fiscalización de su cumplimiento.

1. MINISTERIO PÚBLICO

1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[17] El MP cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[18] El MP es un organismo autónomo y jerarquizado, de carácter no jurisdiccional, encargado de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, si corresponde, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por ley.

[19] Su estructura y funciones están reguladas por la Constitución Política de la República, en su capítulo VII^{4/}, así como en la Ley Orgánica Constitucional del MP No. 19.640^{5/} (en adelante “LOCMP”) y en el Código Procesal Penal^{6/} (en adelante CPP) principalmente en sus artículos 77 y 78.

[20] Para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la LOCMP, el MP se compone actualmente por una Fiscalía Nacional, dieciocho fiscalías regionales y más de un centenar de fiscalías locales, las cuales funcionan como unidades operativas de las fiscalías regionales. La Fiscalía Nacional, en su nivel superior de gestión y administración, está integrada por el Fiscal Nacional, Divisiones, Unidades Especializadas y Administrativas, entre las que se encuentra la Unidad Especializada Anticorrupción. Asimismo, la Fiscalía Nacional cuenta con una Dirección Ejecutiva Nacional, la cual, además de ejercer control permanente de la ejecución presupuestaria y el uso adecuado de los recursos del MP, organiza y supervisa las divisiones administrativas de la propia Fiscalía con base en las instrucciones generales dictadas por la máxima autoridad de la institución.^{7/} De acuerdo con la respuesta del Estado analizado al cuestionario^{8/}, las actuaciones del MP se encuentran orientadas por los principios de oficialidad (artículo 54 del CPP), de legalidad (artículo 166 del CPP), de objetividad (artículo 3º de la LOCMP), de eficiencia (artículos 39, 77, 78 y 80 de la LOCMP), de transparencia y probidad (artículos 8º y 9º de la LOCMP), y de responsabilidad (artículos 2º, 45 y 53 de la LOCMP), los cuales enmarcan el desempeño de sus funciones.

[21] Con relación a la Unidad Especializada Anticorrupción (en adelante “UNAC”), la representación del MP, con ocasión de la visita *in situ*, realizó una presentación^{9/} sobre su estructura y las funciones de asesoría, coordinación interinstitucional, acciones internacionales y capacitación que viene desarrollando esta Unidad. En cuanto a las primeras, la representación del MP señaló que se refieren a aquellas asesorías que brinda al Fiscal Nacional en la preparación de normativa interna vinculada a los delitos de corrupción; a los fiscales especializados que tengan a su cargo investigaciones vinculadas con delitos que afecten el patrimonio público y aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; y, por último, las asesorías a investigaciones denominadas de “alta prioridad” en las que informa en detalle al Fiscal Nacional. Asimismo, la UNAC enfrenta conjuntamente estrategias comunicacionales, analiza en conjunto casos, participa y comparece en juicios orales junto con los fiscales ante los Tribunales Superiores de Justicia, propone diligencias de investigación y cursos de acción, evacua informes financieros contables, colabora en la toma de declaraciones a imputados y testigos, coordina peritajes, asesora en la evaluación de pruebas y participa en incautaciones u otras diligencias de investigación, entre otras responsabilidades.

[22] Sobre las labores de coordinación interinstitucional que viene realizando la UNAC, la representación del MP se refirió a aquellas con la CGR, el Consejo de Defensa del Estado, Carabineros, Policía de Investigaciones, la UAF, ChileCompra, Servicios de Impuestos Internos y con el CAIGG, entre otros órganos del Estado, con quienes se apoya conjuntamente para la obtención de información relevante, entre fiscales y entidades, en los procesos que se siguen ante los tribunales, por citar un ejemplo. Durante la visita *in situ* la representación del MP señaló además las funciones de la UNAC relacionadas con actividades de difusión, que incluyen boletines trimestrales, publicaciones

4. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_constitucion.pdf

5. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley19640.pdf

6. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_cod_proc.pdf

7. Véase organigrama del MP en: www.fiscalia.dechile.cl/Fiscalia/quienes/organigrama.jsp

8. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 4 a 7, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_publico.pdf

9. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_uni.ppt

noticiosas, actualización intranet y web, modelos de oficios, *checklist* de diligencias mínimas y guías de apoyo a la investigación, y las acciones de capacitación que ofrece a los fiscales especializados en delitos de corrupción y a otros organismos que intervienen en la investigación de tales delitos en materia de derecho penal sustantivo y procesal.

[23] En cuanto a los mecanismos para dirimir eventuales conflictos de competencia con otros órganos o autoridades, la representación del MP, tanto en su respuesta al cuestionario^{10/} como durante la realización de la visita *in situ*, señaló que éstos sólo pueden presentarse entre el MP y un juez del crimen o de letras con competencia criminal perteneciente al antiguo sistema penal inquisitivo sobre la facultad de investigar un determinado delito ocurrido antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, teniendo en cuenta la gradualidad con la que este nuevo sistema fue implementado en Chile. En este sentido, el artículo transitorio 8° de la Ley No. 19.665 que reforma el Código Orgánico de Tribunales^{11/} dispone que corresponderá a la Corte de Apelaciones competente respecto del territorio de un tribunal con competencia en lo penal, dirimir las cuestiones que se planteen entre éste y el MP sobre la potestad de investigar un hecho punible determinado y, en caso no poderse aplicarse esta norma, lo resolverá la Corte Suprema de Justicia (en adelante “CSJ”).

[24] Respecto al ámbito de las funciones del MP anteriormente señaladas y descritas principalmente en el artículo de la 1° de la LOCMP, el artículo 2° del mismo ordenamiento dispone que el MP realizará sus actuaciones procesales a través de cualquiera de los fiscales que intervenga en éstas con sujeción a la ley, ya sea el Fiscal Nacional o los Fiscales Regionales, apoyados, estos últimos, por los fiscales adjuntos, quienes ejercen sus funciones en todo el territorio nacional, sin perjuicio de encontrarse asignados por cuestiones administrativas a una región y localidad determinadas del país.

[25] El artículo 83, párrafo 4°, constitucional, prevé una excepción al ámbito competencial del MP, señalando que el ejercicio de la acción penal pública y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito corresponderá a los órganos y personas que el Código de Justicia Militar determine cuando se trate de causas del conocimiento de los tribunales castrenses.

[26] Asimismo, el Estado analizado puso de presente en su respuesta al cuestionario^{12/} como una excepción al ejercicio de las funciones que ejercen los fiscales adjuntos, lo dispuesto en el artículo 18 de la LOCMP que de manera excepcional y de oficio faculta al Fiscal Nacional para asumir la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplan con absoluta independencia y autonomía. Por su parte, el artículo 19 de dicha Ley señala que el Fiscal Nacional podrá disponer, también de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública en relación con hechos delictivos que por su gravedad o por la complejidad de su investigación lo hicieren necesario.^{13/}

10. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 4 a 7, *supra* nota 8.

11. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_cod_org.pdf

12. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 4 a 7, *supra* nota 8.

13. Con fecha 12 de agosto de 2013, el Estado analizado aportó información que señala: “El art. 18 de la LOCMP si bien no menciona la investidura específica de las personas involucradas en una investigación... la interpretación de la norma indica que se trata de personas que por su posición –derivada del cargo ostentado– podrían comprometer la independencia y autonomía de la investigación, quedando a la determinación del Fiscal Nacional cuando concurre esa posible afectación, toda vez que la simple presencia de personas que ostentan determinada investidura no hace aplicable el art. 18 LOCMP. Respecto al tema de la determinación de criterios objetivos para entender la gravedad del delito y la complejidad de su

[27] Con relación a la toma de decisiones, el artículo 2° antes mencionado dispone que los fiscales dirigirán las investigaciones y ejercerán la acción penal pública de los casos que tengan a su cargo con la independencia, autonomía y responsabilidad que establece la LOCMP, pudiendo para tales efectos solicitar asesoría y colaboración de las Unidades Especializadas de la Fiscalía Nacional, sin que sus orientaciones sean obligatorias o vinculantes para ellos. Al respecto, cabe señalar que el párrafo 2° del inciso a) del artículo 17 de la LOCMP faculta al Fiscal Nacional a dictar las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de investigación de los hechos punibles y sobre el ejercicio de la acción penal, pero no podrá dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, salvo la excepción contenida en el artículo 18 de la LOCMP citado en el párrafo anterior.

[28] En cuanto a los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden en contra de las decisiones adoptadas por el MP, el artículo 33 de la LOCMP prevé la facultad que tienen los intervinientes en un procedimiento determinado de presentar por escrito ante el Fiscal Regional competente, las reclamaciones respecto del actuar de un fiscal adjunto de conformidad con la ley adjetiva penal. Asimismo, el CPP^{14/} prevé otras causales que permiten a los intervinientes de un proceso penal reclamar ciertas decisiones del MP.

[29] El Fiscal Nacional es el jefe superior del MP y responsable de su funcionamiento. El artículo 15 de la LOCMP dispone el procedimiento para su designación, en el cual intervienen los tres Poderes del Estado. La CSJ llama a un concurso público^{15/} y acuerda una quina que propone al Presidente de la República, quien posteriormente elige y presenta a uno de los candidatos de dicha quina al Senado, mismo que dará su acuerdo o no, previéndose para esto último la repetición parcial del procedimiento hasta obtener su conformidad. El artículo 85 constitucional y el mismo artículo 15 disponen que el cargo de Fiscal Nacional durará ocho años y no podrá ser designado para el período siguiente.^{16/}

investigación, que permite la aplicación del artículo 19 de la LOCMP, se reitera que dicha situación se evalúa caso a caso por parte del Fiscal Nacional, quedando su aplicación, por así disponerlo expresamente la LOCMP, como una facultad o atribución exclusiva del Fiscal Nacional, tal cual nos lo advierte la historia de la tramitación de la ley 19.640 LOCMP [<http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-19640/HL19640.pdf>], que nos aclara en relación al ejercicio de esta facultad, que ella se ejerce de oficio, por parte del Fiscal Nacional, no a petición de interesado alguno y sin necesidad de escuchar previamente al Consejo General. Estas normas son un resabio del denominado “fuero personal” que es uno de los elementos que consideran las reglas de la competencia absoluta para determinar el tribunal jerárquicamente competente para conocer de un asunto. El Fuero Personal es aquel elemento de la competencia absoluta de los Tribunales que se funda en la intervención en un proceso determinado de una persona constituida en dignidad; vale decir, que desempeñe en un determinado cargo considerado por la ley, y que implica que conocerá del asunto un tribunal de mayor jerarquía al competente naturalmente. Este fuero personal no estaba establecido en favor de la persona que goza del mismo, sino que de la contraparte, por cuanto se estimaba que un tribunal de mayor jerarquía tendrá más independencia para juzgar asuntos en los cuales fueren parte estas personas o autoridades. Las personas estaban indicadas en el artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales. Este fuero regía en materia civil y criminal, pero tras la implementación de la reforma procesal penal, se limitó a las materias de carácter CIVIL (ley 19.665). Actualmente, la forma en que la Ley orgánica del MP contempla esta especie de “fuero”, determina que ya no es una prerrogativa de las autoridades que puedan ser imputados o víctimas de un delito, sino que una decisión entregada a la máxima autoridad del Ministerio Público, quien deberá ponderar en el caso a caso, si existe una pérdida de autonomía en la investigación que hagan procedente asumir personalmente la investigación. En otras palabras, el legislador chileno ya analizó el punto al eliminar el fuero personal en materia criminal, no estimando pertinente, repetir un listado de autoridades en la Ley del Ministerio Público.”

14. Véase ejemplos en los artículos 109, 183, 256, y 258 del CPP.

15. Véase requisitos para ser nombrado Fiscal Nacional en el artículo 14 de la LOCMP.

16. En cuanto a los Fiscales Regionales, ellos son nombrados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna por la Corte de Apelaciones de la región respectiva, previo concurso público (artículo 29 de la LOCMP), con base en los requisitos que exige el artículo 31 de la LOCMP.

[30] En lo que respecta a la remoción e instancias competentes para exigirle responsabilidad por sus actuaciones y decidir sobre su permanencia en el cargo, el artículo 89 constitucional y 53 de la LOCMP disponen que el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales^{17/} sólo podrán ser removidos por la CSJ a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, ya sea por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

[31] En cuanto a la manera en que se determinan los recursos humanos necesarios para el funcionamiento del MP, el artículo 67 de la LOCMP dispone que corresponde al Fiscal Nacional establecer la forma de contratación y expiración de los servicios de los funcionarios que se desempeñen en la institución. El artículo 69, por su parte, prevé los requisitos generales necesarios para su ingreso, mientras que el artículo 70 señala que los funcionarios del MP, salvo aquellos de exclusiva confianza, serán seleccionados previo concurso público de antecedentes y sólo excepcionalmente y por resolución fundada del Fiscal Nacional podrán utilizarse otros sistemas de selección, los que en todo caso deberán garantizar la debida transparencia y objetividad, con base en los méritos e idoneidad de los postulantes. En el sitio *web* institucional del MP, en su sección “Fiscalía Transparente” pueden consultarse, entre otros aspectos, la dotación de personal del MP, sus remuneraciones por estamento y grado, el sistema de incentivos al desempeño, la asignación por zona, la estructura de planta y las nóminas de contratos por honorarios y concursos vigentes^{18/}.

[32] Específicamente, en relación con los fiscales, la LOCMP prevé en su artículo 14 la designación de éstos por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna del Fiscal Regional respectivo, previo cumplimiento de los requisitos descritos en el artículo 42 de la LOCMP y la realización del concurso público de antecedentes dispuesto en el artículo 16 y siguientes del Reglamento de Personal para los Fiscales del MP^{19/} (en adelante “RPFiscalesMP”).

[33] Con relación al régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para fiscales y funcionarios del MP, éste se encuentra descrito, para los primeros, en los artículos 54 a 65 de la LOCMP y 33 a 40 del RPFiscalesMP, y, con relación a los segundos, en los artículos 34 a 39 del Reglamento de Personal para Funcionarios del MP^{20/} (en adelante “RPFMP”). En lo que tiene que ver con la cesación y permanencia en sus cargos, los fiscales adjuntos y funcionarios del MP se rigen por lo dispuesto en el artículo 66 de la LOCMP que señala que la relación laboral entre la institución y quienes se desempeñen en ésta como fiscales o funcionarios se regula por las normas de esta Ley y por las de los reglamentos que de conformidad con ella se dicten, señalándose la aplicación supletoria de otros cuerpos normativos previstos en el mismo artículo 66. En este sentido, los artículos 43 de la LOCMP y 102 del RPFiscalesMP establecen las causales de cesación de los fiscales, mientras que el artículo 91 del RPFMP refiere las causales de terminación del contrato de trabajo de los funcionarios del MP.

[34] El MP cuenta con una serie de manuales y reglamentos, tales como el Reglamento de Funciones de los Fiscales Jefe y Administradores de Fiscalías del MP^{21/}, que describen las atribuciones de los fiscales y personal a su servicio, los cuales se encuentran publicados en el sitio *web* de la institución^{22/}. Asimismo, en uso de sus atribuciones, el Fiscal Nacional ha emitido,

17. La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal Nacional (artículo 53 de la LOCMP).

18. Véase: <http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/GobiernoTransparente.htm>

19. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_pers.pdf

20. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_func.pdf

21. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_fun.pdf

22. Véase: http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/reglamentos_mp.htm

mediante oficios, diversas instrucciones generales que ha estimado necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delitos, el ejercicio de la acción penal, así como sobre la protección de víctimas y testigos, las cuales se encuentran igualmente publicadas en el sitio *web*^{23/} del MP.

[35] En materia de capacitación, la representación del MP durante la visita *in situ* efectuó una presentación sobre el “Programa de Formación Centralizado”^{24/} que ejecuta la Unidad Nacional de Capacitación de la División de Recursos Humanos del MP de conformidad con el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento para Fiscales y Funcionarios^{25/} del MP. Dicho programa se basa en una malla curricular institucional, siendo un proceso integral de cursos de carácter continuo pero incluyente también de otros nuevos a partir de las necesidades detectadas con base en mediciones de brechas de perfiles por competencia y con sujeción a los recursos disponibles. Estos cursos son impartidos por capacitadores o relatores internos reclutados, seleccionados y entrenados de forma general y especializada con base en procedimientos específicos. A este respecto, la representación del MP destacó algunos aspectos del diseño e implementación de la relativa reciente creación de la Academia de Entrenamiento del MP y del número de cursos impartidos y de participantes en los mismos en el periodo 2009-2012, describiendo, también, los 57 módulos y 6 líneas curriculares que integran actualmente la malla curricular del citado Programa, así como los cursos presenciales y en línea previstos para 2013, incluyendo información sobre su presupuesto.

[36] Con relación a las acciones de fortalecimiento institucional y mejoramiento de calidad implementadas, el MP, a través de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de su Dirección Ejecutiva Nacional, adoptó el Plan Estratégico MP 2009-2015^{26/}. Este documento contiene, en primer lugar, un diagnóstico estratégico institucional que establece los lineamientos, servicios y productos, proyectos y líneas de acción tendientes a cumplir los objetivos que el mismo Plan describe y que se relacionan con la tramitación efectiva y eficiente de las investigaciones penales, la mejora en la percepción y la satisfacción en la atención de los usuarios, la promoción e impulso de una adecuada coordinación interinstitucional, así como el cumplimiento y desarrollo de los denominados Compromisos de Gestión Institucional (en adelante “CGI”).

[37] Con ocasión de la visita *in situ*, la representación del MP efectuó una presentación^{27/} sobre los CGI, explicando que de acuerdo con dicho Plan Estratégico y de conformidad con la Ley que Perfecciona el Sistema de Incentivos al Desempeño de los Fiscales y de los Funcionarios^{28/} del MP No. 20.240, el Fiscal Nacional propone al Ministro de Hacienda anualmente un CGI, considerando la misión institucional y los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Cada CGI se encuentra constituido por áreas prioritarias (recursos humanos, usuarios y comunidad, y gestión organizacional), sistemas (de reclutamiento y selección, de promoción y desarrollo, de evaluación del desempeño, de información y atención a usuarios, de información, y de planificación y control de gestión) y metas anuales de gestión con sus respectivos indicadores de grado de cumplimiento, las cuales se evalúan por una entidad externa.

23. Véase: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/instructivos/index.do?d1=0>

24. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_prog.ppt

25. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_cap.pdf

26. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_plan09-15.pdf

27. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_comp.ppt

28. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley20240.pdf

[38] Asimismo, como parte de los proyectos estratégicos incluidos en el citado Plan, el MP elaboró un proyecto de Plan de Fortalecimiento^{29/}, pendiente de aprobación, que busca generar un aumento en la dotación de funcionarios y fiscales para enfrentar las cargas de trabajo, mantener los estándares de calidad y focalizar la persecución de los delitos de mayor connotación social.

[39] En cuanto a la implementación de sistemas y tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de sus labores, así como la manera en que se suministra información a los ciudadanos acerca de los objetivos, funciones, procedimientos y gestiones, tanto en su respuesta al cuestionario^{30/} como en el marco de la visita *in situ*, el MP informó que cuenta con el sitio web www.fiscaliadechile.cl, el Sistema de Apoyo a Fiscales (en adelante “SAF”) y el Modelo General de Atención a Usuarios del MP, incluyendo el Proyecto OPA (Orientación, Protección y Apoyo) y el Sistema de Información y Atención a Usuarios (en adelante “SIAU”).

[40] Con relación al SAF, en la visita *in situ*, la representación del MP señaló que a partir de la instauración de la reforma procesal penal fue indispensable contar con herramientas que permitan llevar un control y registro ágil, eficiente e inmediato de todos aquellos casos generados por la comisión de un hecho presuntamente delictivo. En consecuencia, dijo, se creó el SAF como un sistema informático de apoyo a la labor de investigación y del posterior desarrollo del proceso penal, a través de las distintas opciones y funciones contenidas en los módulos que lo integran, principalmente los de recepción, asignación, gestión, de custodia, consultas e informes, administración de privilegios; y de interconexión.^{31/}

[41] Con respecto al Modelo General de Atención a Usuarios, se informó que la División de Atención a Víctimas y Testigos del MP, como parte del Plan Estratégico aludido, viene desarrollando e implementando dicho Modelo con el objetivo de incentivar la participación de las víctimas y testigos en el proceso penal y dar una atención de calidad a los usuarios, mejorando los sistemas de atención. Este modelo está compuesto por el Proyecto OPA y el sistema SIAU.

[42] En cuanto al Proyecto OPA^{32/}, la representación del MP señaló que éste se implementó en todo el país de forma gradual desde el año 2008, y tiene por objeto: “orientar” a las víctimas y testigos que acudan al MP mediante la entrega de información relevante para el usuario, en función de sus necesidades y de la etapa del proceso penal en que se encuentra; “protegerlos” en función de evaluaciones de intimidación y de riesgo y, de acuerdo con los resultados, a través de medidas de protección necesarias al caso; y “apoyarlos” durante el proceso penal, especialmente en la etapa correspondiente al juicio oral, brindando un servicio integrado que facilita la participación de la víctima y testigos en el proceso. La representación del MP también se refirió a los modelos especializados de intervención inmediata en violencia intrafamiliar que otorgan protección oportuna y efectiva a las víctimas durante su participación en el proceso penal; para niños y niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar e igualmente de protección para casos complejos.

[43] En relación con el SIAU, la representación del MP señaló que éste se trata de un sistema con espacio presencial, telefónico y virtual que proporciona información y atención adecuada y de calidad para facilitar el acceso a los servicios que presta el MP, garantizando una respuesta oportuna y eficaz

29. Véase: <http://www.fiscaliadechile.cl/planfortalecimiento/fortalecimiento.html>

30. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 26 y 27, *supra* nota 8.

31. Durante la visita *in situ* la representación del MP suministró a la Secretaría Técnica una presentación sobre el SAF disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_sist.ppt

32. Véase www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/modelo.jsp.

y con ello establecer canales recíprocos de comunicación con sus usuarios. Específicamente, los objetivos de SIAU son informar a los usuarios sobre las funciones del MP y los servicios que contempla con sus respectivos estándares y procesos de trabajo, formalidades, plazos y procedimientos para su tramitación, recibir y resolver reclamos que se presenten en relación con la institución y sus funcionarios, faltas, omisiones o cualquier otra irregularidad que afecte el interés de quien reclama, recibir y estudiar sugerencias y felicitaciones a favor del mejoramiento del MP, así como solicitudes en relación con la Ley sobre Acceso a la Información Pública No. 20.285^{33/} (en adelante “Ley de Transparencia”); e implementar encuestas de satisfacción y monitoreo respecto de los servicios que provee el MP, entre otros.

[44] En cuanto a los mecanismos de control, los artículos 11, 45 y 53 de la LOCMP disponen la responsabilidad disciplinaria, civil, penal y política de las actuaciones de los fiscales y funcionarios del MP. Con respecto al procedimiento para perseguir la responsabilidad administrativa de los fiscales adjuntos, éste se encuentra regulado en los artículos 48 a 52 de la LOCMP, mientras que para los fiscales regionales en el artículo 52 del mismo ordenamiento, complementándose ambos procedimientos con las disposiciones del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del MP^{34/}. El procedimiento descrito en este Reglamento es también aplicable para exigir dicha responsabilidad a los demás funcionarios del MP, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, inciso d), de la LOCMP.

[45] En este mismo orden de ideas, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del MP complementó lo anterior refiriéndose a los controles internos preventivos, los cuales se llevan a cabo al ingresar a la institución a través de las declaraciones patrimoniales y de intereses que deben presentar los funcionarios, sumado al cumplimiento de los requisitos que exige el sistema de nombramiento vigente en el MP. Se precisó, asimismo, que en el ejercicio del cargo, los controles preventivos se aplican a través de los sistemas de evaluación de desempeño y de control de gestión, la política de control del consumo de drogas, los reglamentos del MP y los criterios generales y, en su caso, regionales de actuación, así como a través de las atribuciones y competencias de control y auditoría de la División de Contraloría Interna^{35/} de la Fiscalía Nacional.^{36/}

[46] En lo que respecta a los mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias, relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos, tanto en su respuesta al cuestionario como en el marco de la visita *in situ*, la representación del MP informó que la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, a través de su área de Reclamos e Investigaciones Administrativas, es la entidad responsable de revisar las investigaciones administrativas conforme al Reglamento Orgánico de las Unidades de Apoyo de la Fiscalía Nacional^{37/}, e informar y encauzar al Fiscal Nacional los reclamos que por gestión de causas o gestión administrativa, se presenten por los particulares. Estos reclamos pueden hacerse por escrito, dirigiendo una carta al Fiscal Regional correspondiente, o bien a través de

33. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_ley20285.pdf

34. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_resp.pdf

35. Véase título II del Reglamento Orgánico de las Divisiones de la Fiscalía Nacional, disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_org.pdf

36. Durante la visita *in situ* la representación del MP suministró a la Secretaría Técnica algunos datos sobre el número total de investigaciones administrativas por año desde 2006, las sanciones definitivas aplicadas y las decisiones del Fiscal Nacional, disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_cont.ppt

37. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_regla_org_uni.pdf

los formularios disponibles en la Fiscalía Nacional y en las fiscalías regionales y locales de todo el país.^{38/}

[47] Sobre la manera que se garantizan los recursos presupuestarios, el artículo 90 de la LOCMP dispone la sujeción de la institución al régimen previsto en la Ley de Administración Financiera del Estado, y que la *“Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente los recursos necesarios para el funcionamiento del Ministerio Público. Para estos efectos, el Fiscal Nacional comunicará al Ministerio de Hacienda las necesidades presupuestarias del Ministerio Público dentro de los plazos y de acuerdo con las modalidades establecidas para el sector público.”* En el sitio web del MP, en su sección de “Fiscalía Transparente” pueden consultarse, entre otros aspectos, los presupuestos anuales 2009 a 2012 del MP, así como los informes de ejecución presupuestaria y transferencias de recursos públicos^{39/}.

[48] En relación con los mecanismos de coordinación con otros órganos de control y poderes públicos del Estado, así como para obtener apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía, el MP, en su respuesta al cuestionario^{40/}, informó sobre la suscripción de diversos convenios de colaboración con otras instituciones. Por ejemplo, con la CGR suscribió un convenio para facilitar el acceso del MP a las declaraciones de patrimonio y de intereses de funcionarios públicos y a la base de datos de funcionarios^{41/}; con el Servicio de Impuestos Internos para permitir la interconexión del MP con la base de datos del Servicio; con la UAF en materia de capacitación mutua^{42/}; con el Consejo de Defensa del Estado; con ChileCompra para intercambiar información, antecedentes de licitación de compras públicas, acceso a base de datos y capacitación; con las Superintendencias de Bancos, de Valores y Seguros, y de Quiebras; con el Servicio de Registro Civil; con el Servicio Nacional de Aduanas, así como con la Asociación Chilena de Municipalidades. Asimismo, el MP y la CGR, junto con el Consejo de Defensa del Estado, se encuentran implementando un proyecto de intercambio de información en línea financiado por el BID, denominado Proyecto “Uso Compartido de Información Para Mejorar el Combate de la Corrupción en Chile” para *“mejorar la efectividad, oportunidad y transparencia de la investigación y procesamiento de delitos de corrupción en la función pública, mediante el uso compartido y transparente de información sobre las denuncias e investigaciones”*^{43/}.

[49] Asimismo, en materia de lucha contra la corrupción, el MP hace parte de la mesa de coordinación interinstitucional denominada “Frente Anticorrupción”, integrada por la CGR, el PJUD, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado, quienes mediante el “Convenio de Cooperación y Coordinación Institucional de Órganos de Control Superior”^{44/} acordaron abordar en forma conjunta los síntomas de la corrupción y evitar faltas a la probidad. Dicho acuerdo establece, entre otros aspectos, el intercambio de información y de antecedentes sobre las diversas materias que comprenden la prevención de faltas a la probidad en los tribunales y organismos que representan las partes, el desarrollo de acciones de capacitación y perfeccionamiento de sus dotaciones de personal en los mismos aspectos, y la ejecución de otras iniciativas conducentes a la referida finalidad, sobre la base de planes y proyectos generales o específicos que puedan convenir con estos propósitos.

38. Durante la visita *in situ* la representación del MP suministró a la Secretaría Técnica sobre los mecanismos de atención a reclamos, disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_mec.ppt

39. Véase: <http://www.fiscaliadechile.cl/transparencia/GobiernoTransparente.htm>

40. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 29 a 33, *supra* nota 8.

41. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_conv_cgr.pdf

42. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_conv_min.pdf

43. Véase: <http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page.1303.html?id=ch-t1091>

44. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_conv.pdf

[50] Finalmente, en relación con los mecanismos de rendición de cuentas, el artículo 21 de la LOCMP dispone que el Fiscal Nacional rendirá cuenta de las actividades del MP, en abril de cada año, en una audiencia pública y transmitida en línea a través del sitio *web* de la institución. De acuerdo con el mismo artículo, dicha cuenta deberá abarcar, entre otros aspectos, los resultados obtenidos de las actividades realizadas, estadísticas básicas, uso de los recursos otorgados, dificultades presentadas y, de estimarse conveniente, las políticas públicas y modificaciones legales que se consideren necesarias para el mejoramiento del sistema penal. Asimismo, el artículo señala que deberán darse a conocer los criterios de actuación del MP que se aplicarán durante el período siguiente. Por su parte, el artículo 36 de la LOCMP establece la obligación de los Fiscales Regionales de rendir cuenta en audiencia pública durante el mes de enero de cada año respecto de las actividades desarrolladas en su correspondiente jurisdicción. Las cuentas públicas del Fiscal Nacional y los fiscales regionales se encuentran publicadas en el sitio *web* del MP^{45/}.

1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[51] El MP cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 1.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[52] En primer lugar, el Comité toma nota de los mecanismos de atención de reclamos, quejas o denuncias que, en relación con el cumplimiento de las funciones del MP, puede presentar la ciudadanía por escrito a través de los medios y formularios descritos en la sección 1.1 anterior. No obstante, el Comité, en aras de facilitar y fortalecer las relaciones del MP con la comunidad, sugiere que el Estado analizado considere establecer, a través del sitio *web* del MP, un enlace electrónico que posibilite también la presentación de tales reclamos, quejas o denuncias, así como sugerencias y felicitaciones por parte de los particulares. (Véase recomendación 1.1.1. del capítulo II de este informe).

[53] En segundo lugar, el Comité, con base en lo expresado por el MP en su respuesta al cuestionario^{46/}, así como los antecedentes, diagnóstico y justificaciones previstos en el Plan de Fortalecimiento, adoptado como uno de los proyectos derivados del Plan Estratégico del MP 2009-2015 de la institución, ambos documentos citados en la sección 1.1 anterior, estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar, teniendo en cuenta la iniciativa legal existente^{47/}, las disposiciones y medidas que sean pertinentes para proveer al MP de los recursos humanos necesarios (fiscales y personal de apoyo jurídico, técnico y administrativo) para el cabal cumplimiento de sus funciones y responsabilidades que legal y constitucionalmente le competen dentro del sistema de enjuiciamiento penal chileno, principalmente aquellas relacionadas con la investigación de prácticas corruptas. (Véase recomendación 1.4.2. del capítulo II de este informe).

[54] En tercer lugar, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del MP realizó una presentación^{48/} y explicó el alcance y contenido de una propuesta sobre la creación de una fiscalía de investigaciones de alta complejidad (FIAC), con equipos altamente especializados dentro de la estructura actual de la institución, que incluya dentro del ámbito de su competencia las investigaciones sobre hechos que pudieran configurar delitos de corrupción. Lo anterior, señaló,

45. Véase: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/cuentas.jsp>

46. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 47, *supra* nota 8.

47. Véase proyecto de ley que fortalece el MP (Boletín No. 8265-07), disponible en: <http://goo.gl/e1RZk>

48. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_ant.ppt

responde al diagnóstico institucional realizado sobre la forma en que el MP enfrenta actualmente una investigación de “alta complejidad”, citando, por ejemplo, la existencia de fiscales especializados más no exclusivos y, cuando se decreta la dedicación exclusiva de un fiscal, ello afecta las labores de la fiscalía a que pertenece debido a la redistribución de cargas de trabajo, además de la imposibilidad de contar con equipos policiales permanentes y la necesidad de constituir equipos investigativos *ad hoc* previo requerimiento a las policías. La representación del MP puso de presente además las dificultades que existen para procesar y analizar la gran cantidad de información que se recaba en estos casos, toda vez que dicho análisis debe hacerse por profesionales en distintas áreas, siendo necesarios equipos de carácter multidisciplinario.

[55] La representación del MP mencionó también que la fiscalía que se propone, tendría un alcance *supra* territorial, de integración multidisciplinaria y trabajo integrado interinstitucional, además de constituirse como una unidad operativa del MP que obtendrá apoyos administrativos desde la Fiscalía Nacional (informáticos, recursos humanos, administración y finanzas, etc.). Asimismo, la representación del MP señaló como ventajas de la propuesta, la focalización de los esfuerzos en los casos más graves, institucionalización en la persecución penal de estos delitos, que implica una despersonalización y minimización de exposición de los fiscales, trabajo multidisciplinario e interinstitucional, fortalecimiento de la confidencialidad, coordinación con instituciones financieras, posibilidad de acceder a levantamiento de secreto bancario en forma expedita y oportuna, el acceso en línea a las principales bases de datos, fomento del intercambio de información a nivel internacional y una mayor cantidad de recursos humanos y económicos.

[56] Con base en la información recabada durante la visita *in situ* descrita anteriormente, así como la suministrada en su respuesta al cuestionario^{49/}, el Comité considera conveniente que el Estado analizado considere adoptar las disposiciones que estime pertinentes tendientes a establecer, dentro de la estructura del MP, una fiscalía especializada que permita hacer frente a la sofisticación creciente de los actos de corrupción y la consecuente complejidad de su investigación, persecución y procesamiento^{50/}. (Véase recomendación 1.4.3. del capítulo II de este informe).

[57] Finalmente, teniendo en cuenta la dificultad que para el logro de los propósitos del MP en materia de detección e investigación de prácticas corruptas identificó en su respuesta al cuestionario^{51/}, el Comité estima conveniente que el Estado analizado considere adoptar las disposiciones y medidas necesarias tendientes a permitir que las herramientas y técnicas de investigación referidas a la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, actualmente disponibles sólo para la investigación de delitos relacionados con el lavado de activos, puedan ser igualmente utilizadas para la detección e investigación de actos de corrupción. (Véase recomendación 1.4.4. del capítulo II de este informe).

1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[58] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa al MP, entre la que se destaca la siguiente:

[59] En primer lugar, en cuanto a las acciones que se han desarrollado para prevenir prácticas corruptas, si bien las funciones del MP están referidas principalmente a la detección e investigación

49. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 47 y 48, *supra* nota 8.

50. Véanse el proyecto de ley que fortalece el MP (Boletín No. 8265-07), disponible en: <http://goo.gl/e1RZk>; y la propuesta de reforma constitucional (Boletín No. 8274-07), disponible en: http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8274-07

51. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 47, *supra* nota 8.

de los hechos constitutivos de delito, en su respuesta al cuestionario^{52/}, el Estado analizado señala que a partir de la entrada en vigor de la Ley que Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas^{53/} No. 20.393, se creó el Grupo Nacional de Expertos contra la Corrupción (GNECC) en el que participa el MP. Entre sus actividades, este Grupo ha venido realizando encuentros con organizaciones del sector privado para promover el alcance y contenido de la citada Ley, así como la tipificación del cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros que la misma contempla.

[60] En segundo lugar, con respecto a las funciones de MP para la investigación y persecución de actos de corrupción que constituyen delitos, tanto en su respuesta al cuestionario^{54/} como en el marco de la visita *in situ*, la representación del MP precisó que los ingresos por delitos de corrupción en Chile representan apenas el 0.1% del total de denuncias recibidas en el año 2012^{55/}.

[61] Al respecto, el Estado analizado aportó tanto en su respuesta al cuestionario como en el marco de la visita *in situ*, un conjunto de cuadros estadísticos^{56/} sobre investigaciones iniciadas entre 2007 y 2011, precisando que la información contenida en los mismos es referencial y corresponde al sistema registral del MP, extraída de una base de datos vigente al 10 de noviembre de 2012 y que el PJUD es el órgano responsable del manejo de las estadísticas oficiales respecto de las sentencias y resoluciones judiciales en relación con dichas investigaciones.

[62] De estos cuadros estadísticos se desprende que en el periodo mencionado ingresaron al MP un total de 3,193 causas o investigaciones por delitos de corrupción^{57/}, de las cuales el 14% (435 causas) se encuentran vigentes y el 86% restante (2,758 causas) se ubican dentro de la categoría de “no vigentes”^{58/}.

[63] Asimismo, se proveyó información sobre los términos aplicados acumulados durante tal periodo respecto de 4.166 investigaciones, de las cuales el 1% (44 causas) están prescritas, el 11% (439 causas) suspendidas^{59/}, el 30% (1,259 causas) archivadas^{60/}, el 34% (1416 causas) terminadas por “otras causales de término”^{61/}, y el 24% (1,008 causas) por sentencia definitiva.

52. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 34, *supra* nota 8.

53. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley20393.pdf

54. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 35, *supra* nota 8.

55. Véase p. 22 de la Cuenta Pública del Fiscal Nacional 2013, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_cue13.pdf

56. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/ppt/mesicic4_chl_est.ppt

57. Los cuadros estadísticos que presentó en el MP en su respuesta al cuestionario se refiere sólo a los siguientes delitos de corrupción: fraude al fisco (artículo 239 CP), negociaciones incompatibles (artículo 240 CP), tráfico de influencias (artículo 240 bis CP), malversación de caudales públicos (artículos 233 a 238 CP), y cohecho (artículos 248 a 250 CP), todos representativos del fenómeno de “corrupción económica”.

58. La clasificación de casos “vigentes” considera aquellas investigaciones pendientes en el curso de un año sumadas a las causas ingresadas en ese mismo periodo, y en cambio, en la categoría de “no vigentes” se contabilizan las causas suspendidas y terminadas en el año que corresponda (véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 37, *supra* nota 8).

59. Se comprenden dentro de este concepto los casos terminados por “acuerdo reparatorio”, “sobreseimiento temporal”, aplicación de la “facultad de no iniciar investigación”, por aplicación de “otras causales de suspensión”, y las terminadas por “suspensión condicional del procedimiento”, dado que todas ellas representan una forma de término temporal, en que no existe una decisión judicial definitiva, y que de darse ciertos supuestos, pueden ser dejadas sin efecto reabriéndose la investigación (véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 39, *supra* nota 8).

60. Se comprenden dentro de este concepto los casos terminados por “Archivo Provisional” y “decisión de no perseverar”, dado que en ambos casos se constata que realizada la investigación no se puede adoptar una decisión de fondo por falta de antecedentes (véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 40, *supra* nota 8).

61. Se comprende dentro de este concepto distintas formas de término que no corresponde agrupar dentro de los conceptos indicados por el cuestionario del mecanismo. Así, se incluyen en esta categoría: “agrupación a otro caso”, “anulación

[64] Con relación a las investigaciones prescritas, el Estado analizado señala en su respuesta al cuestionario^{62/} que “dicha información no la tenemos desagregada de esa manera y por ello la extraemos de la aplicación de la letra d) del artículo 250 del Código Procesal Penal -referido al sobreseimiento definitivo- y precisamente en este caso a la extinción de la responsabilidad penal por algunos de los motivos establecidos en la ley, debiendo relacionar dicho artículo con el art. 93 del Código Penal que entre una de sus causales contempla la prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena...”.

[65] Específicamente, en cuanto a las causas suspendidas, el Estado analizado suministró la información que se relaciona en la siguiente tabla:

CAUSAS SUSPENDIDAS						
CAUSAL DE SUSPENSIÓN	Año					TOTAL
	2007	2008	2009	2010	2011	
Acuerdo reparatorio ^{63/}	2	3	7	2	3	17
Suspensión condicional del procedimiento ^{64/}	14	44	83	45	92	278
Sobreseimiento temporal ^{65/}	7	7	21	5	10	50
Facultad para no investigar ^{66/}	21	27	17	13	15	93
Otras causales de suspensión	0	0	0	0	1	1
TOTAL	44	81	128	65	121	439

[66] Con respecto a las causas archivadas, el Estado analizado suministró la información que se relaciona en la siguiente tabla:

CAUSAS ARCHIVADAS						
TIPO DE ARCHIVO	Año					TOTAL
	2007	2008	2009	2010	2011	
Archivo provisional ^{67/}	136	177	210	128	128	779
Decisión de no perseverar ^{68/}	96	123	156	63	42	480
TOTAL	232	300	366	191	170	1,259

[67] Finalmente, en relación con las investigaciones que han terminado por sentencia, el Estado analizado suministró la información que se relaciona en la siguiente tabla:

SENTENCIAS DEFINITIVAS						
TIPO DE SENTENCIA	Año					TOTAL
	2007	2008	2009	2010	2011	
Condenatoria	192	198	281	151	105	927
Absolutoria	34	27	8	8	4	81
TOTAL	226	225	289	159	109	1,008

administrativa”, “otras causales de término”, “sobreseimiento definitivo, artículo 250 letras a) b) c) e) y f)”, “sobreseimiento definitivo artículo 240”, “incompetencia” y “principio de oportunidad” (véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 40, *supra* nota 8).

62. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 42, *supra* nota 8.

63. Véase artículo 241 del CPP, *supra* nota 6.

64. Véase artículo 237 del CPP, *supra* nota 6.

65. Véase artículo 237 del CPP, *supra* nota 6.

66. Véase artículo 252 del CPP, *supra* nota 6.

67. Véase artículo 167 del CPP, *supra* nota 6.

68. Véase artículo 248, inciso c), del CPP, *supra* nota 6.

[68] No obstante los datos anteriores, el Comité, con base en los boletines estadísticos^{69/} publicados en el sitio *web* institucional del MP, observó la siguiente información, la cual se refiere a las causas ingresadas y terminadas, así como a los términos aplicados en relación con los denominados “delitos funcionarios”^{70/} ingresados al MP en el periodo 2008-2012, a saber:

DELITOS FUNCIONARIOS	AÑO					TOTAL
	2008	2009	2010	2011	2012	
1. Delitos funcionarios ingresados	1,165	1,285	1,075	1,298	1,362	6,185
2. Delitos funcionarios terminados	1,227	1,343	1,292	1,512	1,595	6,969
3. Términos aplicados por delitos funcionarios	AÑO					TOTAL
3.1. Con salida judicial	2008	2009	2010	2011	2012	
3.1.1. Sentencia condenatoria	N/D	236	217	218	290	959
3.1.2. Sentencia absolutoria	N/D	38	30	19	21	108
3.1.3. Sobreseimiento definitivo	N/D	138	75	92	87	392
3.1.4. Sobreseimiento temporal	N/D	31	17	18	22	88
3.1.5. Susp. condicional procedimiento	N/D	242	259	450	540	1491
3.1.6. Acuerdo reparatorio	N/D	3	5	10	15	33
3.1.7. Facultad para no investigar	N/D	67	86	61	67	281
Subtotal	N/D	755	689	868	1,042	3,354
3.2. Con salida no judicial	AÑO					TOTAL
	2008	2009	2010	2011	2012	
3.2.1. Archivo provisional	N/D	524	580	606	548	2,258
3.2.2. Decisión de no perseverar	N/D	284	205	196	190	875
3.2.3. Principio de oportunidad	N/D	6	13	34	21	74
3.2.4. Por competencia	N/D	187	104	114	121	526
Subtotal	N/D	1,001	902	950	880	2,732
3.3. Otros términos	AÑO					TOTAL
	2008	2009	2010	2011	2012	
3.3.1. Anulación administrativa	N/D	52	19	7	19	97
3.3.2. Agrupación a otro caso	N/D	274	207	107	170	758
3.3.3. Otras causales de término	N/D	21	15	25	7	68
3.3.4. Otras causales de suspensión	N/D	1	0	1	0	2
Subtotal	N/D	348	241	140	196	925
TOTAL	N/D	2,104	1,832	1,958	2,118	8,012
N/D: No disponible						

[69] Esta información sirve para demostrar los resultados obtenidos por el MP en el cumplimiento de sus funciones relativas a la detección e investigación de prácticas corruptas. No obstante, el Comité denota que en los últimos cuatro años el 68% de las causas por delitos funcionarios con salida judicial culmina con términos distintos a la sentencia definitiva, y sólo el 28% con la persona condenada, por lo que formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere

69. Disponibles en: <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do>

70. El Oficio FN No. 059-2009 de 30 de enero de 2009 señala en su numeral 1 de la sección I los delitos que caen bajo la categoría de “delitos funcionarios”, disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ofi059.pdf

efectuar un análisis de las posibles causas de esto, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes⁷¹. (Véase recomendación 1.4.5 del capítulo II de este informe).

[70] Sobre lo anterior, “Chile Transparente” señaló en su informe^{72/} que “sin ánimo de emitir pronunciamiento o comentario alguno sobre el desempeño del Ministerio Público, llama la atención la alta proporción de causas judiciales de delitos funcionarios que no culminan en sentencias, sino que en otras salidas como suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios y facultad de no investigar...”.

[71] Finalmente, en materia de las investigaciones que han prescrito por no haber sido concluidas en los términos establecidos de prescripción, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición y teniendo en cuenta, además, lo expresado por el Estado analizado en su respuesta al señalar que “dicha información no la tenemos desagregada de esa manera”^{73/}, formulará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 1.4.6 del capítulo II de este informe).

1.4. Conclusiones y recomendaciones

[72] Con base en el análisis integral realizado con respecto al MP en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[73] La República de Chile ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al MP, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 1 del capítulo II de este informe.

[74] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 1.4.1. Establecer, a través del sitio *web* del MP, un enlace electrónico que posibilite la presentación de reclamos, quejas o denuncias, así como sugerencias y felicitaciones por parte de la ciudadanía. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.2. Considerar adoptar, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, las disposiciones y medidas que sean pertinentes para proveer al MP de los recursos humanos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones, principalmente aquellas relacionadas con la investigación de prácticas corruptas. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).

71. Con fecha 12 de agosto de 2013, el Estado analizado informó que el pasado 11 de enero de 2013 se impartió por el Fiscal Nacional, mediante Oficio FN No. 039/2013, los nuevos criterios de actuación en materia de corrupción, disponibles en <http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/instructivos/index.do>, limitándose la procedencia de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, la cual requiere para su aplicación, la decisión del Fiscal Regional respectivo, quien debe adoptarla directamente, informándose la misma a la Unidad Especializada Anticorrupción. Reiterándose en dicho Oficio 039/2013 la aplicación de esta facultad en forma excepcional, limitada y prudente, teniendo especialmente en cuenta la dificultad que representa controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión. Estando obligados a ponderar los Fiscales Regionales, en cada caso, las circunstancias de la comisión del delito, su naturaleza, modalidad y móviles y deben perseverar en la persecución criminal cuando ella aparezca necesaria, por la gravedad y trascendencia de los hechos en el caso concreto.

72. Véase el informe presentado por la organización “Chile Transparente”, p. 11, *supra* nota 3.

73. Véase respuesta del MP al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 39, *supra* nota 8.

- 1.4.3. Considerar adoptar las disposiciones que estime pertinentes para establecer, dentro de la estructura del MP, una fiscalía especializada que permita hacer frente a la sofisticación creciente de los actos de corrupción y la consecuente complejidad de su investigación, persecución y procesamiento. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.4. Considerar adoptar las disposiciones y medidas que estime pertinentes para permitir que las herramientas y técnicas de investigación referidas a la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas que sólo están disponibles en las investigaciones relacionados con el delito de lavado de activos, puedan igualmente utilizarse para la detección e investigación de actos de corrupción. (Véase sección 1.2. del capítulo II de este informe).
- 1.4.5. Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en la aplicación, en relación con los delitos funcionarios, de otras salidas judiciales distintas a una sentencia definitiva, en orden a adoptar las medidas correctivas en caso que correspondan. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).
- 1.4.6. Elaborar información estadística relativa a las investigaciones por actos de corrupción que determine el número de decisiones relativas a la prescripción de la sanción o de la acción penal por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos, en orden a identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 1.3. del capítulo II de este informe).

2. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[75] La CGR cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[76] La CGR es un órgano superior de fiscalización, encargado de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y demás órganos que señale la ley, examinar y juzgar las cuentas de las personas que tienen a su cargo bienes de esas entidades y llevar la Contabilidad General de la Nación, entre otras funciones que la ley le encomienda. Su estructura y funciones están reguladas principalmente por la Constitución Política de la República, en su capítulo X, así como en la Ley de Organización y Atribuciones de la CGR No. 10.336^{74/} (en adelante “Ley No. 10.336”).

[77] En este contexto, las funciones de la CGR se clasifican en:

[78] – Función jurídica, la cual consiste en ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, mediante la interpretación de las normas jurídicas que inciden en el ámbito administrativo, a partir de la emisión de informes o pronunciamientos jurídicos obligatorios denominados “jurisprudencia administrativa”, y a través del control de las órdenes formales emanadas de la Administración activa, que puede ser preventivo, simultáneo o posterior. En particular, el

74. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_ley10336.pdf

control preventivo se lleva a cabo mediante el trámite de “toma de razón”^{75/} previsto en los artículos 99 constitucional y 10 de la Ley No. 10.336.

[79] – Función de auditoría, la cual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 constitucional; 21 y 21 A de la Ley No. 10.336; y 52 del Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado No. 1.263^{76/}, consiste en velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y respeto del principio de probidad administrativa a través de la realización de auditorías que evalúan los sistemas de control interno de los servicios y entidades, la fiscalización de la aplicación de las disposiciones relativas a la administración financiera del Estado, particularmente, las de ejecución presupuestaria y exactitud de estados financieros, la comprobación de la veracidad de la documentación de respaldo, la verificación del cumplimiento de las normas estatutarias aplicables a los funcionarios y la formulación de proposiciones adecuadas para subsanar los vacíos detectados, así como los exámenes de cuentas que constitucionalmente corresponde realizar a la CGR en forma privativa.

[80] – Función contable, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el mismo artículo 98 constitucional, consiste en generar información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los recursos y las obligaciones del Estado para apoyar el proceso de toma de decisiones los Poderes Públicos, autoridades administrativas y órganos de fiscalización, y regular de forma exclusiva la contabilidad general del sector público e interpretar con fuerza obligatoria las disposiciones vigentes que incidan en la contabilización de una operación determinada e informar acerca de los procedimientos técnicos aplicables.

[81] – Función jurisdiccional, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 constitucional y el título VII de la Ley No. 10.336, consiste en juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos y velar por la legalidad de sus ingresos, gastos y la integridad del patrimonio estatal, con el objeto de perseguir la responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios y ex funcionarios que hayan causado daño al patrimonio público. Para el cumplimiento de esta función, se contempla, dentro de la estructura de la CGR, la existencia de una Fiscalía que asume la defensa de los intereses patrimoniales del Fisco de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley No. 10.336 y de los Tribunales de Cuentas de Primera y Segunda Instancias. El primero es un órgano unipersonal conformado por el Subcontralor General denominado Juzgado de Cuentas. El segundo es un tribunal colegiado presidido por el Contralor General e integrado por dos abogados designados por el Presidente de la República a propuesta del Contralor, ante el cual se sustancian los recursos de apelación y de revisión del juicio de cuentas.

[82] Para el cumplimiento de las anteriores funciones, la CGR es autónoma e independiente de acuerdo con lo previsto en los artículos 98 constitucional y 1° de la Ley No. 10.336. No obstante, en cuanto al ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades, la representación de la CGR durante la visita *in situ* precisó que el régimen jurídico chileno prevé la posibilidad que se presenten conflictos de competencias de la CGR sólo con los Tribunales Superiores de Justicia. En este sentido, el artículo 53, párrafo 3°, constitucional, encomienda al

75. La toma de razón es el procedimiento de control preventivo, a través del cual la CGR verifica la legalidad de los decretos y resoluciones que de conformidad a la legislación deben tramitarse ante ella, así como también la constitucionalidad y legalidad de los decretos con fuerza de ley. Constituye un control de juridicidad de los instrumentos que se examinan, sin que con ocasión del mismo la CGR pueda pronunciarse o calificar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Los actos administrativos sobre personal que se encuentren exentos de toma de razón, deben remitirse a CGR para su registro y revisión posterior.

76. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_dec1263.pdf

Senado “conocer las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia”. Al respecto, con base en lo expresado en la respuesta del Estado analizado al cuestionario^{77/}, los eventuales conflictos de competencia que se susciten a partir de la admisión de recursos judiciales interpuestos ante los tribunales de justicia en contra de resoluciones administrativas dictadas por la CGR en ejercicio de sus facultades constitucionales, serán objeto de resolución por parte del Senado. Este tipo de conflictos de competencia son infrecuentes de acuerdo con lo manifestado por la representación de la CGR durante la visita *in situ*.

[83] Con respecto al ámbito de sus funciones, el artículo 16 de la Ley No. 10.336 señala que están sometidos a la fiscalización de la CGR los servicios, instituciones fiscales, semifiscales, organismos autónomos, empresas del Estado y, en general, todos los servicios públicos creados por ley, sin perjuicio del control que ejercen algunas Superintendencias sobre las instituciones y entidades sometidas a su fiscalización. Al respecto, la representación de la CGR en el marco de la visita *in situ* suministró mayor información, señalando que se trata de competencias complementarias, no opuestas ni permisivas de una *supra* fiscalización por parte de la CGR, toda vez que cada una de las entidades actúa conforme a su ámbito competencial previa y jurídicamente establecido. Se señaló además que las Superintendencias cuentan con atribuciones precisas en materia de supervigilancia y fiscalización con base en el régimen que regula su sector y, en el ejercicio de tales atribuciones, no pueden invadir el ámbito de otros órganos de acuerdo con el principio de juridicidad previsto en los artículos 6° y 7° constitucionales. También la CGR fiscaliza a las municipalidades del país y las empresas, sociedades o entidades públicas y privadas en que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital.

[84] En cuanto al régimen de excepciones al ámbito de sus funciones, la CGR no fiscaliza a los Poderes Legislativo y Judicial, Banco Central y MP, así como tampoco a las entidades comerciales, bancos, empresas de telefonía y eléctricas, clínicas privadas e instituciones de salud previsional, entre otras. De igual manera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 B de la Ley No. 10.336, respecto del control de legalidad o de las auditorías que realiza, la CGR no tiene potestad para evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. No obstante, atendiendo a su deber de velar por el cumplimiento de la ley, le corresponde fiscalizar que las entidades sometidas a su control actúen con eficacia y eficiencia de conformidad con los artículos 5° y 53 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado No. 18.575^{78/} (en adelante “Ley No. 18.575”).

[85] En relación con la manera en que la CGR adopta sus decisiones, tanto las de carácter interno como las que por mandato constitucional y legal cumple, éstas son adoptadas por el Contralor General con base en el trabajo que realiza cada división componente de la institución en cumplimiento de sus responsabilidades legalmente establecidas.

[86] Con respecto a los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR puso de manifiesto la distinción que debe existir entre los recursos que proceden sobre la generalidad de las decisiones que adopta la institución y aquellos aplicables a su función jurisdiccional. En relación con las primeras, la representación de la CGR señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley No. 10.336, éstas no son susceptibles de

77. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 9, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_contraloria.pdf

78. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_ley18575.pdf

recurso ante otra autoridad, es decir, las decisiones de la CGR en ejercicio de sus funciones jurídica, de auditoría y contable están sujetas sólo a la interposición de los recursos de reposición o reconsideración ante la misma institución, en consonancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley No. 18.575. Lo anterior, sin perjuicio de la revisión ante la justicia ordinaria de determinadas decisiones del Contralor General normalmente por la vía del recurso de protección.

[87] En lo que respecta a las decisiones relacionadas con su función jurisdiccional, la Ley No. 10.336 establece en su artículo 119 la figura del recurso de apelación procedente contra la sentencia dictada en primera instancia del juicio de cuentas que conocerá el Tribunal de Cuentas en segunda instancia. Asimismo, las resoluciones dictadas en primera instancia por el Juez de Cuentas relacionadas sólo con la tramitación del juicio y no sobre su fondo serán susceptibles de recurso de reposición. El fallo que dicte el Tribunal de Cuentas en relación con el recurso de apelación interpuesto es recurrible a través del recurso especial de revisión, previsto en el artículo 126 de la Ley No. 10.336, el cual procede ante el mismo Tribunal únicamente por falta emplazamiento, error de hecho o nuevos antecedentes o circunstancias no considerados en el fallo impugnado.

[88] Asimismo, en ejercicio de su potestad disciplinaria, la CGR puede aplicar sanciones a cualquier funcionario público como consecuencia de una investigación sumaria instruida en los términos del Decreto Ley No. 799^{79/} de 1974, lo cual puede ser objeto de recurso de reposición, siempre que no se encuentre afinada la aplicación de la correspondiente sanción, ni sea procedente el recurso de apelación conforme al inciso segundo del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, según el cual las *“sanciones superiores a la multa serán apelables por el interesado ante la Corte Suprema”*.

[89] Respecto a las acciones necesarias para aplicar y/o hacer efectivas sus decisiones, los artículos 6°, 7° y 98 constitucionales, 2° de la Ley No. 18.575, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la Ley No. 10.336 establecen el carácter vinculante e imperativo de los pronunciamientos jurídicos e informes de auditoría emitidos por la CGR para los organismos sometidos a su fiscalización, por lo que su inobservancia implica una vulneración a los deberes funcionarios, incurriéndose en responsabilidad disciplinaria, la que se hace efectiva a través del proceso administrativo correspondiente. Asimismo, el Contralor General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley No. 10.336, podrá solicitar información a los servicios y entidades de la Administración Pública, y su inobservancia podrá ser sancionada directamente por el mismo Contralor con multa o suspensión del funcionario responsable, según corresponda. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley No. 10.336, el Contralor General podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para practicar los actos de instrucción necesarios dentro de las investigaciones que ordene. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las decisiones adoptadas en virtud de un juicio de cuentas, el Contralor General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley No. 10.336, podrá ordenar descuentos de las remuneraciones de los funcionarios que no hayan dado cumplimiento a una sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 124 de la citada Ley, sin perjuicio de la facultad para proceder al cobro por vía ejecutiva, a través de los tribunales ordinarios.

[90] Para efectos del presente informe, en su respuesta al cuestionario^{80/}, el Estado analizado señaló al Contralor y Subcontralor Generales como las máximas autoridades de la CGR. En cuanto a la manera en que es provisto el cargo de Contralor General, los artículos 98 constitucional y 3° de la Ley No. 10.336 disponen que este cargo será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, por un período de 8 años

79. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ch1_dec799.pdf

80. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 12, *supra* nota 77.

continuos, no pudiendo ser designado para el período inmediatamente siguiente, y cesará en sus funciones al cumplirse dicho período o por cumplir 75 años de edad. El cargo de Subcontralor General, por su parte, es provisto por designación del Contralor General.

[91] Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley No. 10.336, tanto el Contralor General como el Subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia y su remoción corresponderá sólo al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen en contra de los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los ministros de la CSJ.

[92] En relación con lo anterior, en el marco de la visita *in situ*, la representación de la CGR se refirió a las instancias competentes para exigir responsabilidad por las actuaciones del Contralor General y Subcontralor y para decidir acerca de la permanencia en sus cargos. A este respecto, se precisó que el artículo 52, numeral 2°, constitucional contempla, entre las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, la de declarar la procedencia o no de las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las autoridades señaladas en el mismo numeral 2°, cuyo inciso c) prevé a “*los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes.*” Dicha acusación deberá tramitarse conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional No. 18.918^{81/}. De proceder la acusación, se remitirán los antecedentes al tribunal ordinario competente para la tramitación del procedimiento correspondiente con sujeción a lo dispuesto en los artículos 51, numeral 1, 338, 339 y demás aplicables del Código Orgánico de Tribunales.

[93] En cuanto a la manera que se determinan y se proveen los recursos humanos necesarios para su funcionamiento, el artículo 3° de la Ley No. 10.336 establece, además del nombramiento del Contralor General por parte del Presidente de la República con el acuerdo del Senado, que “*los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva confianza del Contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de toda otra autoridad*”.

[94] El artículo 49 de la Ley No. 10.336 señala que los nombramientos y ascensos del personal de la CGR se harán de conformidad con las disposiciones que contiene esta Ley, debiendo recaer los ascensos en empleados de la misma oficina. El artículo 50 siguiente faculta al Contralor General para “*designar personal a contrata, de acuerdo con las necesidades del Servicio, con los fondos que se consulten legalmente para este efecto. El personal a contrata que, a juicio del Contralor, haya demostrado eficiencia en el servicio, tendrá derecho preferente para ocupar las vacantes que se produzcan en el grado inferior de la planta.*”

[95] En relación con lo anterior, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR precisó la aplicación supletoria de las normas contenidas en la Ley sobre Estatuto Administrativo No. 18.834^{82/} (en adelante “Estatuto Administrativo”) en aquellos aspectos no regulados por la Ley No. 10.336 de conformidad con los Dictámenes de la CGR No. 28.614 de 1989^{83/} y 853 de 1991^{84/}, teniendo en cuenta que dicho Estatuto constituye un régimen de aplicación general a los servidores de la Administración del Estado. Asimismo, se señaló la vigencia de la Resolución Exenta de la CGR

81. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/chi_res5.pdf

82. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_ley18834.pdf

83. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_dic28614.pdf

84. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_dic853.pdf

No. 01471^{85/} de 2003, la cual establece las políticas de personal de la entidad y dispone, en concordancia con el Estatuto Administrativo, que la selección del personal deberá efectuarse a través de procesos competitivos, entre otras disposiciones.

[96] En el marco de la visita *in situ*, la representación de la CGR precisó la naturaleza, alcance y obligatoriedad de esta Resolución, señalando que se trata de un acto administrativo emitido en términos del artículo 3° de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado No. 19.880^{86/}, que regula al personal de la institución y su cumplimiento es imperativo tanto para su emisor como para sus destinatarios. En el mismo sentido, la representación de la CGR mencionó que la institución se rige desde 1989 por el sistema de “carrera funcionaria” en cumplimiento del Decreto Ley No. 3.651^{87/} de 1981.

[97] En su respuesta al cuestionario^{88/}, el Estado analizado señala, además, que la selección del personal de la CGR se realiza con base en principios de publicidad, equidad y eficiencia de acuerdo con las necesidades de personal de las Divisiones y Contralorías Regionales y, dependiendo del número de vacantes a proveer, se realiza el reclutamiento a través de procesos competitivos de evaluación de mérito que supone la realización de entrevistas, pruebas y revisión de antecedentes curriculares evaluados por un comité de selección en el que no participa el Contralor General. En este sentido, señala la misma respuesta^{89/}, los llamamientos a concurso se publican en el portal institucional en Internet y en los diarios de mayor circulación, haciéndose las postulaciones a través del sitio *web* de la CGR.

[98] Con respecto a los requisitos para acceder a los cargos de la CGR, con base en lo expuesto, el artículo 12 y demás aplicables del Estatuto Administrativo establecen los requerimientos para ingresar a la Administración del Estado. Por su parte, los artículos 84 y 85 del Estatuto, 47 de la Ley No. 10.336, 54 y 56 de la Ley No. 18.575, 20 bis del Decreto Ley No. 3.551 de 1980^{90/}, 32, letra c), de la Ley de Gobierno y Administración Regional No. 19.175^{91/}, entre otras disposiciones, establecen el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para el personal de la CGR.

[99] En relación con el régimen de responsabilidad por las actuaciones del personal al servicio de la CGR, éste se encuentra previsto principalmente en las disposiciones del título V del Estatuto Administrativo, así como del título IV de Ley No. 10.336, sin perjuicio de las disposiciones que en materia de responsabilidad penal y civil sean aplicables dependiendo de la naturaleza de la conducta que la origine. En este sentido, el régimen disciplinario previsto en los cuerpos normativos antes aludidos establece la instrucción y trámites del procedimiento, la aplicación de sanciones (censura, multa, suspensión o destitución) y los medios de defensa a que tiene derecho el funcionario infractor.

[100] La CGR, además de las funciones y atribuciones de sus unidades y personal que labora en ellas descritas en el título I de la Ley No. 10.336, cuenta con una serie de guías, manuales, instructivos, órdenes y resoluciones exentas y de carácter interno puestas a disposición de su personal tanto en la *Intranet* de la CGR como en su sitio *web* institucional público^{92/}, entre los que se encuentran las guías prácticas para la emisión de dictámenes y el proceso de toma de razón y metodológica para la

85. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_res1471.pdf

86. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley19880.pdf

87. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley3651.pdf

88. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 12, *supra* nota 77.

89. *Ibid.*, p. 13, *supra* nota 77.

90. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_dec3551.pdf

91. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_ley19175.pdf

92. Disponibles en: <http://goo.gl/RM3pT>

definición de muestras en auditorías, el Manual del Fiscalizador, el Reglamento de Sumarios Instruidos por la CGR (Resolución No. 236 de 1998), la Guía Metodológica de Deberes Funcionarios (Unidad de Sumarios), la Orden de Servicio No.107 de 2012 que establece instrucciones para ordenar procedimientos disciplinarios y su seguimiento, el Manual de Procesos de la Unidad de Juicios de Cuentas de Fiscalía, el Manual de la Oficina General de Partes y Archivo General, la Orden de Servicio No. 88 del año 2012 que establece instrucciones sobre productos de la función de auditoría^{93/}, entre otros, los cuales, como se desprende del contenido de los mismos, describen las funciones del personal a su servicio y procedimientos para el desarrollo de sus tareas.

[101] En materia de capacitación, la CGR, a través de su División Secretaría General, desarrolla un programa de actividades internacionales, charlas, cursos, diplomados, pasantías, jornadas, seminarios y talleres destinados a perfeccionar y/o actualizar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias del personal a su servicio, impartidos por funcionarios de la misma institución, pertenecientes a la “Red de Formadores Internos” o por proveedores externos en áreas temáticas, tales como jurídica, control externo, contabilidad, administración de personal del Estado, inducción a la CGR y apoyo en la gestión institucional.^{94/}

[102] En su respuesta al cuestionario^{95/}, el Estado analizado presentó información en relación con las actividades de capacitación inicial o inducción dirigidas a los nuevos funcionarios de la CGR, así como en las áreas temáticas de “auditoría” y “probidad y transparencia” en el periodo que va desde el 30 de junio de 2007 al 30 de septiembre de 2012.

[103] En cuanto las acciones de fortalecimiento institucional, el Estado analizado puso de presente en su respuesta al cuestionario^{96/} que la CGR es beneficiaria de un proyecto de cooperación técnica, actualmente en estado de implementación, firmado en julio de 2010, entre el Gobierno de Chile y el BID, denominado “Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en las Funciones de la CGR”^{97/}, cuyos objetivos son mejorar los procesos y sistemas internos de trabajo para facilitar que los productos estratégicos se alineen con la perspectiva de gestión por resultados, así como colaborar con el desarrollo y fortalecimiento de procesos transversales de apoyo, con el propósito de promover la gestión orientada a resultados en los procesos de trabajo de la CGR. Asimismo, en septiembre de 2012, la CGR firmó un acuerdo con la OCDE con el objeto de que esta Organización realice una revisión tendiente al fortalecimiento de la gestión por resultados para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios que presta la CGR^{98/}.

[104] Respecto al desarrollo de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo sus labores, la CGR cuenta con un conjunto de sistemas informáticos interrelacionados, entre los que se destacan el SIAPER (Sistema de Administración de Personal del Estado), el SICA (Sistema Integrado de Control de Auditorías), el SISTRADOC (Sistema de Tramitación Electrónica de Documentos), el sistema ATENEA para el registro y seguimiento de denuncias relacionadas con faltas a la probidad, el sistema ASTREA (Sistema de Seguimiento de Acciones Jurisdiccionales), el sistema HIPNOS como un repositorio digital de documentos, el sistema HEFESTOS (Sistema de Gestión de Personal de la CGR), el sistema CARIATIDE (Sistema de Control de Obras Públicas), el sistema THEMIS (Sistema

93. Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_chi.htm

94. Véase Cuenta Pública del Contralor General 2012, pp. 72 a 77, disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chi_cue12.pdf

95. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 18 y 19, *supra* nota 77.

96. *Ibid.*, pp. 22 y 23, *supra* nota 77.

97. Véase: <http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page.1303.html?id=CH-T1090>

98. Disponible en: <http://goo.gl/mcrgl>

de Gestión y Tramitación Electrónica de los Juicios de Cuentas) y el sistema GEA (Sistema de Gestión Institucional).^{99/}

[105] La CGR, para suministrar información a los ciudadanos acerca de sus objetivos y funciones y darles a conocer los procedimientos establecidos para su cumplimiento, cuenta, en primer lugar, con el sitio *web* institucional www.contraloria.cl, en el que se describen las funciones de la entidad, acceso libre a sus bases de legislación, jurisprudencia e informes de auditoría y de seguimiento e investigaciones especiales. Este sitio cuenta también con una sección para consultar el estado de tramitación de requerimientos y un enlace al sitio “CGR Transparente”, que permite la consulta de información institucional y de sus funcionarios, así como canalizar demandas ciudadanas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia, así como al portal “Contraloría y Ciudadano”^{100/}, que permite a la ciudadanía colaborar con la labor de fiscalización de la CGR, a través del envío de sugerencias de fiscalización y denuncias a través de los formularios en línea diseñados para tales propósitos. La CGR cuenta, además, con canales de información en redes sociales, tales como *Facebook*, *Twitter*, *Youtube* y *Flickr* y la posibilidad de compartir y seguir información de interés a través del sistema *RSS*.^{101/}

[106] En segundo lugar, dentro de la estructura de la CGR se conformó el Módulo de Atención al Usuario (ATUS)^{102/}, cuya función principal es brindar ayuda en la elaboración de los requerimientos y orientación jurídica especializada, en modalidad presencial y telefónica. Finalmente, de acuerdo con lo expresado por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario^{103/}, la CGR participa y desarrolla, según corresponda, en iniciativas que permiten un mayor acercamiento y conocimiento de la ciudadanía con respecto a sus labores y funciones.

[107] En materia de mecanismos de control interno, la CGR cuenta con la Unidad de Auditoría Interna creada por la Resolución CGR No. 412^{104/} de 1994, la cual establece como atribuciones de la misma evaluar el funcionamiento de los controles internos y recomendar las acciones que impliquen su mejoramiento, así como examinar que las actividades de la CGR se desarrollen de acuerdo con las políticas, planes y programas aprobados, proponiendo para ello las medidas correctivas o estudios técnicos pertinentes, verificando, además, la legalidad, eficacia y eficiencia con que se administran los recursos de la institución. En el marco de la visita *in situ*, la representación de la CGR complementó la anterior información señalando que este Unidad viene ejecutando diferentes tipos de auditorías planificadas y no planificadas, en las que se utiliza una metodología similar a la usada para las auditorías externas que desarrolla la propia CGR. Anualmente, se señaló, esta Unidad elabora entre 10 y 14 auditorías internas y a partir de diciembre de 2012, se hacen públicas, a través del sitio *web* de la CGR.

99. La descripción de los sistemas informáticos administrados por la CGR puede consultarse en la respuesta de la CGR el cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 23 a 25, *supra* nota 77.

100. Disponible en: <http://goo.gl/1LxO5>

101. Con fecha 6 de septiembre de 2013 el Estado analizado puso de presente el reciente establecimiento de un enlace electrónico dentro del portal institucional que posibilita la presentación en línea de reclamos, sugerencias y/o felicitaciones por parte de los particulares en relación con las funciones que cumple la CGR y sobre el desempeño del personal a su servicio, disponible en:

<http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Portal/Servicios/opineServiciosCGR.html>

102. Véase: <http://goo.gl/5wOch>

103. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 26, *supra* nota 77.

104. Véase: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ch1_res412.pdf

[108] Asimismo, en virtud de la Resolución Exenta No. 04770^{105/} de 2011, la CGR cuenta con las Unidades de Gestión de Procesos creadas en cada una de las Contralorías Regionales, divisiones y demás dependencias del nivel central de la CGR, con el objeto de apoyar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional en el marco de un modelo de gestión por resultados, a través de la definición de metas y convenios de desempeño, gestión de procesos y control de gestión. Durante la visita *in situ*, la representación de la CGR complementó la anterior información señalando que estas Unidades, dependientes jerárquicamente del Contralor Regional o Jefe de División y técnicamente de la Secretaría General de la CGR, emiten informes periódicos (ficha nacional, ficha unidad, informes de documentos pendientes e informes de rendimiento) que permiten presentar de manera agregada la situación de las unidades, en conjunto e individualmente, así como de los funcionarios en cuanto al despacho, carga laboral, documentación pendiente, tiempos promedio, programas y horas ejecutadas y resultado de las metas correspondiente.

[109] Respecto de los mecanismo de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y el desempeño de sus funcionarios, la CGR cuenta con la Unidad de Atención a Usuarios (en adelante “ATUS”), dependiente de la División de Coordinación e Información Jurídica, la cual recibe los reclamos, quejas o denuncias que el público presenta en el “buzón” de ATUS o en la Oficina General de Partes a través de los formularios establecidos especialmente para ello. No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR complementó lo anterior precisando que tales reclamos también pueden presentarse de manera verbal ante el jefe directo u otra jefatura jerárquica de la CGR o a través del sitio *web* “Contraloría y Ciudadano” o en las cuentas en *Facebook* y/o *Twitter* de la institución.

[110] Sobre la manera que se garantizan los recursos presupuestarios, el artículo 149 de la Ley No. 10.336 dispone que “*el Contralor General, encuadrándose dentro de las cantidades que la Ley General de Presupuestos y leyes especiales contemplan para el mantenimiento de la Contraloría fijará anualmente el presupuesto de entradas y gastos del Servicio y las remuneraciones del personal de su dependencia, con aprobación del Presidente de la República.*” Al respecto, el Estado analizado señala en su respuesta^{106/} al cuestionario que, “*en su calidad de órgano de la Administración del Estado, la CGR no actúa discrecionalmente en lo relativo a su ejecución presupuestaria. Por el contrario, se somete a las mismas disposiciones normativas que rigen para el resto del sector público, como la ley anual de presupuestos, el decreto ley No. 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado..., el Clasificador Presupuestario... y el resto de la normativa presupuestaria y contable vigente en la materia.*” En el sitio *web* de la CGR, en su apartado “CGR Transparente” pueden consultarse, entre otros aspectos, los presupuestos asignados e informes sobre su ejecución de los años 2009 a 2013^{107/}.

[111] En relación con los mecanismo de coordinación para armonizar las funciones de la CGR con las de otros órganos del Estado, además de lo dispuesto en los artículos 102, 117, 128, 139 y otros relacionados de la Ley No. 10.336 que establecen la coordinación obligatoria entre la CGR y otros entes públicos para el cumplimiento de ciertas funciones, la CGR, como se mencionó en relación con el MP, hace parte de la mesa de coordinación interinstitucional denominada “Frente Anticorrupción”^{108/}, así como del proyecto denominado “Uso Compartido de Información Para Mejorar el Combate de la Corrupción en Chile”^{109/}. Igualmente, la CGR ha suscrito un convenio de

105. Véase: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_res4770.pdf

106. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 29, *supra* nota 77.

107. Véase: <http://goo.gl/sNfHh>

108. Véase *supra* nota 44.

109. Véase *supra* nota 43.

colaboración con la UAF, para facilitar la generación y procesamiento de información patrimonial de las llamadas personas políticamente expuestas^{110/}, además de otros convenios de diversa índole celebrados con instituciones tales como el Servicio de Registro Civil e Identificación y ChileCompra. Por otra parte, la CGR también participa en el desarrollo de instancias de cooperación conjunta con otros organismos del Estado, como la Fiscalía Nacional Económica, en el desarrollo de herramientas para la detección oportuna de prácticas de colusión en licitaciones de abastecimiento público. Sobre el particular, el Estado analizado suministró en su respuesta^{111/} al cuestionario algunas cifras de ejemplos de colaboración con otras instituciones públicas.

[112] Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley No 10.336, el Contralor General elaborará y dará anualmente cuenta pública a los Poderes del Estado y a la comunidad en general sobre la gestión de la CGR correspondiente al año anterior. Dicha cuenta deberá contener, entre otros aspectos, un resumen de las actividades desarrolladas, así como el estado financiero de la institución y sobre aquellas materias que se estime conveniente incluir. Del mismo modo, de acuerdo con el mismo artículo, las Contralorías Regionales darán cuenta pública ante el Gobierno Regional que les corresponda. La información necesaria para estos propósitos es provista por las diferentes divisiones y unidades de la CGR, con base en las estadísticas que se elaboran por parte de sus respectivas Unidades de Gestión de Procesos a través de sistemas informáticos de la CGR aludidos con antelación. Las cuentas públicas del Contralor General y los contralores regionales se encuentran publicadas en el sitio *web* de la CGR^{112/}.

[113] En relación con lo anterior, la representación de la CGR en el marco de la visita *in situ* compartió un enlace^{113/} respecto de su participación en un proyecto regional que promueve prácticas en materia de transparencia, participación y *accountability* en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) de América Latina, con el fin de fortalecer sus capacidades e impacto en el ejercicio del control público, en el marco de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

2.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[114] La CGR cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 2.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[115] En primer lugar, con relación a la función contable que cumple la CGR por mandato constitucional y legal, principalmente en cuanto a su responsabilidad de regular, de manera exclusiva, la contabilidad general del sector público e interpretar con fuerza obligatoria las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que incidan en la contabilización de operaciones determinadas, el Comité, con base en la información que tuvo a su disposición, advierte la existencia de un proceso de convergencia^{114/} que viene ejecutando la División de Análisis Contable de la CGR hacia las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP)^{115/} con el objeto de fortalecer la

110. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_res535.pdf

111. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 31 y 32, *supra* nota 77.

112. Véase: <http://goo.gl/wz0DG>.

113. Véase <http://acij.org.ar/blog/2011/11/10/entidades-de-fiscalizacion-superior-en-latinoamerica>.

114. Véase <http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/ExtranetCGR/NICSP>.

115. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) son emitidas por el *International Public Sector Accounting Standards Board* (www.ifac.org), para el registro de hechos económicos y presentación de estados financieros.

transparencia, probidad y rendición de cuentas de los recursos asignados a dicho sector, lo cual contribuye al logro de los propósitos de la Convención contenidos en el párrafo 9º de su artículo III.

[116] Al respecto, el Comité estima conveniente que el Estado analizado continúe desarrollando el proceso de armonización de la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación (en adelante “SICOGEN”), con los estándares internacionales de contabilidad pública, que viene ejecutando la CGR, lo cual, entre otros beneficios, contribuiría a aumentar la transparencia de la gestión financiera del Estado. (Véase recomendación 2.4.1 del capítulo II de este informe).

[117] En segundo lugar, el Comité toma nota del conjunto de sistemas informáticos con que cuenta la CGR para el cumplimiento de sus funciones, los cuales han sido descritos de manera sucinta en la sección anterior. A este respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR puso de presente la existencia de una serie de proyectos tendientes a implementar nuevas herramientas informáticas y expandir las existentes con la finalidad de continuar desarrollando una plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la institución y hacer más eficiente y expedita la entrega y ejecución de sus servicios. En este sentido, el Comité releva la importancia de que se continúen desarrollando y promoviendo proyectos informáticos que complementen a los existentes, teniendo en cuenta la utilidad de la tecnología para facilitar, entre otros aspectos, las labores de prevención y detección de prácticas corruptas. El Comité hará una recomendación al respecto. (Véase recomendación 2.4.2 del capítulo II de este informe).

[118] En tercer lugar, el Comité reconoce la reciente puesta en línea del portal “Contraloría y Ciudadano” (<http://goo.gl/1LxO5>), en el cual, como se mencionó en la sección anterior, se destacan los enlaces o componentes que permiten presentar de manera virtual sugerencias de fiscalización, o bien denuncias sobre hechos que podrían ameritar una investigación por parte de la CGR. No obstante, con ocasión de la visita *in situ*, se observó la necesidad de continuar adoptando medidas que brinden mayor promoción y difusión a este portal y a los citados componentes. (Véase recomendación 2.4.3. del capítulo II de este informe).

[119] En este mismo orden de ideas y con relación al mecanismo de rendición de cuentas con que cuenta la CGR, con ocasión de la visita *in situ*, se hizo alusión a la posibilidad de complementar el mismo a través de mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana, que posibiliten a los ciudadanos formular preguntas y comentarios, en plazos determinados, a modo que la institución pueda brindar oportunamente respuestas a las mismas y con ello fortalecer aún más las relaciones de los ciudadanos con el quehacer de la CGR. (Véase recomendación 2.4.4. del capítulo II de este informe).

[120] Finalmente, como quedó consignado en la sección anterior, la asignación y ejecución del presupuesto de la CGR se rige, entre otras disposiciones, por las contenidas en la Ley General de Presupuestos, las leyes anuales presupuestales y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. No obstante, el Estado analizado en su respuesta^{116/} al cuestionario pone de presente como una dificultad para el logro de los propósitos de la CGR, los eventuales riesgos que supone que *“la formulación de su presupuesto es hecha por su principal sujeto de fiscalización, esto es, el Ejecutivo a través de la Dirección de Presupuestos, y luego enviada al Congreso para su análisis, quienes sólo tienen la facultad de aprobar o rechazar, dado que la iniciativa en estas materias es del Presidente de la República”*, estimando, además, *“que el procedimiento en el caso de la CGR, debiese ser que ella proponga su presupuesto y el Congreso decida, profundizando, asimismo, la autonomía de la ejecución de dicho presupuesto.”*

116. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 42 y 43, *supra* nota 77.

[121] En relación con lo anterior y con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR señaló que si bien se tienen en cuenta sus observaciones durante el proceso de formulación del Presupuesto General de la Nación, no considera conveniente que esta situación continúe en el tiempo, toda vez que, antes de la modificación de 1967, el DFL No. 42^{117/} de 1959 establecía un financiamiento mínimo equivalente al 0,39% del total del presupuesto público anual para la CGR y, en la actualidad, con base en la información suministrada en la visita *in situ*, la relación porcentual entre el presupuesto de la CGR en relación con el presupuesto nacional, oscila entre el 0,14% y el 0,18% en los últimos 7 años. El Comité formulará una recomendación teniendo en cuenta lo anterior. (Véase recomendación 2.4.5. del capítulo II de este informe).

2.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[122] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a la CGR, entre la que se destaca la siguiente:

[123] En primer lugar, en la respuesta^{118/} del Estado analizado al cuestionario, se ponen de presente las acciones que ha venido desarrollando la CGR para prevenir prácticas corruptas en los servicios públicos, tales como las acciones de difusión de la probidad y ética públicas, principalmente a través de su sitio *web* institucional, en el cual, como se ha señalado, se ponen a disposición de la ciudadanía los productos y servicios relacionados con las actividades propias de la CGR, los cuales, en su mayoría, apuntan a combatir la corrupción. Asimismo, el Estado analizado señala las acciones de capacitación externa que realiza la institución para los funcionarios de las entidades sujetas a su fiscalización, así como el conjunto de seminarios y foros que, en coordinación con otros organismos nacionales e internacionales, ha desarrollado la CGR para la promoción de la ética pública.

[124] Igualmente, en su respuesta^{119/} al cuestionario, el Estado analizado señala el número de pronunciamientos que ha emitido la CGR en ejercicio de su función jurídica en materia de probidad y lucha contra la corrupción, transparencia y publicidad, delitos funcionarios, idoneidad moral, conflictos de intereses y otros relacionados con desviación de poder, incluyendo información sobre el número de consultas y requerimientos planteados a la CGR de conformidad con la Ley de Transparencia.

[125] Del mismo modo, la CGR viene desarrollando una serie de actividades tendientes a fortalecer su relacionamiento con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, a través de iniciativas tales como el proyecto “*No mancho mi conciencia -Vivo sin corrupción*”^{120/} con el PNUD con el fin de incentivar a la sociedad civil a participar en la prevención de la corrupción, para lo cual se pretende dotarla de herramientas necesarias para que ejerza un rol activo en esta tarea, así como la creación del portal “Contraloría y Ciudadano” que permite a la sociedad civil efectuar denuncias y sugerencias de fiscalización en línea.

[126] El Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que la CGR ha desarrollado acciones de prevención de actos de corrupción, en cumplimiento de las funciones que le competen en esta materia.

117. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley42.pdf

118. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 33 a 37, *supra* nota 77.

119. *Ibidem*.

120. Véase: <http://goo.gl/gddIV>

[127] En segundo lugar, en relación con la labor de detección de prácticas corruptas que realizada la CGR a través de la instrucción de sumarios administrativos y la ejecución de auditorías e investigaciones especiales.

[128] En su respuesta^{121/} al cuestionario el Estado analizado señala que en el período 2007-2011 la CGR substanció 1,313 sumarios administrativos por parte de la CGR, de los cuales, al 31 de diciembre de 2011, 157 (0,12%) se encontraban pendientes de resolución:

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS SUBSTANCIADOS	AÑO				
	2007	2008	2009	2010	2011
Finalizados en el periodo	45	59	107	155	181
Pendientes al 31 de diciembre del mismo año	95	131	160	223	157
TOTAL	140	190	267	378	338
<i>Fuente: Cuentas Públicas CGR: Años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011</i>					

[129] En relación con los anteriores sumarios, la representación de la CGR suministró la siguiente información en el marco de la visita *in situ*:

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS	AÑO					Total
	2007	2008	2009	2010	2011	
Iniciados en el periodo	96	125	148	131	204	704
En curso (pendientes al 31 de diciembre de 2011)					157	157
Suspendidos por cualquier razón*						0
Prescritos						0
Archivados sin adoptar decisión de fondo*						0
En condiciones de permitir que se adopte una decisión de fondo**	45	59	107	155	181	547
Remitidos a instancia competente para adoptar decisión						Todos
* La legislación no contempla estas figuras						
** Considera los sumarios finalizados, esto es, aquellos que cuentan con propuesta de sanción o sobreseimiento						

[130] En lo que respecta a las auditorías e investigaciones especiales, el Estado analizado señala en su respuesta que en el período 2007-2011 se practicaron 9,434 auditorías y 6,026 investigaciones especiales. Los resultados vinculados a estas actividades se manifestaron en la deducción de 698 reparos ante el Juzgado de Cuentas y en la formulación de 120 denuncias ante los organismos públicos correspondientes en el mismo período:

121. Disponible en: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=4236>

ACTIVIDADES DE CONTROL EXTERNO	AÑO				
	2007	2008	2009	2010	2011
Auditorías	1,700	2,247	2,257	2,128	1,102
Investigaciones especiales	1,249	1,348	1,035	1,096	1,298
TOTAL	2,949	3,595	3,292	3,224	2,400

ACCIONES DERIVADAS	AÑO				
	2007	2008	2009	2010	2011
Reparos ante el Juzgado de Cuentas	110	111	149	186	142
Denuncias ante el MP y otros organismos	63	26	9	12	10
TOTAL	173	137	158	198	152

Fuentes: 1.- Sistema de Tramitación de Juicios de Cuentas, Themis. 2.- Cuentas Públicas CGR: Años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

[131] El Comité estima que la anterior información sirve para demostrar que la CGR ha desarrollado acciones de detección de actos de corrupción, en cumplimiento de las funciones de auditoría que le competen.

[132] En tercer lugar, en relación con las funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan responsabilidad administrativa o civil, la CGR está facultada para imponer directamente sanciones a aquellas personas que incurran en determinadas infracciones normativas, que involucren dichas responsabilidades. Al respecto, corresponde a la CGR instruir y resolver investigaciones sumarias por infracciones al Decreto Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales^{122/} No. 799 de 1974, pudiendo aplicar sanciones que van desde la censura hasta la destitución. En este sentido, en su respuesta^{123/} al cuestionario, el Estado analizado señala que el período 2007-2011 se instruyeron 674 procesos disciplinarios referidos al dicho Decreto Ley, verificándose 31 procesos pendientes al 31 de diciembre de 2011:

PROCESOS DISCIPLINARIOS POR INFRACCIÓN AL DECRETO LEY No. 799	AÑO				
	2007	2008	2009	2010	2011
Finalizados	32	50	97	75	125
Pendientes al 31 de diciembre del mismo año	38	85	67	74	31
TOTAL	70	135	164	149	156

Fuente: Cuentas Públicas CGR: Años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

[133] En relación con lo anterior, la representación de la CGR suministró la siguiente información en el marco de la visita *in situ*:

122. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_dec799.pdf

123. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 39, *supra* nota 77.

INVESTIGACIONES SUMARIAS (Decreto Ley No. 799 de 1974)	AÑO					Total	Observaciones
	2007	2008	2009	2010	2011		
No. de casos investigados listos para decisión	32	50	97	75	125	379	Finalizados
No. de decisiones adoptadas	32	50	97	75	125	379	
Decisiones con imputación de responsabilidad o sanción	30	40	79	75	78	302	
Decisiones sin imputación de responsabilidad o sanción	2	10	18	0	47	77	
Sobreseídas por prescripción	0	0	0	0	0	0	

[134] El Comité estima que la anterior información permite demostrar que la CGR ha realizado investigaciones y ha impuesto sanciones disciplinarias en cumplimiento de las funciones que le competen en relación con el Decreto Ley No. 799 de 1974.

[135] Finalmente, en relación con las funciones de sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, con base en la respuesta^{124/} del Estado analizado al cuestionario, en el periodo 2007-2011 se iniciaron 698 juicios de cuentas, de los cuales 359 derivaron de exámenes de cuentas y los 339 restantes de un procedimiento sumarial. Quitando los casos en que los reparos se sustentaron en las conclusiones de procedimientos sumariales referidos a daños en vehículos fiscales y pérdida de especies de igual naturaleza, se dictaron en el mismo periodo 93 sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas, mediante las cuales se ordenó reintegrar el equivalente a 28.069,48 unidades tributarias mensuales^{125/} (en adelante “UTM”) a lo que se agrega el equivalente a 2.986.52 UTM ingresadas al erario público por los demandados durante el referido periodo, antes de dictarse el fallo.

[136] Asimismo, de acuerdo con lo señalado en la respuesta al cuestionario, el Contralor General, en uso de las facultades que le conceden los artículos 125 y 128 de la Ley No. 10.336, ordenó reintegrar a través del descuento de remuneraciones, el equivalente a 8.453,45 UTM y en los demás casos, solicitó al Consejo de Defensa del Estado perseguir el cumplimiento de las sentencias por el equivalente a 48.982,73 UTM, en el mismo periodo.

[137] Con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR complementó anterior información señalando que en relación con el total de órdenes de descuento de remuneraciones dispuestas por el Contralor General, ingresó al patrimonio público la suma equivalente a 3.787,97 UTM entre 2007 y 2011, suma que asciende a los \$321.997,11^{126/} dólares estadounidenses.

[138] El Comité estima que la anterior información permite demostrar que la CGR ha desarrollado sus atribuciones de sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad patrimonial en cumplimiento de su función jurisdiccional.

124. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 40 a 42, *supra* nota 77.

125. 1 UTM = \$39.966 pesos chilenos, al mes de noviembre de 2012. 480,59 pesos chiles = 1 dólar estadounidense, al primer día hábil de noviembre de 2012. (Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, nota al pie 40, *supra* nota 77).

126. Según valor dólar (\$472,03) primer día hábil de abril de 2013.

2.4. Conclusiones y recomendaciones

[139] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la CGR en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[140] La República de Chile ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la CGR, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 2 del capítulo II de este informe.

[141] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 2.4.1. Continuar desarrollando el proceso de armonización de la normativa del SICOGEN, con los estándares internacionales de contabilidad pública, teniendo en cuenta el Plan de Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) que viene ejecutando la CGR. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.2. Continuar desarrollando y promoviendo proyectos informáticos que complementen a los existentes, que faciliten, entre otros aspectos, las labores que desarrolla la CGR en materia de prevención y detección de prácticas corruptas. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.3. Continuar adoptando medidas que brinden una mayor promoción y difusión al portal “Contraloría y Ciudadano” y a sus componentes que permiten presentar, de manera virtual, sugerencias de fiscalización, o bien denuncias sobre hechos que podrían ameritar una investigación por parte de la CGR. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.4. Adoptar las medidas pertinentes que complementen los procesos de rendición de cuentas de la CGR con mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana. (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).
- 2.4.5. Adoptar las medidas pertinentes para que la CGR pueda contar con una mayor ingerencia y autonomía en la determinación y manejo de sus recursos presupuestarios (Véase sección 2.2 del capítulo II de este informe).

3. PODER JUDICIAL

3.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[142] El PJUD cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[143] De conformidad con los artículos 76 constitucional y 1º de la Ley que aprueba el Código Orgánico de Tribunales No. 7.421^{127/} (en adelante “COT”), corresponde al PJUD la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgado, a través de los

127. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_cod_org.pdf

tribunales de justicia^{128/} que lo conforman y, con base en los artículos 2° y 3° del COT, éstos podrán intervenir en todos aquellos actos no contenciosos en que una ley expresa así lo requiera, y tendrán además las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que a cada uno de ellos asigna el COT.

[144] Asimismo, de acuerdo con el artículo 76 constitucional y 12 del COT, el PJUD es un órgano autónomo e independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones y, de acuerdo con el artículo 4° del COT, tiene prohibido mezclarse en las atribuciones de los otros Poderes Públicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en la ley.

[145] En cuanto a los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia, el artículo 93, numeral 12, constitucional dispone que el Tribunal Constitucional resolverá las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado. Empero, el artículo 191 del COT dispone que será la CSJ la que resuelva tales contiendas. Ahora bien, si conforme a lo dispuesto en el artículo 53, numeral 3°, constitucional correspondiere al Senado resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades políticas o administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán resueltas por la CSJ aquellas que tengan lugar entre los tribunales inferiores y esas autoridades. En cuanto a las contiendas que se susciten entre tribunales judiciales de igual o distinta jerarquía, éstas serán resueltas de acuerdo con las reglas consignadas en el título VII del COT.^{129/}

[146] Respecto al ámbito de sus funciones, el artículo 5° del COT señala que corresponderá a los tribunales que conforman al PJUD conocer de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes.

[147] En relación con la manera en que se adoptan sus decisiones, el PJUD resuelve, por regla general, en doble instancia, más un tribunal de casación que recae en la CSJ. La primera instancia corresponde a los juzgados de letras en lo civil, a los juzgados orales en lo penal, siendo la segunda instancia de competencia de la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, para hacer efectivas sus decisiones, los artículos 76, numerales 3° y 4° constitucional y 11 del COT, señalan la facultad del PJUD de impartir órdenes directas a las fuerzas públicas o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren, así como la obligación de la autoridad requerida de cumplir el mandato judicial sin calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución a ejecutar.

[148] La CSJ es la máxima autoridad del PJUD y, con base en el artículo 83 constitucional, corresponde a ésta la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los

128. De acuerdo con el artículo 5° del COT, integran al PJUD, como tribunales ordinarios de justicia, la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Presidentes y Ministros de Corte, los Juzgados de Letras, los Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Asimismo, forman parte del PJUD, como tribunales especiales, los Juzgados de Familia, los Juzgados de Letras del Trabajo, los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, y los Tribunales Militares en tiempo de paz.

129. Con fecha 6 de septiembre de 2013, el Estado analizado puso de presente la existencia de más de veinte sentencias dictadas por tribunales judiciales y la sentencia de la CSJ No. 98 de 2008 que se resuelve, entre otros aspectos, que “...en el evento de estimarse efectivamente trabada una auténtica contienda de competencia, no es esta Corte Suprema el tribunal llamado por la ley a dirimirla, pues de conformidad con lo dispuesto en el No. 12 del artículo 93 de la Constitución Política de la República, es atribución del Tribunal Constitucional resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales inferiores de justicia, cuyo es el caso de autos. Norma constitucional que por ser de mayor jerarquía y tener aplicación directa por los tribunales, correspondería tenerla en consideración, en su caso”. Disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_chi.htm

tribunales electorales regionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del COT, la CSJ es un tribunal colegiado, compuesto de 21 miembros, denominados ministros, uno de los cuales es su Presidente, quien es designado por sus pares y dura dos años en dichas funciones, no pudiendo ser reelecto. De conformidad con el artículo 78 constitucional, los ministros de la CSJ son designados por el Presidente de la República, quien, con el acuerdo del Senado, los elige de una nómina de cinco personas que en cada caso propone la CSJ. De los 21 ministros, 16 deben provenir de la carrera judicial y 5 deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener por lo menos 15 años con título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señala el artículo 254 del COT. De acuerdo con el artículo 80, numeral 2º, constitucional, los ministros permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento y hasta cumplir 75 años de edad, limitación que no rige respecto del Presidente, quien, como se señaló, permanecerá en su cargo hasta el término de su periodo.

[149] En cuanto a las instancias competentes para exigir responsabilidad y decidir sobre su permanencia en el cargo, la CSJ puede declarar por la mayoría de sus miembros que los ministros que no han tenido un buen comportamiento sean removidos de sus cargos a requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o bien de oficio, de conformidad con los artículos 80, numeral 3º, constitucional y 332, numeral 3º, del COT. Asimismo, es aplicable a los ministros de la CSJ el procedimiento de acusación constitucional, descrito en la sección 2.1 de este informe con relación a la figura del Contralor General, por “notable abandono de deberes” de acuerdo con los artículos 52, numeral 2º, inciso c), y 53, numeral 1º, constitucionales y 333 del COT.

[150] Con relación a la determinación y provisión de recursos humanos, el sistema de nombramiento del personal judicial está regulado principalmente por los artículos 78 constitucional y 263 y siguientes del COT. Al respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del PJUD señaló que, de acuerdo con el contenido de estas disposiciones, el personal del PJUD está agrupado dependiendo de sus funciones y responsabilidades, en un Escalafón General de Antigüedad, que a su vez se divide en dos ramas: el Escalafón Primario, subdividido en siete categorías^{130/}, y el Escalafón Secundario, subdividido en series y categorías^{131/}, existiendo también un Escalafón Especial de Personal Subalterno o Escalafón de Empleados^{132/}. Estos escalafones, se señaló, se elaboran por la CSJ de conformidad con el artículo 270 del COT y con la finalidad de responder a los requisitos de nombramiento de los funcionarios judiciales, de promoción a una categoría superior por años de servicio y de preferencia por antigüedad en la integración de ternas o quinas para nombramientos en categorías superiores.

[151] Para proceder al nombramiento de cargos en el Escalafón Primario, el artículo 279 del COT dispone las bases, llamado a concursos, plazos y condiciones para formar las listas que deben ser enviadas al Presidente de la República para los efectos previstos en los artículos 78 constitucional y 263 del COT. Por su parte, los artículos 260, 269, 279, 281, 288, 289 bis, 294, 295 y 499, entre otros aplicables del COT establecen las bases generales del procedimiento de reclutamiento y selección de personal para cargos de los Escalafones Secundario y de Empleados del PJUD. Al respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del PJUD precisó que de conformidad con las leyes que lo rigen, todos sus funcionarios ingresan a través de un concurso de méritos, salvo aquellos que sean eminentemente de confianza.

130. Véase: <http://goo.gl/HpWiz>

131. Véase: <http://goo.gl/1krb6>

132. Véase: <http://goo.gl/Ig9Zi>

[152] Al respecto, es pertinente señalar que el artículo 2º, inciso b), del Decreto Ley que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia^{133/} No. 3.346 dispone, como una de las facultades de esta institución, asesorar al Presidente de la República en los nombramientos de jueces, funcionarios de la administración de justicia y demás empleados del PJUD y el ejercicio de la atribución especial de velar por la conducta ministerial de los jueces.

[153] Por otra parte, el título XIV del COT regula la Corporación Administrativa del Poder Judicial (en adelante “CAPJ”), la cual, de acuerdo con el artículo 506 de dicho ordenamiento, ejerce la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento del PJUD. La CAPJ, además de las disposiciones previstas en el COT, se rige por los autos acordados que al efecto dicte la CSJ y las normas sobre administración financiera del Estado aplicables. Entre sus atribuciones, el mismo artículo 506 señala que la CAPJ dicta las políticas de selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y de personal, de indicadores de gestión, de diseño y análisis de la información estadística.

[154] Asimismo, de conformidad con lo previsto en la Ley No. 20.628^{134/} que modifica el artículo 101 del COT, conocida como “Ley de Juez Destinado”, la CAPJ, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva, elabora los informes previos que permiten a la CSJ destinar transitoriamente a jueces en otros tribunales cuando existan desequilibrios entre las dotaciones de jueces y cargas de trabajo.

[155] Los artículos 252, 253, 254, 259 y 295 del COT, establecen, respectivamente, los requisitos para acceder a los cargos de jueces de letras, ministro o fiscal judicial de Corte de Apelaciones, ministros de la CSJ, así como a los cargos del Escalafón del Personal de Empleados. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades del personal al servicio del PJUD está previsto principalmente en lo dispuesto por los artículos 251 y 256 a 261 del COT.

[156] En relación con el régimen disciplinario de los funcionarios judiciales, el PJUD cuenta con una Fiscalía Judicial^{135/}, dentro de la cual, al Fiscal Judicial de la CSJ, le corresponde, entre otras atribuciones previstas en el COT, vigilar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y la conducta funcionaria de los demás tribunales y empleados del PJUD, excepto los ministros de la CSJ. Al respecto, dará cuenta a la CSJ para que ésta ejerza las facultades disciplinarias que la ley le concede. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del PJUD complementó lo anterior al referirse a los procesos de fiscalización y medidas correctivas que ejecutan las Cortes de Apelaciones en relación con lo dispuesto en los artículos 535 a 539 del COT respecto de la conducta funcionaria de los miembros de ciertas categorías del Escalafón Primario y del Escalafón Secundario que ejerzan sus funciones dentro de su respectiva jurisdicción, así como el control que de acuerdo con los artículos 532 y 564 del COT realizan también los jueces de letras sobre la conducta ministerial de los funcionarios y empleados del PJUD dentro de su jurisdicción.

[157] En cuanto al procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales, éste se encuentra previsto en el acuerdo del Pleno de la CSJ contenido en el Acta No. 129^{136/} del 1 de agosto de 2007.

133. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_dec3346.pdf

134. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley20628.pdf

135. Véase: http://www.poderjudicial.cl/PDF/InfoInstitucional/FISCALIAJUDICIAL.pdf?opc_menu=1&opc_item=3

136. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_acta129.pdf

[158] Al respecto, es pertinente señalar que el PJUD cuenta además con la Comisión de Ética de la CSJ, creada en virtud del acuerdo del Pleno de la CSJ contenido en el Acta No. 262^{137/} de 14 de diciembre de 2007, con el objeto de prestar cooperación a la CSJ en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento de los ministros y Fiscal del Tribunal, sin perjuicio que las faltas de orden propiamente disciplinario en que ellos pueda incurrir se investiguen y sancionen, si corresponde, a través del procedimiento regulado por el Acta No. 129-2007 antes citada.

[159] Además de lo anterior, el artículo 79 constitucional señala que los jueces serán personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia substancial de las leyes que regulan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones, y que la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad tratándose de los miembros de la CSJ. Al respecto, el artículo 324 del COT dispone que los jueces estarán sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza o gravedad de tales delitos con arreglo a lo establecido en el Código Penal, no siendo aplicable esta disposición a los miembros de la CSJ en lo relativo a la falta de observancia de las leyes que regulan el procedimiento ni en cuanto a la denegación ni a la torcida administración de la justicia.^{138/}

[160] En cuanto a la existencia de manuales u otros documentos que describan las funciones del personal judicial y de procedimientos documentados para el desarrollo de sus tareas, tanto en su respuesta^{139/} al cuestionario como en el marco de la visita *in situ*, la representación del PJUD puso de presente la emisión de los denominados “autos acordados”^{140/} por parte de los tribunales superiores de justicia, principalmente por parte de la CSJ, en uso de su facultad de superintendencia económica que le concede el artículo 82 constitucional. En este sentido, el PJUD cuenta con un amplio conjunto de autos acordados^{141/} en su mayoría relativos al modo en que los tribunales deben proceder en el conocimiento de determinadas acciones y recursos procesales.

[161] Asimismo, el PJUD cuenta con un estudio sobre “Diseño y Descripción de Cargos de los Tribunales del País” que identifica cada una de las unidades y puestos que actualmente lo componen, e incluye un manual que establece la estructura y distribución de funciones para cada tribunal, según su tipo y competencias, los flujos de trabajo, así como los requisitos mínimos que deben cumplir los ocupantes de tales cargos. El PJUD cuenta también con un Manual de Competencias y de Competencias Transversales de la CAPIJ. Todo lo anterior está disponible en el sitio web^{142/} institucional del PJUD.

137. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_acta262.pdf

138. Con fecha 6 de septiembre de 2013, el Estado analizado puso de presente que el artículo 424 del CPP, en relación con el artículo 69 del mismo ordenamiento, señala que: “La querrela de capítulos tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad criminal de los jueces, fiscales judiciales y fiscales del ministerio público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones e importaren una infracción penada por la ley”.

139. Véase respuesta del PJUD al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 12, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_poder.pdf

140. De conformidad con el Oficio No. 003354 de 30 de enero de 2001, AD 16.936, “...los autos acordados con resoluciones de carácter y efectos internos que dicta esta Corte [CSJ] generalmente relativas al más expedito y eficaz funcionamiento de los tribunales ordinarios de justicia. A veces en casos excepcionales se producen vacíos normativos, omisiones legales básicamente de naturaleza procesal, y cuando ello ocurre, esta Corte Suprema, para que los jueces puedan desempeñar en forma apropiada y en forma conducente sus labores, dicta el auto acordado supletorio necesario, el que tiene vigencia sólo hasta cuando se legisle al respecto”.

141. Véase: http://www.poderjudicial.cl/modulos/InfoInstitucional/popup_combobox1.php?opc_menu=1&opc_item=4

142. Véase: http://www.poderjudicial.cl/modulos/InfoInstitucional/INS_OrgFunciones.php?opc_menu=1&opc_item=3

[162] En materia de capacitación, el PJUD cuenta con la Academia Judicial, creada por la Ley No. 19.346^{143/} de 1994, con la finalidad de brindar formación de los postulantes a cargos del Escalafón Primario y el perfeccionamiento de todos los integrantes del PJUD. Tanto en su respuesta^{144/} al cuestionario como durante la realización de la visita *in situ*, la representación del PJUD suministró información sobre los objetivos, postulación, facultad y otros aspectos relacionados con los programas de formación^{145/}, perfeccionamiento^{146/} y habilitación^{147/} que viene desarrollando la Academia, así como sobre las acciones de colaboración que con diversas instituciones ejecuta para el cumplimiento de sus tareas y aportar mayor conocimiento y experiencia en la capacitación judicial.

[163] El PJUD, como parte de sus acciones de fortalecimiento institucional, adoptó en mayo de 2011 un “Plan Estratégico Integrado”^{148/} para el quinquenio 2011-2015 que establece los pilares en los que PJUD concentra esfuerzos para facilitar el acceso a la justicia y prestar un servicio de excelencia, fortalecer la transparencia, integridad y rendición de cuentas, así como fortalecer su carrera judicial y funcionaria a través de la mejora de los sistemas de selección, formación y capacitación, entre otros objetivos. En este contexto, el PJUD viene ejecutando^{149/}, con el apoyo del BID, un programa de fortalecimiento institucional para el desarrollo de políticas judiciales e implementación de las reformas que se vienen introduciendo en el sector justicia^{150/}, así como un programa de fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas con el apoyo del Banco Mundial^{151/}.

[164] En cuanto a la implementación de tecnologías modernas para facilitar el cumplimiento de sus labores, la representación del PJUD, en el marco de la visita *in situ*, se refirió a la prioridad que brinda al desarrollo, mejoramiento y aprovechamiento de herramientas electrónicas para apoyar su gestión y actividad jurisdiccional. En este sentido, se destacó, entre otros proyectos, la puesta en marcha y expansión de los sistemas informáticos centralizados e interconectados de tramitación de causas para los tribunales, a través de las denominadas “carpetas digitales”, que substituyen a los expedientes físicos, así como la implementación de la “firma electrónica” en atención a lo previsto en el Auto Acordado sobre Uso de Documento y Firma Electrónica en el PJUD (Acta No. 25-2009)^{152/} que adecua la normativa del PJUD a la Ley No. 19.799^{153/} de 2002. La representación del PJUD se refirió además a su participación en la red electrónica de interconexión que opera entre los órganos del Estado responsables de la administración de justicia, así como a su adscripción al sistema electrónico de compras públicas “ChileCompra”.

[165] Asimismo, el PJUD cuenta con el sitio *web* institucional www.poderjudicial.cl, a través del cual se brinda información a la ciudadanía sobre su organización, funciones y marco normativo, permite la consulta en línea del estado de tramitación de causas, así como sentencias y fallos, jurisprudencia y autos acordados; información relacionada con los escalafones de personal, dotación y escala de sueldos, publicación de concursos y licitaciones, presupuestos y su ejecución, así como la sección de “atención de usuarios”, la cual cuenta con un enlace para posibilitar la presentación en línea de sugerencias, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía, y la sección de “transparencia e

143. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley19346.pdf

144. Véase respuesta del PJUD al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 12 a 17, *supra* nota 139.

145. Véase: <http://www.academiajudicial.cl/programa-de-formacion>

146. Véase: <http://www.academiajudicial.cl/programa-de-perfeccionamiento>

147. Véase: <http://www.academiajudicial.cl/programa-de-habilitacion>

148. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_plan_est.pdf

149. Véase: <http://goo.gl/C8KWL>

150. Véase: <http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page.1303.html?id=ch-11058>

151. Disponible en: <http://goo.gl/flo6r>

152. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_acta25.pdf

153. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley19799.pdf

información” en cumplimiento a la Ley sobre Transparencia, entre otras herramientas y componentes. Sobre el particular, la representación del PJUD, en el marco de la visita *in situ*, compartió su satisfacción de que este sitio *web*, en el año 2012 por segundo año consecutivo, encabezó el “Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet”^{154/}, que desde hace ocho años elabora anualmente el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)^{155/}. Sumado a lo anterior, el PJUD cuenta también con cuentas en *Twitter*, *Facebook* y *Youtube* en las que también suministra información a los ciudadanos.

[166] Con respecto a los mecanismos de control interno, la representación del PJUD, con ocasión de la visita *in situ*, señaló, en primer lugar, que en aras de la transparencia y la adecuada utilización de los recursos públicos, somete sus estados financieros a auditorías externas de empresas especializadas contratadas por licitación pública. Para estos efectos, la CAPJ, como órgano de administración del PJUD, contempla dentro de su organigrama una Contraloría Interna, la cual, entre sus atribuciones, elabora el plan anual de auditorías financieras operativas respecto de los controles de legalidad, financieros conforme al SICOGEN, y operativos e informales, para validar la efectividad, eficiencia y oportunidad del registro de operaciones, y coordina con la empresa auditora externa la realización de las auditorías, que incluyen, entre otros aspectos, las evaluaciones de control interno de la ejecución presupuestaria y de cumplimiento de los objetivos de la CAPJ. Estos informes se presentan al Consejo Superior de la CAPJ y al Pleno de la CSJ y son publicados en el sitio *web* de la institución^{156/}. Del mismo modo, la representación del PJUD precisó que si bien la CGR no audita al PJUD, ésta, en cumplimiento de los programas anuales de fiscalización y de acuerdo con la Ley No. 10.336, examina las cuentas corrientes de los tribunales.

[167] Al igual que en el MP y la CGR, la dotación de recursos financieros del PJUD se rige por la ley presupuestaria que anualmente aprueba el Congreso Nacional con base en el proyecto de ley que se elabora con la participación del Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (en adelante DIPRES) con base en la propuesta que elabora en este caso la CAPJ, de conformidad con las disposiciones constitucionales aplicables y las contenidas en el COT y el Decreto Ley No. 1.263. La información presupuestaria del PJUD, incluyendo su ejecución, está disponible en su sitio *web*^{157/}.

[168] Con relación a la existencia de mecanismos de coordinación con otros órganos y Poderes del Estado, el PJUD ha celebrado convenios de colaboración con otras entidades públicas, tales como la Fiscalía Nacional Económica y el Banco del Estado para fortalecer ciertas capacidades de gestión administrativa, así como con la CGR para compartir bases de datos, con Carabineros sobre el banco unificado de datos criminales, con la Policía de Investigaciones, el MP, Gendarmería, entre otros. Cabe señalar que el PJUD igualmente integra la mesa de coordinación interinstitucional “Frente Anticorrupción”, descrita anteriormente en relación con otros órganos analizados en el presente informe.

[169] Por último, de conformidad con el artículo 102 del COT, el Presidente de la CSJ, con ocasión de la inauguración del año judicial que corresponda, rinde cuenta en audiencia pública con relación al trabajo efectuado por el PJUD durante el año anterior y del pendiente para el que se inicia, así como de las medidas que fuera necesario adoptar para mejorar la administración de justicia, y sobre las dudas y dificultades que hayan ocurrido al PJUD en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los

154. Disponible en: <http://goo.gl/8uY2g>

155. Véase: <http://www.cejamericas.org>

156. Véase: <http://goo.gl/16Nq1>

157. Véase: <http://goo.gl/CtQJr>

vacíos que se denoten en ellas. Para estos efectos, los tribunales, cortes, unidades y demás dependencias del PJUD suministran la información correspondiente al Presidente de la CSJ previa solicitud. La ceremonia de rendición de la cuenta pública es transmitida en vivo a través del sitio *web* institucional, y el documento que la contiene y sus anexos se publican en el Diario Oficial y en la Gaceta de los Tribunales, así como en el sitio *web*^{158/} del PJUD.

3.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[170] El PJUD cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 3.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[171] En primer lugar, en relación con el nombramiento de los ministros de la CSJ que, como se señaló en la sección anterior, involucra la participación de los tres Poderes del Estado, en cuanto que el PJUD nombra, el Presidente de la República nombra (con la asesoría del Ministro de Justicia), y el Senado ratifica o rechaza dicho nombramiento según corresponda, el Comité subraya la importancia de que este proceso se lleve a cabo en tiempos razonables para que este máximo tribunal jurisdiccional cuente con la dotación o integración completa de sus miembros y pueda cumplir a cabalidad las funciones que por mandato constitucional y legal le competen, principalmente aquellas relacionadas con el juzgamiento de las prácticas corruptas. En este sentido, el Comité formulará una recomendación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que en su alocución introductoria con ocasión de la inauguración del Año Judicial 2013, el Presidente de la CSJ señaló que *“resulta prioritario que el procedimiento para proveer los cargos de ministros de la Corte Suprema se desarrolle en tiempos razonables. Su demora excesiva se traduce en que el máximo Tribunal en largos periodos no cuente con su dotación completa, lo que no es conveniente para su correcto funcionamiento...”*^{159/} (Véase recomendación 3.4.1. del capítulo II de este informe).

[172] En segundo lugar, con relación al régimen sobre la manera en que se determinan los recursos humanos y se proveen los mismos, el Comité estima conveniente insistir en la necesidad de continuar con la tarea de fortalecer, con base en el mérito y en los principios de equidad, publicidad y eficiencia consagrados en la Convención, los sistemas y procesos de selección de servidores públicos en la rama judicial, principalmente sobre los cargos de personal a contrata y en la necesidad de establecer un régimen de recursos de impugnación para los postulantes, ya sean internos o externos, en las distintas etapas de tales procesos. El Comité no formulará recomendaciones sobre el particular, sino que reitera sus observaciones y aquellas contenidas en el Informe de la Segunda Ronda^{160/}, teniendo en cuenta que estos aspectos, entre otros, fueron analizados detalladamente en el mismo.

[173] En tercer lugar, el Comité reconoce como una medida para asegurar la dotación de recursos humanos necesarios para el funcionamiento del PJUD, la relativa reciente promulgación de la Ley No. 20.628, señalada en la sección anterior, que faculta a la CSJ a trasladar a jueces desde tribunales con una menor carga laboral hacia aquellos que estén más sobrecargados. Sin embargo, teniendo

158. Véase: <http://goo.gl/pYrM8>

159. Véase “Discurso de Inauguración del Año Judicial 2013” del Presidente de la CSJ, p. 49, disponible en: <http://goo.gl/pYrM8>

160. Véase el “Informe relativo a la implementación en la República de Chile de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en la Segunda Ronda, y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en la Primera Ronda”, pp. 11 a 14, 19 y 44, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_chl_sp.pdf

presente lo manifestado por la representación del PJUD en el marco de la visita *in situ* sobre el déficit actual aproximadamente del 10% de jueces que obliga a que año tras año se deban realizar labores de dotación transitoria de funcionarios judiciales y se potencie el uso de los denominados tribunales itinerantes, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.2. del capítulo II de este informe).

[174] En cuarto lugar, el Comité toma nota de las tareas de capacitación que a través de los programas de formación, perfeccionamiento y habilitación, descritos en la sección anterior, viene desarrollando la Academia Judicial para la promoción de los servidores del PJUD y el adecuado ejercicio de sus funciones. Al respecto, el Comité estima conveniente continuar complementando estos programas a través de la inclusión de cursos y/o módulos en materia de ética, probidad y transparencia, que incluyan, entre otros aspectos, la promoción, conocimiento y el debido cumplimiento de la normativa deontológica que rige al PJUD, tales como los “Principios de Ética Judicial”^{161/} y en este sentido formulará una recomendación (Véase recomendación 3.4.3. del capítulo II de este informe).

[175] En quinto lugar, como se describió en la sección anterior, la asignación y ejecución del presupuesto del PJUD se rige, entre otras disposiciones, por las contenidas en la Ley General de Presupuestos, las leyes anuales presupuestales y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Al respecto, la representación del PJUD, con ocasión de la visita *in situ*, manifestó, como una tarea pendiente, alcanzar una mayor autonomía en el ámbito de la administración de los recursos financieros que le son asignados, que le permita un margen de maniobra y con ello continuar con sus proyectos de modernización. Para lo cual resulta necesario que se adopten disposiciones que le permitan elaborar, ejecutar y administrar de manera autónoma su presupuesto. Con base en lo anterior, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.4. del capítulo II de este informe).

[176] Finalmente, el Comité ha tomado nota del conjunto de acciones que viene desarrollando el PJUD para cumplir con los objetivos que se ha propuesto en relación con su “Plan Estratégico” para el quinquenio 2011-2015, principalmente a través de las labores relacionadas con la ejecución de los proyectos de desarrollo institucional, manejo de personal y gestión jurisdiccional con el BID, y de transparencia, integridad y rendición de cuentas con el Banco Mundial, ambos descritos en la sección anterior, y dado el alcance e importancia de los resultados que el PJUD prevé alcanzar con estas iniciativas, el Comité formulará una recomendación. (Véase recomendación 3.4.5 del capítulo II de este informe).

3.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[177] En su respuesta al cuestionario^{162/}, el Estado analizado suministró algunos enlaces con relación a las labores jurisdiccionales que durante 2012 desempeñaron la CSJ, la Corte de Apelaciones, así como los tribunales de primera instancia. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del PJUD complementó lo anterior, suministrando unas tablas^{163/} con información correspondiente al

161. Véase *supra* nota 137.

162. Véase respuesta del PJUD al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 22 y 23, *supra* nota 139.

163. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/xls/mesicic4_chl_ing.xls.

periodo 2007-2012 relativa a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos^{164/}, de las que se desprenden, entre otros, los siguientes datos:

CAUSAS POR DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS	AÑO						TOTAL
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Ingresadas ^{165/}	1	4	0	0	0	0	5
En trámite	92	128	154	162	261	434	1,231
Suspendidas	17	16	22	22	60	144	281
Concluidas	482	576	519	444	482	264	2,767
Total	592	724	695	628	803	842	4,284

CAUSALES/TIPO DE TÉRMINO	AÑO						TOTAL
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Abandono de la querella	5	2	6	3	2	2	20
Acoge requerimiento (monitorio)	2	3	1	3	1	2	12
Acumulación	24	26	27	21	33	25	156
Aprobación no inicio investigación	46	86	23	40	36	35	266
Principio de oportunidad	17	12	5	10	26	19	89
Declara inadmisibilidad de la querella	3	7	12	4	12	23	61
Declara incompetencia RPA	0	0	0	0	0	2	2
Declara incompetencia	26	34	20	52	44	64	240
Sobreseimiento definitivo	101	118	151	162	249	322	1,103
No perseverar en el procedimiento	72	96	111	132	141	125	677
Sentencia absolutoria	18	23	39	29	26	18	153
Sentencia condenatoria	129	137	181	136	162	156	901

[178] En primer lugar y con base en la información anterior, el Comité estima que la misma sirve para demostrar que en el Estado analizado se han iniciado procedimientos judiciales relativos a delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Sin embargo, de acuerdo con la primera tabla, llama su atención que en los últimos 6 años hayan ingresado al PJUD únicamente 5 causas relacionadas con tales delitos, por lo que formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que considere efectuar un análisis de las posibles causas de ello, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes.^{166/} (Véase recomendación 3.4.6 del capítulo II de este informe).

164. Estos delitos incluyen, en entre otros: el abandono de destino (artículo 253 del CP), abusos contra particulares (artículo 255 del CP); cohecho. (artículo 248 del CP); enriquecimiento ilícito. (artículo 241 bis del CP); exacciones ilegales cometidas por funcionario público. (artículo 241 del CP); fraudes al fisco y organismos del estado (artículo 239 del CP); infidelidad en la custodia de documentos. (artículo 242 del CP); malversación de caudales públicos. (artículo 233 del CP); negociación incompatible; nombramientos ilegales. (artículo 220 del CP) obstrucción de la justicia (artículo 269 bis del CP); prevaricación judicial y administrativa (artículos 223 al 229 del CP); soborno. (artículo 250 del CP); usurpación de atribuciones de empleados públicos y judiciales (artículos 221 y 222 del CP); violación de secretos. (artículo 246 del CP)

165. Con fecha 10 de septiembre de 2013, el Estado analizado aclaró que este rubro en la tabla se refiere a causas ingresadas y abandonadas.

166. Con fecha 10 de septiembre de 2013, el Estado analizado suministró información actualizada con relación a la tabla que refiere el párrafo 177, disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ch1_PJUD1.pdf

[179] En segundo lugar y con base en la información de la segunda tabla, en la cual se puede observar que el número de procesos que terminaron por sobreseimiento definitivo y otras causales es mayor al número que terminó por sentencia, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado a fin de que considere igualmente efectuar un análisis de las posibles causas de ello, en orden a adoptar las medidas correctivas pertinentes. (Véase recomendación 3.4.7 del capítulo II de este informe).

[180] En relación con lo anterior y toda vez que no se cuenta información desagregada que permita al Comité conocer y analizar cuáles fueron las causales invocadas para decretar el sobreseimiento definitivo en los procesos a que se refiere la segunda tabla, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado en el sentido de que considere elaborar información estadística que identifique tales causales, incluyendo la prescripción, aplicadas para decretar el sobreseimiento definitivo en los procesos judiciales por los delitos funcionarios. (Véase recomendación 3.4.8 del capítulo II de este informe).

[181] Por último, si bien, como se mencionó anteriormente, la información suministrada por el Estado analizado sirve para demostrar que se han iniciado procedimientos judiciales relativos a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado para que elaborare información estadística relativa a los procesos judiciales adelantados pero en relación con la generalidad de los delitos de corrupción, que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión. (Véase recomendación 3.4.9 del capítulo II de este informe).

3.4. Conclusiones y recomendaciones

[182] Con base en el análisis integral realizado con respecto al PJUD en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

[183] La República de Chile ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer al PJUD, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 3 del capítulo II de este informe.

[184] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 3.4.1. Adoptar las medidas pertinentes para garantizar que el procedimiento para proveer los cargos de ministros de la CSJ se desarrolle en tiempos razonables a modo de evitar eventuales demoras en la dotación o integración completa de la CSJ que podría perjudicar el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente aquellas relacionadas con el juzgamiento de prácticas corruptas. (Véase sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.2. Considerar adoptar las disposiciones legales pertinentes para continuar dotando y fortaleciendo al PJUD con los recursos humanos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones, principalmente las relacionadas con el juzgamiento de prácticas corruptas, dentro de los recursos disponibles. (Véase sección 3.2 del capítulo II de este informe).

- 3.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para continuar desarrollando los programas de formación, perfeccionamiento y habilitación que imparte la Academia Judicial con módulos de ética, probidad, transparencia, y normativa deontológica que rige al PJUD. (Véase sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.4. Adoptar las medidas pertinentes para que el PJUD pueda contar con una mayor autonomía financiera para la determinación, administración y ejecución de sus recursos presupuestarios (Véase sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.5. Adoptar las medidas pertinentes para impulsar la implementación del Plan Estratégico del PJUD para el quinquenio 2011-2015. (Véase sección 3.2 del capítulo II de este informe).
- 3.4.6. Elaborar información estadística desagregada sobre los procesos ingresados o iniciados ante el PJUD relacionados con delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.7. Efectuar un análisis de las causas que podrían estar incidiendo en que el número de casos relativos a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos que terminen por sobreseimiento definitivo u otras causales sea mayor al número de casos que terminan por sentencia, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.8. Elaborar información estadística que identifique las causales, incluyendo las de prescripción, aplicadas para decretar el sobreseimiento definitivo en los procesos judiciales por los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, en orden identificar retos y recomendar las medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).
- 3.4.9. Elaborar información estadística relativa a los procesos judiciales adelantados en relación con la generalidad de las prácticas corruptas que permita conocer cuántos se encuentran en curso, suspendidos, prescritos, archivados sin que se haya podido adoptar una decisión sobre los mismos, listos para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 3.3. del capítulo II de este informe).

4. UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

4.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[185] La UAF cuenta con un conjunto de disposiciones que conforman su marco jurídico y con otras medidas, referidas, entre otros, a los siguientes aspectos:

[186] De conformidad con el artículo 1º de la Ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos^{167/} No. 19.913 de

167. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley19913.pdf

2003 (en adelante “Ley No. 19.913”), la UAF es una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Hacienda, cuyo objeto es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión del delito de lavado de activos derivado de los delitos precedentes que describe el artículo 27 de la Ley No. 19.913, entre los que se encuentran algunos relacionados con actos de corrupción, tales como el prevaricato, la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, el uso de información financiera privilegiada para beneficio propio, el cohecho y el soborno a funcionario público extranjero.^{168/}

[187] De acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley No. 19.913, la UAF desarrolla, entre otras funciones y atribuciones, procesos de inteligencia financiera orientados a detectar señales indiciarias de operaciones sospechosas de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (en adelante “LA/FT”), emite normativa para los sectores económicos supervisados, fiscaliza su cumplimiento, sanciona administrativamente su incumplimiento y difunde información de carácter público, con el propósito de proteger al Estado y a su economía de los efectos adversos del LA/FT. Al respecto, el mismo artículo 2º dispone que la UAF podrá desarrollar y ejercer sus funciones en cualquier lugar del territorio nacional, pero bajo ningún motivo podrá ejercer competencias propias del MP o de los tribunales de justicia, y sólo podrá utilizar la información que reciba para los propósitos establecidos en la ley, no pudiendo en ningún caso darla a conocer o entregarla a organismos o servicios distintos al MP.

[188] En cuanto a la manera en que adopta sus decisiones, la UAF, a través de su Director, como jefe superior del servicio y en cumplimiento de las atribuciones que le confiere el artículo 2º de la Ley No. 19.913, es quien mediante resoluciones dicta las instrucciones para las entidades obligadas a informar a la UAF y verificar su ejecución, remite al MP aquellos casos en los que se detectan indicios de delito, e impone las sanciones administrativas conforme a la ley. A este respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la UAF complementó la anterior información refiriéndose a los recursos que proceden en contra de las anteriores resoluciones, específicamente respecto aquellas que imponen sanciones, sobre las cuales procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado No. 19.880^{169/} de acuerdo con el artículo 23 de la Ley No. 19.913, así como el recurso de ilegalidad que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley No. 19.913, se promueve ante la Corte de Apelaciones respectiva cuando se estime que dichas resoluciones no se ajustan a derecho. Asimismo, la representación de la UAF señaló que tanto las resoluciones de regulación como las que imponen sanción se publican en el sitio *web*^{170/} institucional.

[189] Como quedó señalado, el Director de la UAF es la autoridad máxima de la institución, quien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley No. 19.913 tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Unidad y la facultad de ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines. En cuanto a su nombramiento, durante la visita *in situ*, la representación de la UAF señaló que el cargo de Director es provisto a través del Consejo de Alta Dirección Pública^{171/}, que forma parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil, cuyo objetivo es asistir en la toma de decisiones al Presidente de la República,

168. Véase respuesta de la UAF al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 3, disponible en:

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_uaf.pdf

169. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley19880.pdf

170. Véase: <http://www.uaf.cl/legislacion/sanciones.aspx>

171. Véase: <http://www.serviciocivil.gob.cl/node/7>

ministros y jefes de servicios para la provisión de cargos de altos directivos públicos de exclusiva confianza, y conducir los procesos de selección. El Director de la UAF, siendo uno de los altos directivos públicos nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, tiene una duración de tres años en su cargo y puede ser renovado hasta dos veces por igual plazo. Es un cargo de exclusiva confianza, es decir, su renuncia puede ser solicitada en cualquier momento por la autoridad facultada para su nombramiento, en este caso el Presidente de la República. Como directivo adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública, el Director de la UAF firma con su superior jerárquico un convenio de desempeño por tres años, que cumple con la doble función de orientar y evaluar su gestión.

[190] En cuanto al proceso de selección para ocupar el cargo de Director, la representación de la UAF señaló durante la visita *in situ* que el Consejo de Alta Dirección Pública o un Comité de Selección designado por éste, elige por concurso público a los postulantes, los que son propuestos al Presidente de la República. El proceso de concurso es confidencial y se inicia con la convocatoria en la prensa escrita. Luego, una empresa especializada en selección de personal realiza el examen curricular de los candidatos, analiza los antecedentes, realiza las entrevistas respectivas y presenta al Consejo de Alta Dirección Pública o al Comité de Selección una nómina de preseleccionados.

[191] En materia de recursos humanos, el artículo 11 de la Ley No. 19.913 dispone que el personal de planta y a contrata de la UAF se rige por las normas del Estatuto Administrativo, con las excepciones que esta misma Ley establece. El personal de la planta de directivos de la Unidad es de exclusiva confianza del Director y, en consecuencia, éste podrá nombrarlo y removerlo con entera independencia de toda otra autoridad. Con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la UAF complementó este tema, precisando, en primer lugar, que en función de su Plan Estratégico y Operativo, la Unidad establece sus necesidades de personal, entre otros aspectos y, con base en ello, elabora el presupuesto de la institución que se presenta a la DIPRES.

[192] En segundo lugar, señaló que no existe en la Unidad personal de libre nombramiento, sino que su planta laboral es provista con base en las Políticas de Gestión de Personas Carrera Funcionaria^{172/} sobre ingreso y promoción dentro del servicio público y a través del Sistema del Empleo Público^{173/} administrado por la Dirección Nacional del Servicio Civil. Específicamente, argumentó que el ingreso a la UAF se lleva a cabo mediante concursos de mérito e idoneidad de conformidad con el título II del Decreto Supremo No. 69 de 2004 del Ministerio de Hacienda^{174/}. Asimismo, en cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de responsabilidad por sus actuaciones, el personal de UAF se rige, entre otras normativas, por el Estatuto Administrativo, el artículo 11 y otros relacionados de la Ley No. 19.913 y el artículo 54 y siguientes de la Ley No. 18.575.

[193] Con relación a la existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a su servicio, durante la realización de la visita *in situ* la representación de la UAF puso de presente la existencia de la Resolución Exenta No. 233^{175/} de 2011 que aprueba, entre otros aspectos, el manual de cargos institucional, el cual se actualiza constantemente e incluye las competencias transversales y específicas necesarias para cada cargo. Este manual se complementa con el diccionario de competencias, las que han sido definidas como competencias críticas para el desempeño de los cargos y consideradas relevantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la UAF. Anualmente, se señaló, estas competencias son medidas para cada funcionario a través del formulario de detección de necesidades de capacitación, que tiene como

172. Véase: <http://www.serviciocivil.gob.cl/pol%C3%ADticas-de-gesti%C3%B3n-de-personas-carrera-funcionaria>

173. Véase: <http://www.empleospublicos.cl/>

174. Véase: http://www.empleospublicos.cl/documentos/ds_692004.pdf

175. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_res233.pdf

objetivo identificar las brechas existentes entre la descripción del cargo y lo realizado por cada funcionario. La minimización de estas brechas se realiza a través de la ejecución de un plan de capacitación^{176/} que integra las brechas encontradas como también otras solicitudes de especialización de algún tema específico o el interés de un nuevo conocimiento. Al término de cada actividad se evalúan los conocimientos adquiridos por medio de otro instrumento de satisfacción y se determina si la capacitación ha sido efectiva.

[194] Con respecto a la existencia de procedimientos documentados, manuales o guías para el desarrollo de sus tareas, en el marco de la visita *in situ*, la representación de la UAF señaló que adicionalmente al manual de cargos institucional, se realizó en 2010 el levantamiento de procedimientos^{177/} para cada área, en donde se describen los procesos ejecutados para la realización de cada labor o función. Este desarrollo tiene por objetivo optimizar los procesos de cumplimiento por parte de las distintas áreas de la UAF, siendo un proceso dinámico que se actualiza de acuerdo a las necesidades de cada área.

[195] Asimismo, la representación de la UAF señaló que una gran parte de las acciones emprendidas para el fortalecimiento institucional y mejoramiento de la calidad de los servicios que brinda están relacionadas con la expansión y desarrollo de herramientas tecnológicas e informáticas necesarias para su funcionamiento eficiente. En este sentido, explicó que cuenta con una arquitectura de red que dispone de diversos segmentos según el propósito de su uso. Estos segmentos se pueden agrupar en una zona orientada a disponer los servicios *web* tales como “sitio *web* corporativo” y “sitio *web* de reportes”; una zona intermedia, con todos los niveles de protección adecuados y que es utilizado para el trabajo administrativo diario, uso de Internet, correo electrónico, alojamiento de bases de datos de los sitios *web*, entre otros, y una zona segura, sin acceso a Internet, en donde reside la base de datos y sistemas para el trabajo de inteligencia financiera asequible sólo vía escritorio virtual. Lo anterior, señaló, cuenta con alta tecnología para salvaguardar la seguridad de los sistemas. Igualmente, la UAF cuenta con sistemas modernos para el envío de reportes de operaciones en efectivo (ROE), de operaciones sospechosas (en adelante “ROS”) y de declaración de porte y transporte en efectivo (DPTE) bajo estándares de seguridad y formularios para la presentación de dichos reportes. Cuenta con sistemas de intranet administrativa y otra de análisis, ambos de acceso seguro, así como con la herramienta de minería de datos “*SPSS Modeler*” para la realización de análisis estratégico y creación de modelos de prevención de LA/FT, entre otros sistemas.

[196] Respecto de la manera en la que suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y funciones, la UAF cuenta, en primer lugar, con el sitio *web* institucional www.uaf.gob.cl, el cual contiene información relevante acerca del quehacer de la Unidad, su misión, visión y sus objetivos estratégicos, detalla el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de LA/FT, publica y actualiza las instrucciones impartidas a las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley No. 19.913, provee información estadística actualizada, los convenios vigentes, e información de prensa, entre otros aspectos. Este sitio cuenta además con un enlace al Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana^{178/} (SIAC) que permite recibir, gestionar y responder, en plazos razonables y con las limitaciones legales establecidas, los requerimientos y consultas de los ciudadanos, así como la atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos. Este sitio *web* institucional cuenta también, por mandato legal, con el banner

176. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_plan.pdf

177. En el marco de la visita *in situ* el Estado analizado, este documento fue puesto a la vista de los miembros del Subgrupo de Análisis y de la Secretaría Técnica por tener un carácter estrictamente confidencial.

178. Véase: <http://www.uaf.cl/contactenos/index.aspx>

“Gobierno Transparente” que contiene, en detalle, la información que la Ley de Transparencia ordena poner a disposición de la ciudadanía.

[197] En este contexto, durante la visita *in situ*, la representación de la UAF destacó la reciente adopción de la Resolución Exenta No. 10 de 2013^{179/}, que aprueba la Norma General de Participación Ciudadana de la UAF que regula las formas en que las personas físicas y jurídicas podrán interactuar con la UAF en los términos que permita la ley. Igualmente, se puso de presente la puesta en marcha de la política de publicidad y transparencia de la UAF con el propósito de cumplir a cabalidad con la función legal de prevenir e impedir el lavado de activos, e informar los resultados de la gestión fiscalizadora, normativa y sancionadora., además del lanzamiento del Plan 2010 de Difusión de Normativa Antilavado de Activos, a partir del cual se han venido desarrollando una serie de actividades^{180/}, como talleres, seminarios y cursos *e-learning*, destinados a promover acciones para prevenir la utilización del sistema financiero u otros sectores económicos para la comisión de delitos relacionados con el LA/FT.

[198] En relación con los mecanismos de control interno, la representación de la UAF en el marco de la visita *in situ* manifestó que la Unidad cuenta con un Área de Auditoría Interna que asesora al Director en materia de control interno, probidad administrativa y administración integral de riesgos. Entre sus principales funciones se encuentran la elaboración y ejecución del Plan Anual de Auditoría, la evaluación del sistema de control interno institucional, así como la eficiencia y eficacia con que se utilizan los recursos humanos, financieros, técnicos, informáticos y materiales, además de la elaboración y seguimiento de los informes de auditoría correspondientes, los cuales comunica oportunamente a la Dirección para alertarla sobre posibles anomalías, irregularidades, debilidades y falencias en los procesos e infracciones legales que se detecten y que requieran mejora y/o rectificación. El Área de Auditoría Interna, por mandato legal, se coordina técnica y permanentemente con el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (en adelante “CAIGG”).

[199] Sobre la manera que se garantizan los recursos presupuestarios, el artículo 5° transitorio de la Ley No. 19.913 dispone que el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, creará el capítulo respectivo de ingresos y gastos del presupuesto de la UAF. Para estos efectos y en función de sus Planes Estratégico y Operativo, la Unidad establece, entre otros aspectos, sus necesidades financieras, y, con base en ello, elabora el presupuesto de la institución que se presenta a la DIPRES, para su inclusión en la Ley de Presupuesto de la Nación del año que corresponda, previo cumplimiento de los trámites y etapas del ciclo presupuestal legalmente determinado. En el sitio *web* de la DIPRES pueden consultarse, entre otros aspectos, los antecedentes presupuestarios 2004 a 2012 de la UAF^{181/}.

[200] En cuanto a los mecanismos de coordinación, la UAF ha suscrito una serie de convenios y alianzas estratégicas con diversas entidades del sector público, tales como el MP, la CGR, el Ministerio de la Hacienda, el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional del Servicio Civil, así como con instituciones privadas, para armonizar sus funciones, intercambiar información, agilizar procesos y obtener apoyo para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades. Algunos de estos convenios y alianzas estratégicas pueden consultarse en la sección de “cooperación institucional” del sitio *web* de la UAF^{182/}.

179. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_res10-2013.pdf

180. Véase: <http://www.uaf.cl/difusion/actividades.aspx>

181. Véase: <http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-14432.html>

182. Véase: <http://www.uaf.cl/cooperacion/publicas.aspx>

[201] Finalmente, con relación a los mecanismos para la rendición de cuentas, el artículo 13 de la Ley No. 19.913 dispone, en lo conducente, que quien preste servicios, a cualquier título, para la UAF deberá mantener en estricto secreto todas las informaciones y cualquier otro antecedente que conozca en el ejercicio de su cargo y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades, estableciéndose sanciones para quien incumpla con esta obligación. Sin embargo, tal como lo dispone el mismo artículo, esto no obsta a para que el Director de la UAF pueda dar a conocer o proporcionar información global y no personalizada para fines exclusivamente estadísticos o de gestión, quien, además, por mandato de ley, deberá concurrir anualmente en sesión secreta ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para informar aspectos generales de su gestión.

[202] Con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la UAF complementó la anterior información señalando que existen otras maneras de abordar la cuenta pública. Una de ellas es través de la entrega y publicación de los Balances de Gestión Institucional^{183/} (en adelante “BGI”) e Informes Estadísticos institucionales^{184/}. Los BGI resumen los resultados anuales en términos de prevención del lavado de activos, fiscalización, colaboración público-privada, participación en organismos internacionales y difusión, entre otros aspectos, incluyendo los desafíos identificados para el año siguiente. Los informes estadísticos institucionales contienen los resultados de la UAF en ejercicio de sus funciones de inteligencia financiera, regulación, fiscalización, sanción, normativa y actividades de difusión para la prevención del LA/FT. Ambos documentos son publicados en el sitio *web* institucional.

[203] Otra manera sería a través de la figura de la “Cuenta Pública Participativa”, contemplada en el párrafo 2° de la Resolución Exenta No. 10 de 2013, que aprueba la Norma General de Participación Ciudadana de la UAF. En este sentido y de conformidad con el artículo 5° de esta Resolución, la Cuenta Pública Participativa de la UAF será en modalidad virtual, mediante publicación e información en su sitio *web* institucional, “*velando en todo momento por el cumplimiento de las tres etapas que la conforman: información de la gestión realizada periodo en donde los ciudadanos pueden plantear sus consultas y comentarios, y finalmente la respuesta del Servicio a las consultas planteadas*”^{185/}.

4.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[204] La UAF cuenta con un conjunto de disposiciones y de otras medidas pertinentes para los propósitos de la Convención, algunas de las cuales fueron descritas de manera sucinta en la sección 4.1 anterior de este informe. No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las mismas:

[205] En primer lugar, el Comité reconoce la existencia del manual de cargos institucional, del diccionario de competencias, así como del formato de descripción de cargos y el perfil de competencias, aprobados todos mediante la Resolución Exenta No. 233 de 2012. Estos documentos, que describen, entre otros aspectos, las funciones del personal a su servicio, fueron puestos a disposición del Comité en formato impreso durante la visita *in situ*, sin embargo, en atención al contenido y alcance de la información que en ellos se contempla, el Comité estima útil que en aras de la transparencia y para la consulta de los interesados, los mismos estén disponibles en formato electrónico en el sitio *web* de la UAF, salvo la información relativa a cargos de analistas de inteligencia financiera y fiscalizadores. (Véase recomendación 4.4.1 del capítulo II de este informe).

183. Disponibles en: <http://www.uaf.cl/acerca/balance.aspx>

184. Véase: <http://www.uaf.cl/estadisticas/>

185. Véase *supra* nota 175.

[206] En segundo lugar, en materia de capacitación, el Comité tuvo a su disposición información relacionada con el Plan de Capacitación 2012 (ejecutado), así como el Plan de Capacitación de la UAF 2013 a ejecutarse durante 2013, pero no identificó dentro de estos planes, así como de la información que sobre el tema se desprende de los BGI anuales y disponibles en el sitio *web* institucional, la inclusión de cursos o módulos de capacitación que se relacionen con la investigación de delitos de corrupción, tales como el prevaricato, la malversación, el cohecho o el soborno a funcionario público extranjero, los cuales, con base en la ley, se identifican como delitos precedentes de lavado de activos. (Véase recomendación 4.4.2 del capítulo II de este informe).

[207] En este mismo orden de ideas y con base en la información que tuvo a su disposición, el Comité observa también la conveniencia de incluir en las diversas actividades de difusión sobre la prevención del LA/FT que viene realizando la UAF orientadas a las entidades supervisadas y otras, de incluir paneles específicos relacionados con la prevención de prácticas corruptas. (Véase recomendación 4.4.3 del capítulo II de este informe).

[208] En tercer lugar, el Comité reconoce los distintos mecanismos con que cuenta la UAF en materia de rendición de cuentas, entre los cuales se encuentran la obligación del Director de concurrir, en sesión secreta, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para informar aspectos generales de su gestión, así como la elaboración y publicación de los BGI anuales y los informes estadísticos que se publican en el sitio *web* institucional de la UAF. En esta materia, el Comité reconoce también la adopción de la Resolución Exenta No. 10 de 2013, que aprueba la figura de la “cuenta pública participativa” como mecanismo de participación ciudadana que, de acuerdo con lo allí expresado, asegura el derecho de las personas a participar en las políticas, planes, programas y acciones que adopta y ejecuta la UAF. Lo anterior, estima el Comité, contribuye al logro de los propósitos de la Convención y, en este sentido y teniendo en cuenta la relativa reciente expedición de la citada Resolución, sugiere que el Estado analizado, a través de la UAF, continúe desarrollando las previsiones y medidas necesarias para implementar, cuando corresponda, las etapas de la cuenta pública participativa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º de la Resolución. (Véase recomendación 4.4.4 del capítulo II de este informe).

4.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas

[209] A través de la respuesta del Estado analizado al cuestionario y de la visita *in situ*, se recabó información relativa a la UAF, entre la que se destaca la siguiente:

[210] En primer lugar, si bien la UAF no cuenta con funciones de prevención de prácticas corruptas en estricto sentido, en cumplimiento de su objetivo de prevenir el LA/FT con independencia del delito base que los origine, ha emitido en conjunto con distintas Superintendencias del Estado circulares, como la UAF No. 49 de 2012¹⁸⁶, que instruyen al sistema financiero y a otros sectores económicos sobre las medidas que deben tomar con relación a las operaciones o transacciones que realicen clientes con la calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP), a fin de prevenir y detectar actos de lavado de activos provenientes de eventuales actos de corrupción cometidos por altos funcionarios públicos nacionales o extranjeros. Asimismo, la UAF, junto con más de 20 entidades del sector público, privado y de la sociedad civil conforma la campaña “*No mancho mi conciencia. Vivo sin corrupción*”¹⁸⁷, impulsada por la CGR, con el apoyo del PNUD, para generar conciencia en la ciudadanía respecto de la importancia de combatir la corrupción y de aplicar buenas prácticas que permitan prevenir los actos de este tipo.

186. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_cir049.pdf

187. Véase *supra* nota 120.

[211] En segundo lugar, si bien la UAF tampoco cuenta con funciones de detección de prácticas corruptas en estricto sentido que generen algún tipo de responsabilidad, el Estado analizado señala en su respuesta^{188/} al cuestionario que “*cuando se analizan operaciones sospechosas de lavado de activos se pueden reconocer ciertos antecedentes que podrían vincular dicha operación sospechosa a un delito base de corrupción, lo que permite hacer una clasificación meramente estadística.*” En este sentido, con ocasión de la visita *in situ* suministró la siguiente información.^{189/}

INTELIGENCIA FINANCIERA ROS por corrupción	AÑO						TOTAL
	2007	2008	2010	2011	2012	2013*	
Base de datos**	5	4	2	1	1	0	13
Enviados al MP	0	1	0	2	3	1	7
En precomité	0	0	0	0	1	2	3
TOTAL	5	5	2	3	5	3	23
<i>No se contó con información sobre el año 2009; * A abril de 2013; ** Debido a no arrojaron indicios de lavado de activos</i>							

INTELIGENCIA FINANCIERA ROS por PEP	AÑO					TOTAL
	2005	2008	2011	2012	2013	
Base de datos**	0	1	1	5	2	9
Enviados al MP	1	0	0	2	0	3
TOTAL	1	1	1	7	2	12
<i>No se contó con información sobre los años 2006, 2007, 2009 y 2010; * abril de 2013; ** Debido a no arrojaron indicios de lavado de activos</i>						

[212] Con base en la información anterior, el Comité estima que la misma podría servir para demostrar que en el Estado analizado se ha detectado la comisión de prácticas corruptas, como delitos antecedentes de LA/FT, y remite tal detección al MP para su correspondiente investigación.

[213] Sin embargo, teniendo en cuenta lo señalado en la respuesta^{190/} al cuestionario, en el sentido que “*es necesario dejar establecido que no corresponde a la UAF hacer una calificación jurídica sobre el delito base vinculado a un acto, transacción u operación sospechosa, que haya sido reportada a la unidad por alguno de los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la Ley 19.913*”, el Comité estima que sería útil analizar la posibilidad de fortalecer la elaboración y mantenimiento de la información estadística de la UAF referida a las actividades de detección de señales indiciarias de operaciones sospechosas de LA/FT, a través de mecanismos que permitan contar con información precisa sobre el número de ROS ingresados por año que se relacionen con delitos base de corrupción; cuántos de ellos se ha tomado la decisión de remitirlos al MP para el trámite correspondiente. (Véase recomendación 4.4.5 del capítulo II de este informe).

4.4. Conclusiones y recomendaciones

[214] Con base en el análisis integral realizado con respecto a la UAF en los acápites anteriores, el Comité formula las siguientes conclusiones y recomendaciones:

188. Véase respuesta de la UAF al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 21, *supra* no 168.

189. Con fecha 12 de agosto de 2013, el Estado analizado suministró la siguiente información actualizada a junio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ch1_UAF1.pdf

190. Véase respuesta de la UAF al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 21, *supra* no 168.

[215] **La República de Chile ha considerado y adoptado medidas destinadas a mantener y fortalecer a la UAF, como órgano de control superior, de acuerdo con lo dicho en la sección 4 del capítulo II de este informe.**

[216] En vista de los comentarios formulados en dicha sección, el Comité sugiere que el Estado analizado considere la siguientes recomendaciones:

- 4.4.1. Publicar en el sitio *web* de la UAF el manual de cargos institucional, el diccionario de competencias, el formato de descripción de cargos y el perfil de competencias, así como sus correspondientes actualizaciones. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.2. Adoptar las medidas pertinentes para complementar los planes de capacitación de la UAF con cursos o módulos que se relacionen con la investigación de delitos de corrupción, tales como el prevaricato, la malversación, el cohecho o el soborno a funcionario público extranjero, los cuales, con base en la ley, se identifican como delitos precedentes de lavado de activos. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para complementar los programas y acciones de difusión que realiza la UAF con paneles u otras actividades específicas relacionadas con la prevención de prácticas corruptas. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.4. Continuar desarrollando las previsiones y medidas necesarias para implementar las etapas de la cuenta pública participativa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º de la Resolución Exenta No. 10 de 2013 de la UAF. (Véase sección 4.2 del capítulo II de este informe).
- 4.4.5. Adoptar las medidas pertinentes para fortalecer la elaboración y mantenimiento de la información estadística de la UAF referida a las actividades de detección de señales indiciarias de operaciones sospechosas de LA/FT, a través de mecanismos que permitan contar con información precisa sobre el número de ROS ingresados por año que se relacionen con delitos base de corrupción; cuántos de ellos se ha tomado la decisión de remitirlos al MP para el trámite correspondiente, en orden identificar retos y recomendar medidas correctivas. (Véase sección 4.3 del capítulo II de este informe).

III. BUENAS PRÁCTICAS

[217] De conformidad con lo previsto en el apartado V de la *Metodología* para el análisis de la implementación de la disposición de la Convención seleccionada en la Cuarta Ronda y en la *Estructura* para los informes de dicha Ronda, se alude a continuación a las buenas prácticas identificadas por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario en la sección correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”, las cuales ha deseado compartir con los demás Estados Parte del MESICIC, por considerar que pueden ser de beneficio para los mismos:

[218] **En relación con la CGR:**

[219] – El “Semáforo Municipal”, que consiste en la publicación en el sitio *web*^{191/} institucional de la CGR del estado de cumplimiento de la obligación de las municipalidades de remitir mensualmente su información presupuestaria y contable a la CGR. Para efectos de graficar dicho cumplimiento, se ideó un “semáforo” de cumplimiento, el cual mensualmente, muestra con un círculo verde, si todos los informes han sido procesados por la CGR, con un círculo amarillo, si existe algún informe en proceso y con un círculo rojo, si la municipalidad no ha remitido ningún informe para el mes en cuestión. Adicionalmente, se puede consultar el “informe de situación presupuestaria acumulado” del ejercicio seleccionado, donde para cada cuenta de ingresos o de gastos abierta a nivel de clasificador presupuestario se pueden observar los montos de presupuesto inicial, actualizado, ejecución y porcentaje de ejecución. Para obtener mayor información se puede consultar la respuesta^{192/} del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

[220] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR puso de presente, como información sobre buenas prácticas, lo siguiente:

[221] – El “Portal Contraloría y Ciudadano”: Iniciativa que permite recepcionar denuncias en línea acerca de irregularidades administrativas e incorporar sugerencias de fiscalización de los ciudadanos en el proceso de planificación de las auditorías.

[222] – El “Portal de Unidades de Control Interno” (UCIs) que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley No. 10.336, permite a la CGR ejercer una tuición técnica sobre las unidades de auditoría o control interno de las entidades fiscalizadas. El objetivo del Portal es aumentar la coordinación entre la CGR y dichas unidades para el intercambio de experiencias, difusión de buenas prácticas y el intercambio de información mediante una red de colaboración y conocimiento compartido, desde la perspectiva de fortalecer el rol de las UCIs como primera barrera de actuaciones irregulares.

[223] – Las “Agendas Públicas”: Publicación y actualización permanente en el sitio *web* institucional de las actividades que desarrollan las autoridades de la CGR (Contralor General, Subcontralor General, Jefes de División y Contralores Regionales). Se trata de una práctica de transparencia adoptada voluntariamente por la CGR.

[224] – El “Portal de Asociativismo Regional y Local”: Sitio *web* creado en julio de 2012 que concentra la información, marco regulatorio y jurisprudencia relevante acerca de las personas jurídicas de derecho privado conformadas con participación de gobiernos regionales y locales, que incluye además una biblioteca documental con archivos especializados sobre la materia.

[225] – La publicidad de los informes de auditoría: A partir de julio de 2007, la CGR publica en su sitio *web* institucional la información completa de los resultados de las auditorías que realiza.

[226] – El “Portal Anticorrupción” (www.anticorrupcion.cl) como iniciativa conjunta de la CGR, el Consejo de Defensa del Estado y el MP, inaugurado el 24 de julio de 2013 como parte del Proyecto de “Uso Compartido de Información para Mejorar el Combate de la Corrupción en Chile”.^{193/}

191. Véase: <http://goo.gl/0QPWO>

192. Véase respuesta de la CGR al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 48 a 56, *supra* nota 77.

193. Esta información fue puesta de presente por el Estado analizado el 12 de agosto de 2013.

[227] En relación con el PJUD:

[228] – El “El Presidente Responde”: Formulario electrónico^{194/} disponible en el sitio *web* institucional del PJUD que permite a la ciudadanía presentar, ante el Presidente de la CSJ, reclamos, consultas o sugerencias relativas al funcionamiento y a la calidad de atención recibida en los distintos juzgados del país, sin incluir aspectos sobre revisión, modificación o revocación de sentencias o resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. Para obtener mayor información al respecto se puede consultar la respuesta^{195/} del Estado analizado correspondiente a “Información sobre Buenas Prácticas”.

[229] En relación con la UAF:^{196/}

[230] – Divulgación trimestral de las sanciones administrativas ejecutoriadas contra entidades reguladas por incumplimiento de la normativa antilavado de activos. Esta publicación incluye identificación del sancionado, sector económico, causal y la resolución completa, disponible en la sección Sanciones del sitio *web* institucional.

[231] – Publicación de categorías de Personas Expuestas Políticamente (PEP), y de un modelo de formulario para la declaración de este tipo de vínculo, ambos disponibles en el sitio *web* institucional.

[232] – Elaboración de un Manual de Probidad Funcionaria (en pleno desarrollo) el que establece las responsabilidades administrativas y las inhabilidades e incompatibilidades de los cargos.

[233] – Selección y contratación de personal profesional, técnico y administrativo a través de concursos públicos, difundidos a través de los portales de Alta Dirección Pública y de Empleos Públicos.

[234] – Procedimiento de Compras Públicas de bienes y servicios a través del portal www.mercadopublico.cl.

[235] – Retroalimentación permanente a los sectores regulados, a través de la elaboración y difusión de Informes de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en base a los casos con sentencia condenatoria firme, disponibles en el sitio *web* institucional, además del desarrollo de capacitación vía *e-learning* y de difusión de los resultados de gestión institucional, a través de actividades de difusión pública.

[236] – Emisión de un conjunto de recomendaciones para fortalecer las medidas preventivas antilavado de activos que desarrollan los sectores regulados por el Servicio cuando tratan con PEP, disponibles en la sección mejores prácticas del sitio *web* institucional en: <http://www.uaf.cl/acerca/mejores.aspx>

194. Véase: http://www.poderjudicial.cl/modulos/ATUsuarios/ATU_PresidenteResponde.php?opc_menu=5&opc_item=1

195. Véase respuesta del PJUD al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 26, *supra* nota 139.

196. Esta información fue puesta de presente por el Estado analizado el 12 de agosto de 2013.

IV. SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS^{197/}

[237] El Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos nuevos dados por Chile en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por el Comité para su implementación en el Informe de la Primera Ronda, sobre las que estimó que requerían atención adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas^{198/}, y procederá, según corresponda, a tomar nota de aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesitan atención adicional, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado VI de la *Metodología* adoptada por el Comité para la Cuarta Ronda.

[238] El Comité también tomará nota en esta sección del informe de las dificultades que para la implementación de las aludidas recomendaciones y medidas haya puesto de presente el Estado analizado, y de la cooperación técnica que haya sido requerida por el mismo con tal fin.

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCIÓN)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Fortalecer las disposiciones relativas a las normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses durante y con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, y los sistemas de verificación de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses.

[239] En su respuesta al cuestionario^{199/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación en general, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[240] El “Programa Marco de Auditoría para el Proceso de Compras Públicas en el Estado” desarrollado en el año 2012 por el CAIGG, aplicado a la mayoría de los servicios públicos, el cual contempla la verificación de controles mitigantes para prevenir el conflicto de intereses a través de la inclusión en las actas de adjudicación de una cláusula tipo que impone una declaración de parte de los integrantes de la comisión adjudicadora del bien o servicio, de no tener intereses ni relación parental o societaria con los socios de las empresas o personas naturales adjudicadas.

[241] Las certificaciones en origen que el CAIGG solicita anualmente a los jefes de servicios de organismos del sector público en que declaran, entre otros, que no ha desarrollado actividades, ni ha tomado decisiones, ni se encuentra en una posición que suponga conflictos de intereses con la función

197. El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se encuentra incluido en el anexo I de este informe.

198. Disponibles en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/chl.htm>

199. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 1 a 10, disponible en: http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_anex1.pdf

pública que desarrollan y que no tienen conocimiento respecto de conflicto de intereses que pudiesen afectar a las jefaturas y funcionarios que se desempeñan en su institución.

[242] El “Documento Controles Operativos Compras Públicas”^{200/}, emitido por el CAIGG a través de su Oficio 378/12, que describe buenas prácticas y controles mínimos que deben ser ejercidos por una entidad del Estado al efectuar sus adquisiciones, entre los cuales se encuentran algunos procedimientos fundamentales para controlar que los funcionarios que tengan atribuciones de evaluación y/o decisión no tengan conflicto de interés con los oferentes o vendedores.

[243] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de lo previsto en citada recomendación, en cuanto se refiere al elemento de la misma atinente al fortalecimiento de las disposiciones relativas a las normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses durante el ejercicio de las funciones públicas, representado en las buenas prácticas antes aludidas. Sin embargo, el Comité estima necesario que éste continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que aún están pendientes de ser adoptadas las disposiciones que la misma recomendación señala. En relación con los restantes elementos de esta recomendación, atinentes al fortalecimiento de las normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas y los sistemas de verificación de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses, a los cuales se refieren, en su orden, las medidas a), b) y c) de la recomendación, el Comité evaluará a continuación la información sobre su implementación que le fue suministrada por el Estado analizado.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar un cargo público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades que también podrían configurar conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, que fueren aplicables durante un período razonable.*

[244] En su respuesta al cuestionario^{201/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[245] – Los Dictámenes de la CGR No. 849/2008^{202/} y 9.470/2012^{203/}. Este último que reconsidera los Dictámenes No. 22.990/2000 y 22.981/2001 relativos al artículo 56, inciso 3°, de la Ley No. 18.575 que establece la incompatibilidad para ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora de laborar en entidades privadas sujetas a la fiscalización de la institución para la cual prestaron sus servicios y que sostiene que, al contrario de lo que sucede normalmente con la responsabilidad de los funcionarios públicos por incumplimiento de una obligación determinada, la cual se extingue por el cese en sus funciones, la incompatibilidad antes mencionada no desaparece por dicho cese, antes bien reviste al infractor de la calidad de ex servidor de la Administración

200. Disponible en: <http://www.auditoriainternadegobierno.cl/index.php/menu/ShowFile/id/153>

201. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis., pp. 5 y 10, *supra* nota 199.

202. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_dic849.pdf

203. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_dic9470.pdf

Pública y, por consiguiente, la responsabilidad administrativa que origina su vulneración debe hacerse efectiva.

[246] – La indicación sustitutiva^{204/} al proyecto de Ley de Lobby (Boletín No. 6189-06) presentada en mayo de 2012 que amplía el ámbito de aplicación del mismo proyecto no sólo al lobby sino a toda gestión que represente intereses particulares ante las autoridades públicas que allí se señalan. La indicación sustantiva propone también eliminar la lista de entidades cuyas actividades no se consideraban lobby, incorpora nuevas autoridades y funcionarios que pueden ser sujetos pasivos de lobby u otras gestiones que representen intereses particulares y sanciona con multa a las autoridades o funcionarios que no registren la información a que están obligados o que lo hagan de manera inexacta o falsa, entre otros aspectos.

[247] Al respecto, cabe mencionar que en el documento presentado por “Chile Transparente” se anota lo siguiente: *“el Proyecto de Ley que “Regula el Lobby”, permanece en tramitación en la Cámara de Diputados y ha sido objeto de diversas modificaciones; la última modificación sustancial fue introducida por el Ejecutivo en mayo de 2012, mediante la presentación de una indicación sustitutiva que reforma completamente el contenido del proyecto original. El nuevo proyecto se limita, en lo esencial, a regular el registro de los encuentros de las autoridades con otras personas, y no regula ya la actividad de los lobbistas (sic), por lo que ya no incluye la prohibición de realizar actividades de lobby durante dos años luego de dejar el cargo para autoridades, parlamentarios y determinados funcionarios públicos.”*^{205/}

[248] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia se refirió, entre otros temas, al proyecto de Ley que establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo (Boletín No. 4186-07), el cual, desde su aprobación en lo general y pase a las comisiones Unidas de Constitución y Trabajo y a la Comisión de Hacienda para segundo informe, en marzo de 2008, continúa “en urgencia simple” en Primer Trámite Constitucional, empero, precisó, que se espera que al término de la administración del Presidente Sebastián Piñera, este proyecto junto con el proyecto de Ley que “Regula el Lobby” sean aprobados.

[249] Con relación a lo anterior, en el documento presentado por “Chile Transparente” se señala que: *“A fin de implementar completamente la medida sugerida por el Comité, estimamos recomendable que se reanude en el Congreso el debate sobre las modificaciones introducidas por el Proyecto de Ley que “Establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a fiscalización por el funcionario respectivo”, sea mediante la reactivación del mismo proyecto de ley o mediante una nueva iniciativa.”*^{206/}

[250] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, reflejados tanto en las acciones realizadas por la CGR como en los proyectos de ley antes mencionados, al igual que de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que ambas iniciativas legales aún no han culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica, además de que la medida a) sugerida, de acuerdo con lo anotado en el Informe de la Primera Ronda, apunta a que se contemplen “situaciones que podrían conllevar conflictos de intereses y que no estarían circunscritas solamente a las instituciones fiscalizadoras ni

204. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_lobby.pdf

205. Véase respuesta de “Chile Transparente” al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 13 y 14, *supra* nota 3.

206. *Ibidem*.

a las relaciones de naturaleza laboral con entidades sujetas a su fiscalización, para lo cual podría pensarse en considerar medidas tales como la prohibición para quienes ejercieron funciones públicas de gestionar a cualquier título en asuntos oficiales que fueron de su conocimiento o ante las entidades en las cuales tuvieron vinculación reciente y, en general, todas las situaciones que puedan conllevar el aprovechamiento indebido de la condición de ex-funcionario.”^{207/} (Véase medida a) de la sección 1.1 del anexo I del presente informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

b) Fortalecer sistemas que permitan asegurar que las unidades de personal y de control interno de los servicios efectúen oportunamente y cuando corresponda la verificación o revisión de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses.

[251] En su respuesta al cuestionario^{208/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[252] – El proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública ingresado a tramitación en el Congreso en mayo de 2011 (Boletín No. 7616-06)^{209/}, aprobado en lo general y particular por la Cámara de Diputados en marzo de 2012, estando actualmente en segundo trámite constitucional ante el Senado. Este proyecto tiende a unificar la normativa vigente relativa a las declaraciones patrimoniales y de intereses, estableciendo nuevas obligaciones para las autoridades y funcionarios a los que ésta se les aplica, y de otras autoridades que no forman parte de la Administración del Estado. Hace extensiva la obligación de efectuar y actualizar esta declaración a autoridades y funcionarios que actualmente no se encuentran afectos, y regula nuevos mecanismos de prevención de conflictos de interés en la función pública, estableciendo la obligación de ciertas autoridades de constituir un mandato de administración discrecional de valores y la enajenación de los activos que en aquellas situaciones excepcionales en las que el mandato no pueda resolver un determinado conflicto de interés, entre otros aspectos.

[253] En relación con lo anterior, “Chile Transparente” señala en su documento que: “*tal como constató el Comité en el Informe de la Tercera Ronda con respecto al proyecto de ley original, en el nuevo proyecto [de Ley de Probidad en la Función Pública] igualmente se otorga a la Contraloría General de la República la facultad expresa para fiscalizar la veracidad y completitud de las declaraciones de intereses y de patrimonio incluyendo la posibilidad de requerir información a otros órganos públicos tales como el Servicio de Impuestos Internos y las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras*”, expresando, además, que “*estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación.*”^{210/}

207. Véase “Informe relativo a la implementación en Chile de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda”, p. 8, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mec_inf_chi.pdf

208. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 9 y 12, *supra* nota 199.

209. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_prob.pdf

210. Véase respuesta de “Chile Transparente” al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 14, *supra* nota 3.

[254] – El Dictamen de la CGR No. 4.864/09 que reitera los oficios de la CGR sobre instrucciones para la declaración de intereses y de patrimonio, destacando las normas sobre responsabilidad administrativa de los obligados al cumplimiento de dichos deberes, en particular, los Dictámenes No. 26.104/00 y 17.152/06 sobre la materia.^{211/}

[255] – La incorporación, en el sitio *web* institucional de la CGR, del portal para las Unidades de Auditoría o Control Interno^{212/} de los Servicios Públicos del Estado, que incluye un foro interactivo para resolver dudas y consultas con base a la jurisprudencia administrativa existente y fomentar y difundir buenas prácticas al interior de tales unidades.

[256] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, reflejados tanto en las acciones realizadas por la CGR como en el proyecto de ley antes mencionado, al igual que de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que la iniciativa legal citada aún no han culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica. (Véase medida b) de la sección 1.1 del anexo I del presente informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

c) Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las normas sobre conflictos de intereses.

[257] En su respuesta al cuestionario^{213/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[258] – Los Dictámenes de la CGR No. 8.403/12; 9.722/12; 24.951/12; 26.136/12; 45.063/11; 45.798/11; 75.791/11; 39.453/10 y 39.500/10 que refieren a la normativa sobre conflictos de intereses y su aplicación a diversas autoridades públicas.^{214/}

[259] Al respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia complementó la anterior información explicando el contenido y alcance del Dictamen de la CGR No. 4.864/09^{215/} que reitera las instrucciones de la CGR para la declaración de intereses y de patrimonio y destaca las normas sobre responsabilidad administrativa de los obligados al cumplimiento de dichos deberes y señala, en su último párrafo, que “*de acuerdo con el artículo 65 incisos 1 ° y 5° de la citada ley [Ley No. 18.575], la no presentación oportuna de dichas declaraciones será sancionada , con multa aplicable a la autoridad o funcionario infractor, y a la vez, hará incurrir en responsabilidad administrativa al jefe de personal o quien, en razón de sus funciones, debió haber advertido oportunamente la omisión de una declaración o de su renovación y no lo hizo.*”

211. Estos Dictámenes están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_chi.htm

212. Disponible en: <http://goo.gl/IwhTB>

213. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 13 y 14, *supra* nota 199.

214. Estos Dictámenes están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_chi.htm

215. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_dic4864.pdf

[260] – El proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública citado anteriormente con relación a la implementación de la medida b) de esta misma recomendación, que prevé igualmente, entre otros aspectos, un régimen de responsabilidades y sanciones asociadas al incumplimiento de la obligación de declarar intereses y patrimonio.

[261] Por su parte, “Chile Transparente” señala en su documento que “*el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública establece sanciones, hoy inexistentes, para las autoridades y funcionarios que no cumplan con la obligación de actualizar sus declaraciones de intereses y de patrimonio al momento de dejar sus cargos. Estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación.*”^{216/}

[262] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 1.1 del capítulo IV de este informe, reflejados tanto en los dictámenes de la CGR como en el proyecto de ley antes mencionado, al igual que de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que la iniciativa legal citada aún no han culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica. (Véase medida c) de la sección 1.1 del anexo I del presente informe).

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

[263] El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

[264] La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación:

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través de las normas legales pertinentes, y adoptar las medidas relativas a su publicidad cuando corresponda.

Medida a):

[265] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

216. Véase respuesta de “Chile Transparente” al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 15, *supra* nota 3.

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- b) *Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, cuando corresponda, para dar publicidad a las declaraciones patrimoniales (incluye ingresos, activos y pasivos).*

[266] En su respuesta al cuestionario^{217/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[267] – Las medidas adoptadas por el Senado^{218/}, y la Cámara de Diputados^{219/}, para publicar en su portales de transparencia de sus respectivos sitios *web* institucionales, las declaraciones patrimoniales y de intereses de sus miembros, así como la publicación de estas mismas declaraciones de más de 200 autoridades públicas, entre las cuales se encuentran el Presidente de la República y su gabinete, Ministros, Subsecretarios, intendentes, Gobernadores y Jefes de Servicios, por mandato presidencial.

[268] – El proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública citado anteriormente, que prevé igualmente la publicidad de las declaraciones de patrimonio e intereses de autoridades de conformidad con el artículo 8º constitucional.

[269] – La Resolución Exenta de la CGR No 3.311^{220/} de noviembre de 2008 que crea la Unidad de Acceso a la Información de la Contraloría, como la encargada de hacer operativa la publicidad de las declaraciones de patrimonio e intereses que, conforme a los artículos 59 y 60, literal D, de la Ley No. 18.575, deben ser remitidas a la CGR o Contraloría Regional, según corresponda, para su custodia, archivo y consulta. En este sentido, esta Unidad tiene a su cargo la coordinación de las distintas reparticiones de la CGR para garantizar el acceso a la información que resguarda.

[270] Al respecto, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la CGR complementó la anterior información refiriéndose al estado pendiente de aprobación del proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública, el cual, entre otros aspectos, dispondría la publicidad de tales declaraciones en el sitio *web* institucional de la CGR.

[271] En el mismo sentido, “Chile Transparente” señala en su documento que: “*si bien las declaraciones de patrimonio de las autoridades y funcionarios obligados a efectuarla son públicas, la ley chilena no establece actualmente mecanismos que permitan que acceder con facilidad a la información contenida en ellas. El Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública contempla una fórmula para que sean publicadas en Internet, de la siguiente manera: “Artículo 6º.- La declaración de intereses y patrimonio y sus actualizaciones, se publicarán en el sitio electrónico que para tal fin señale la Contraloría General de la República, al cual se accederá desde su propio sitio, el que deberá permitir un acceso expedito y brindar las condiciones de seguridad e integridad de los datos ingresados”*, además, señala que “*estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la*

217. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, p. 18, *supra* nota 199.

218. Véase: http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=listado_declaraciones

219. Véase: http://www.camara.cl/camara/transparencia_diputado.aspx

220. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_res3311.pdf

medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación.”^{221/}

[272] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, reflejados tanto en la Resolución Exenta No 3.311 de la CGR, las iniciativas del Senado, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo y del proyecto de ley antes mencionado, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que la iniciativa legal citada aún no han culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica que regule precisamente las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedente para la publicidad de las declaraciones. (Véase medida a) de la sección 2 del anexo I del presente informe).

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

c) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses.

[273] En su respuesta al cuestionario^{222/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, el citado proyecto de ley de Probidad en la Función Pública, que en lo pertinente establece que la CGR fiscalizará la integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio, para lo cual podrá solicitar información de ciertas Superintendencias y otros servicios.

[274] En el mismo sentido, “Chile Transparente” señala en su documento que: “*en el Proyecto de Ley de Probidad en la Función Pública se otorga a la Contraloría General de la República la facultad expresa para fiscalizar la veracidad y completitud de las declaraciones de intereses y de patrimonio incluyendo la posibilidad de requerir información a otros órganos públicos tales como el Servicio de Impuestos Internos y las Superintendencias de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras*”, reiterando que “*estas nuevas normas significarían un avance sustancial en materia de transparencia y prevención de la corrupción en el país y permitirían cumplir con la medida sugerida por el Comité, por lo que estimamos recomendable darles pronta aprobación e implementación.”^{223/}*

[275] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida c) de la recomendación de la sección 2 del capítulo IV de este informe, reflejados en el proyecto de ley antes mencionado, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que la iniciativa legal citada aún no han culminado su tramitación para convertirse en norma jurídica. (Véase medida b) de la sección 2 del anexo I del presente informe).

221. Véase respuesta de “Chile Transparente” al cuestionario de la Cuarta Ronda, p. 15, *supra* nota 3.

222. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, p. 19, *supra* nota 199.

223. Véase respuesta de “Chile Transparente” al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 15 y 16, *supra* nota 3.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:^{224/}

Establecer mecanismos que permitan una mejor coordinación institucional de los órganos de control superior, y complementar el sistema de controles externos de la Administración Pública institucionalizando alguna instancia o instancias u órgano u organismos dotados de la autonomía necesaria, cuando corresponda, para que, en armonía con las atribuciones a cargo de otros órganos, desarrolle funciones relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el numeral 11 del artículo III de la Convención..

[276] Además de la información suministrada en la respuesta del Estado analizado al cuestionario,^{225/} el Comité destaca como información y nuevos desarrollos que le permite estimar que la anterior recomendación ha sido considerada satisfactoriamente, lo siguiente:

[277] – La creación en 2009 del Consejo para la Transparencia (en adelante “CPLT”), en virtud de la Ley de Transparencia, como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, garantizar el derecho de acceso a la información pública, así como de hacer cumplir las disposiciones contenidas en dicha Ley. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, se tuvo la oportunidad de entrevistar al Director General de este Consejo, quien realizó una presentación con relación a las facultades, funciones y atribuciones, así como la política de participación ciudadana de esta dependencia.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)

4.1. Mecanismos para el acceso a la información

[278] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

4.2. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.

224. Con respecto a esta recomendación, en el informe de la Tercera Ronda el Comité tomó nota de su consideración satisfactoria en lo atinente al establecimiento de mecanismos que permitan una mejor coordinación institucional de los órganos de control superior. Véase p. 37 de dicho informe, en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_chl.pdf
225. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 21 a 25, *supra* nota 199.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) *Celebrar procesos transparentes para permitir la consulta de sectores interesados en relación con el diseño de políticas públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en el ámbito del Poder Ejecutivo*

[279] En su respuesta al cuestionario^{226/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[280] – La promulgación, en febrero de 2011, de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública^{227/} No. 20.500 (en adelante “Ley No. 20.500”), reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Asimismo, dispone en su artículo 70 que cada órgano de la Administración Pública, con excepción de los señalados en el inciso segundo del artículo 21 de la Ley No. 18.575, deberán establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, modalidades que deberán mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros, y que deberán ser operacionalizadas a través de una resolución exenta por parte de cada uno de los órganos de la Administración del Estado obligado. Los mecanismos de participación ciudadana establecidos y que deben implementarse según la Ley No. 20.500 son cuatro: información relevante, cuentas públicas, participativas, consultas ciudadanas, y consejos de la sociedad civil.

[281] – La adopción, en concordancia con la Ley No. 20.500, de la “Política de Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad”^{228/}, cuyos propósitos y alcances son “*fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas*”. Esta Política establece, como objetivos estratégicos, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas, y mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, promoviendo una respuesta de calidad y oportuna de parte de los órganos de la Administración del Estado. Tales objetivos se concretan en tres ejes centrales (información y consulta ciudadana, control ciudadano y fortalecimiento de la sociedad civil) que implican el compromiso mutuo entre Estado y ciudadanía para el mejoramiento de los servicios entregados por el Gobierno.

[282] – La adopción del Instructivo Presidencial No. 002 de 2011^{229/} sobre participación ciudadana en la gestión pública, con el objeto de favorecer la coordinación en la implementación de la Ley No. 20.500 y velar por el establecimiento efectivo de las modalidades formales y específicas de participación en los órganos de la Administración del Estado obligados, complementa con nuevos mecanismos de participación el fortalecimiento entre Estado y ciudadanía, como lo son los cabildos ciudadanos, las escuelas de gestión pública para dirigentes sociales, el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), así como también acota, en sintonía con la Política de Participación Ciudadana en el

226. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 16 a 18, *supra* nota 199.

227. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_ley20500.pdf

228. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_pol.pdf

229. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_inst-2011.pdf

marco de la corresponsabilidad, metodologías para las consultas ciudadanas tales como ventanillas virtuales de opinión, o diálogos participativos si se opta por su ejecución presencial.

[283] – La adopción del Instructivo Presidencial No. 005 de 2012^{230/}, el cual tiene por objeto concentrar las múltiples iniciativas de transparencia, participación ciudadana y colaboración en una ventanilla única de acceso a los ciudadanos, con la finalidad de generar una cercanía del Estado con la ciudadanía y brindar servicios de calidad, promover la transparencia y participación, a hacer un Estado eficiente en cuanto al uso adecuado de los recursos públicos y que responda a las necesidades ciudadanas. Un elemento central del instructivo es generar una política de datos abiertos, con el propósito de hacer un Estado más transparente e incentivar la participación y colaboración del ciudadano. Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la Subsecretaría de General de Gobierno señaló que actualmente se encuentra desarrollando un dispositivo *web* para ser instalado en los portales en Internet de cada institución pública sujeta a norma de participación ciudadana, el cual se articulará como una entrada única, permitiendo a los ciudadanos participar de forma más oportuna, eficiente y expedita. Esta herramienta estará acompañada por un instructivo que normalizará su procedimiento y en el apartado sobre “consultas ciudadanas”, las personas podrán opinar y ser consultados para un plan, programa o acción que la institución considere pertinente

[284] En relación con lo anterior y con base en la información contenida en la “Cuenta Pública Anual de la Participación Ciudadana”^{231/}, el Comité observa las principales estadísticas y descripciones de los procesos involucrados en lo que respecta a la implementación de la Ley No. 20.500 durante 2012, de las que se desprende, entre otros aspectos, que 116 instituciones del Estado han dictado sus respectivas normas de participación ciudadana, dentro de los cuales se encuentran 22 ministerios y 94 servicios; más de un centenar informaron tener páginas *web* con información sobre planes, políticas, acciones y programas actualizados disponibles para la ciudadanía y cuentan también con el SIAC como instrumento receptor y canalizador para la atención ciudadana; más de 500 consultas ciudadanas realizadas a través de ventanillas virtuales y diálogos participativos u otras actividades presenciales, más de 380 cuentas públicas participativas, y más de 100 consejos de la sociedad civil implementados.

[285] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la medida a) de la recomendación de la sección 4.1 del capítulo IV de este informe.

[286] No obstante, con base en la información que se desprende tanto de la respuesta^{232/} del Estado analizado al cuestionario como de la Cuenta Pública Anual de la Participación Ciudadana señalada anteriormente, el Comité denota retrasos de algunos Ministerios y Servicios, a más de dos años de la promulgación de la Ley No. 20.500, de implementar sus correspondientes consejos de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de dicho ordenamiento.

[287] En vista de lo anterior y teniendo en cuenta además la dificultad identificada por el Estado analizado en su respuesta al cuestionario en cuanto al “...modo de incentivar la participación en estos procesos de consulta pública, focus group o mesas de conversación, puesto que existe escepticismo respecto de la real incidencia que tendrá la opinión emitida en la toma de decisión final o si se dará

230. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_inst-2012.pdf

231. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_cue_part-12.pdf

232. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 32 a 34, *supra* nota 199.

una respuesta fundada^{233/}, el Comité estima del caso replantear la medida, como se indica a continuación:

[288] Implementar los consejos de la sociedad civil en la totalidad de los órganos obligados de la Administración del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley No. 20.500. (Véase medida a) de la sección 4.2 del anexo I del presente informe).

[289] Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas necesarias que permitan que los mecanismos de consulta se realicen de manera más oportuna, eficiente y expedita. (Véase medida b) de la sección 4.2 del anexo I del presente informe).

[290] Promover, a través de campañas de difusión u otros medios que se estimen pertinentes, la utilidad e incidencia de la participación ciudadana en los mecanismos de consulta que se desarrollen en relación con los planes, programas, proyectos y acciones de los órganos de la Administración del Estado. (Véase medida c) de la sección 4.2 del anexo I del presente informe).

Medida b):

[291] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- c) *Proseguir los esfuerzos encaminados a la aprobación de una Ley Base sobre Participación Ciudadana en la Administración Pública.*

[292] En su respuesta al cuestionario^{234/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la medida c) anterior, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, la promulgación, en febrero de 2011, de la Ley No. 20.500 descrita con antelación en relación con la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 4.1 del capítulo IV de este informe.

[293] Sin embargo, el Comité, con base en la información que presenta el Estado analizado en su respuesta al cuestionario, observa los siguientes aspectos.

[294] En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la citada Ley, las normas del título IV sobre participación ciudadana en la gestión pública no son aplicables a los órganos del Estado señalados en el inciso 2º del artículo 21 de este ordenamiento, es decir, quedan excluidos de este ámbito la CGR, el Banco Central, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los Gobiernos Regionales, entre otros. De acuerdo con el mismo artículo, estos órganos podrán establecer una normativa especial referida a la participación ciudadana, es decir, “*dependerá de la voluntad de éstos la dictación de una normativa especial referida a la participación ciudadana*”^{235/}. No obstante, de acuerdo con la información del Estado analizado en su respuesta, el CPLT se encuentra desarrollando, en la actualidad, dicha normativa.

233. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 51 y 52, *supra* nota 199.

234. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 53 a 57, *supra* nota 199.

235. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, p. 56, *supra* nota 199.

[295] En segundo lugar, el estado pendiente de adopción y publicación de ciertos reglamentos asociados para efectiva implementación de la Ley No. 20.500, con respecto a temas tales como el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, el Consejo Nacional y el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, con base en la información puesta de presente con ocasión de la visita *in situ* por parte de la representación de la Subsecretaría de General de Gobierno.^{236/}

[296] Al respecto, “Chile Transparente” señala en su documento que “...en el tiempo de vigencia de la Ley, ésta ha encontrado dificultades en su implementación que aún no tienen una clara resolución. Algunas de éstas son: ... Los reglamentos asociados a la Ley no han sido publicados aún, estando fuera de los plazos comprometidos.”^{237/}

[297] En vista de lo anterior, el Comité estima del caso replantear la medida, como se indica a continuación:

[298] Promover la implementación de una normativa especial referida a la participación ciudadana en los órganos del Estado excluidos del ámbito de aplicación de la Ley No. 20.500. (Véase medida d) de la sección 4.2 del anexo I del presente informe).

[299] Considerar adoptar los reglamentos asociados a la Ley No. 20.500 y demás disposiciones necesarias para la completa implementación de dicho ordenamiento jurídico. (Véase medida e) de la sección 4.2 del anexo I del presente informe).

4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública, al igual que continuar avanzando en la derogación o modificación de normas que puedan desestimular dicha participación.

[300] Con respecto a esta recomendación cabe anotar que en el Informe de la Tercera Ronda^{238/} el Comité tomó nota de la consideración satisfactoria de la medida b) de la misma, en lo atinente “continuar avanzando en la derogación o modificación de las denominadas ‘leyes de desacato’”. En este sentido, el Comité reformulará dicha recomendación como se indica a continuación:

236. Con fecha 12 de agosto de 2013, el Estado analizado puso de presente que: “3 de los 4 reglamentos asociados a la Ley No. 20.500 se encuentran completamente operativos. Los aludidos en el párrafo son dos: el Reglamento sobre el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro fue recientemente aprobado y publicado el 18 de Julio del 2013; el Reglamento que regula el Catastro de Organizaciones de Interés Público, el Consejo Nacional que lo Administra y Los Consejos Regionales, y el Funcionamiento del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público fue publicado el 22 de Febrero del año 2013. Un tercer reglamento que no fue mencionado en el párrafo, es el Reglamento Tipo Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya tramitación terminó el año 2011. A la fecha, sólo está pendiente el Reglamento que regula la Constitución, Regulación, y Funcionamiento de Federaciones y Confederaciones de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos y de Organizaciones Comunitarias Funcionales, que actualmente se encuentra en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo modificándose según las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República.”

237. Véase respuesta de “Chile Transparente” al cuestionario de la Cuarta Ronda, pp. 15 y 16, *supra* nota 3.

238. Véase “Informe relativo a la implementación en Chile de las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Tercera Ronda y sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas a dicho país en las rondas anteriores”, p. 47, véase *supra* nota 217.

[301] Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. (Véase recomendación de la sección 4.3 del anexo I del presente informe).

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en la gestión pública, y especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.*

[302] En su respuesta al cuestionario^{239/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[303] – Los avances en temas de modernización para incentivar las prácticas de apertura y fortalecer la transparencia, entre otros aspectos, que viene realizando el Gobierno, a través de la Unidad de Modernización del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos que posibilitarán a los ciudadanos un acceso sencillo, rápido y directo con el Estado, tales como, “Datos.gob.cl” (www.datos.gob.cl), “Portal de Gobierno Abierto” (www.gobiernoabierto.gob.cl), “ChileAtiende” (www.chileatiende.cl) y “Chile sin Papeleo” (www.chilesinpapeleo.cl).

[304] – El ingreso en 2013 de Chile a la iniciativa multilateral “Alianza para el Gobierno Abierto” (“OGP”, por sus siglas en inglés) tras haber cumplido los criterios mínimos de elegibilidad exigidos en materia de transparencia fiscal, de acceso a la información pública, de transparencia en las declaraciones de patrimonio e intereses, y de apertura a la participación ciudadana en la definición de políticas públicas.

[305] – La puesta en línea en septiembre de 2012 del “Portal Contraloría y Ciudadano”, descrito en la sección 2.1 del capítulo II de este informe, cuyo objetivo es aumentar la participación de las personas en el resguardo de la probidad y bienes públicos, creando un canal de comunicación efectiva que hace partícipes a las personas de la labor fiscalizadora de la CGR, haciéndole llegar tanto sugerencias de fiscalización como denuncias en línea, a través de formularios especialmente diseñados para ambos fines.

[306] – Las acciones de promoción, capacitación y difusión en materia de transparencia y acceso a la información que desde 2009 viene desarrollando el CPLT, en las que se ha puesto énfasis en alentar a la sociedad civil a participar en la gestión pública y de un *empoderamiento* social a través del uso de la Ley de Transparencia como una vía de control social y participación. Entre estas iniciativas se destaca la puesta en marcha del portal educativo “EducaTransparencia”^{240/}, como un sistema electrónico integral que comprende un conjunto organizado de componentes físicos y tecnológicos para el desarrollo de habilidades ciudadanas en su rol público, a través de distintos recursos pedagógicos como cápsulas animadas, videos informativos y cursos *e-learning*, además de manuales educativos impresos.

239. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 57 a 63, *supra* nota 199.

240. Véase: <http://www.educatransparencia.cl/portal/>

[307] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la Subsecretaría General de Gobierno, complementó lo anterior refiriéndose a dos mecanismos de participación ciudadana de carácter no obligatorio para las instituciones públicas, pero que complementan los cuatro mecanismos institucionalizados en la Ley No. 20.500 (acceso a la información relevante, consultas ciudadanas, consejos de la sociedad civil y cuentas públicas participativas) que actualmente emprende el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, dijo, se encuentra desarrollando:

[308] El mecanismo denominado “ideas ciudadanas” que se articulará como un espacio donde los ciudadanos podrán enviar, discutir y votar por sus ideas, a modo de generar una conversación que permita mejorar el quehacer de la institución pública de forma transparente, colaborativa y participativa, y el mecanismo “yo propongo” que será una plataforma electrónica para la formulación de propuestas en materias que sean de interés público.

[309] Igualmente, se señaló, se viene trabajando en un proyecto entre el PNUD y el Ministerio Secretaría General de Gobierno sobre “Fortalecimiento de la Gestión Pública Participativa y Cohesión Social”^{241/} que busca fortalecer el funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, difundiendo nuevas metodologías de trabajo validadas y experiencias exitosas y disponiendo de un instrumento de medición que ofrezca información sintética sobre indicadores objetivos y subjetivos en materia de gestión pública participativa y cohesión social, integrando la valoración que de ella hacen los propios ciudadanos en términos de sus aspiraciones, intereses y necesidades. Los insumos y resultados generados por el estudio PNUD constituyeron la línea base para el diseño, desarrollo e implementación de las estrategias que el Gobierno seguirá en materia de asesoría y acompañamiento a instituciones públicas en el marco de las obligaciones que le impone la Ley No. 20.500. Para 2013 se espera desarrollar Guías Metodológicas para la formulación de proyectos de gestión pública participativa.^{242/}

[310] El Comité toma nota tanto de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe, reflejados principalmente en la puesta en línea del “Portal Contraloría y Ciudadano” y de las acciones de promoción, capacitación y difusión que en materia de transparencia y acceso a la información viene desarrollando el CPLT, las cuales apuntan más hacia el sentido de la recomendación de establecer mecanismos de participación adicionales, especialmente en los esfuerzos para prevenir al corrupción, así como de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma. (Véase única medida de la sección 4.3 del anexo I del presente informe).

Medida b):

[311] Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

241. Véase: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_pnud.pdf

242. Con fecha 12 de agosto de 2013, el Estado analizado puso de presente que: “dicha guía ya fue desarrollada. Su versión beta fue enviada durante el mes de Junio a todos los encargados de participación ciudadana para recibir observaciones. Luego de ese proceso, se procedió a la formulación de una versión final de la guía, la cual será socializada a través de un curso de e-learning desarrollado por consultores PNUD.”

4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- a) Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.*

[312] En su respuesta al cuestionario^{243/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los siguientes:

[313] – Las iniciativas desarrolladas por la CGR en relación con el “Semáforo Municipal” y las “Agendas Públicas”, descritas en el capítulo III sobre buenas prácticas de este informe.

[314] – Las acciones desarrolladas por el CPLT, tales como la adopción de su Instrucción No. 2^{244/} sobre la designación de enlaces con este Consejo por parte de las autoridades, jefaturas o jefes superiores de los órganos y servicios de la Administración del Estado, que sirven como canales de comunicación para agilizar el flujo de información entre los servicios, la ciudadanía y el CPLT, para el adecuado cumplimiento y aplicación de la Ley de Transparencia, así como la puesta en marcha portal educativo “EducaTransparencia”, descrito anteriormente en relación con los avances en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 4.3 del capítulo IV de este informe.

[315] El Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida a) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, reflejado en las iniciativas que vienen desarrollando tanto la CGR como el CPLT, al igual que de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que las mismas se refieren a áreas muy específicas y el sentido de la recomendación apunta hacia mecanismos destinados a prevenir la corrupción, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 del artículo III de la Convención. (Véase medida a) de la sección 4.4 del anexo I del presente informe).

Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- b) Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos.*

243. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 64 a 67, *supra* nota 199.

244. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_chl_inst.pdf

[316] En su respuesta al cuestionario^{245/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance en la implementación de la misma, los programas de difusión y talleres de capacitación que viene desarrollando el CPLT en cuanto al derecho de acceso a la información pública previsto principalmente en la Ley de Transparencia.

[317] Asimismo, con ocasión de la visita *in situ*, la representación de la Subsecretaría General de Gobierno, señaló que Ministerio Secretaría General de Gobierno a través de su División de Organizaciones Sociales cuenta, dentro de sus líneas programáticas, con proyectos de capacitación sobre la Ley No. 20.500 y de oportunidades de participación para dirigentes y líderes sociales a lo largo del país, entre los cuales se encuentra:

[318] – El “*Infobus*” como una oficina móvil que lleva información de Gobierno a todas las regiones del país, facilitando que los ciudadanos se informen sobre beneficios, planes y programas gubernamentales.

[319] – Las “Escuelas de Gestión Pública” para contribuir a la formación de los dirigentes y líderes sociales de manera informativa y participativa en relación a las políticas públicas que genera el Gobierno, y con ello fortalecer su rol en la comunidad, a través de talleres sobre educación, vivienda, salud, transporte y seguridad pública, entre otras políticas del interés.

[320] – Los programas de capacitación para funcionarios públicos y organizaciones sociales sobre contenidos temáticos relacionados con las Leyes No. 20.500 y No. 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Sociales, acceso a la información pública, formulación de proyectos, habilidades directivas para organizaciones sociales, resolución de conflictos y rol del dirigente de organizaciones de la sociedad civil.

[321] Asimismo, se señaló que la misma División de Organizaciones Sociales viene periódicamente realizando proyectos de asistencia técnica y metodológica a las instituciones públicas a fin de que éstas implementen y difundan apropiadamente sus mecanismos y modalidades de participación a los ciudadanos.

[322] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado para avanzar en la implementación de la medida b) de la recomendación de la sección 4.4 del capítulo IV de este informe, reflejados en las iniciativas que vienen desarrollando tanto el CPLT como el Ministerio Secretaría General de Gobierno a través de su División de Organizaciones Sociales, al igual que de la necesidad de que el Estado analizado continúe dando atención a la misma, teniendo en cuenta que éstas se refieren a áreas muy específicas y el sentido de esta medida apunta hacia mecanismos destinados a prevenir la corrupción, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11 del artículo III de la Convención. (Véase medida b) de la sección 4.4 del anexo I del presente informe).

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación 5.1.:

[323] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

245. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 68 a 70, *supra* nota 199.

Recomendación 5.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- 5.2. *Determinar aquellas áreas específicas en las cuales la República de Chile pueda necesitar o podría útilmente recibir cooperación técnica mutua para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción; y con base en tal análisis, diseñar e implementar una estrategia integral que le permita a dicho país acudir a otros Estados parte y no parte de la Convención y a las instituciones u organismos comprometidos en la cooperación internacional en procura de la cooperación técnica que haya determinado que necesita.*

[324] En su respuesta al cuestionario^{246/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[325] – La participación del Estado analizado en diversos foros y seminarios internacionales, tales como el curso “La Inteligencia en Investigaciones Policiales” desarrollado en 2011 en Panamá, a través de representantes de la UNAC; talleres sobre el combate a la corrupción y las tendencias recientes en investigación de prácticas corruptas, desarrollados en el mismo año en Tailandia y Honduras, a través de fiscales adjuntos de distintas localidades del país y de la UNAC; el seminario internacional sobre recuperación de activos realizado en el año 2012 en Chile en el marco de la iniciativa StAR (*Stolen Asset Recovery Initiative*), entre otros.

[326] – La promulgación de diversos cuerpos normativos en el marco del proceso de ingreso de Chile a la OCDE, en materia de cohecho a funcionarios públicos nacionales y extranjeros, responsabilidad de las personas jurídicas y acceso a información bancaria por autoridad tributaria, así como el proyecto de ley que modifica a la Ley No. 19.913 y que permitirá realizar la incautación y comiso de bienes producto de delito en virtud de solicitudes originadas por cooperación internacional.

[327] Con base en lo anterior, en lo que respecta a aquellas medidas que permitan implementar de manera efectiva las normas antes descritas y en relación a las necesidades de cooperación, el Estado analizado identificó en su repuesta, “*que se requiere mejorar la capacidad de las autoridades chilenas en cuanto la recuperación de activos que tengan su origen o provengan de la corrupción, ya sea esto abarque investigaciones en el plano interno como de aquellas que se realicen en el marco de una solicitud de cooperación o asistencia legal mutua de otros países o jurisdicciones.*”^{247/}

[328] En este contexto, a partir de 2012 y en el marco de la Coordinación Nacional para el combate y la prevención del LA/FT, la UAF, en conjunto con el FMI y el BID, ha comenzado a trabajar en el diseño de la primera estrategia nacional para la prevención y el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en la cual participan 20 organismos públicos, con el objetivo de “*identificar los riesgos y desafíos que implica el combate y prevención de ambos delitos e identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta el país para combatir el lavado de activos y por tanto de sus delitos o hechos base, como lo constituyen el delito de corrupción y cohecho.*”^{248/}

246. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 71 a 77, *supra* nota 199.

247. *Ibíd.* p. 74, *supra* nota 199.

248. *Ibíd.* p. 77, *supra* nota 199.

[329] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de recomendación 5.2 de la sección 5 del capítulo IV de este informe, la cual por su naturaleza requieren continuidad, por lo que el Comité espera que el Estado analizado reporte las acciones desarrolladas al respecto en los informes anuales de avance previstos en el artículo 32 del Reglamento del Comité.

Recomendación 5.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

5.3. Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

[330] En su respuesta al cuestionario^{249/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[331] – La participación del Estado analizado, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), en el Programa de Cooperación Triangular en beneficio de terceros países de América Latina y el Caribe, suscrito entre Chile y Estados Unidos. Así, por ejemplo, integrantes del MP, de la Policía de Investigaciones y la UAF, impartido en 2011 y 2012, en la sede de El Salvador de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), el curso “La Corrupción, el Régimen Legal, Mecanismos de Detección, Investigación, Persecución y Juzgamiento: La Experiencia Chilena”, con la finalidad de debatir sobre la situación de la corrupción, a partir de la experiencia chilena y tras la puesta en marcha de la reforma procesal penal, sobre regímenes legales y los mecanismos existentes para la investigación, persecución penal y juzgamiento de las prácticas corruptas en América Latina y el Caribe. Se hace presente que una nueva edición de este taller se desarrollará durante fines de agosto de 2013 en San Salvador, República de El Salvador.

[332] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de recomendación 5.3 de la sección 5 del capítulo IV de este informe, la cual por su naturaleza requiere continuidad, por lo que el Comité espera que el Estado analizado reporte las acciones desarrolladas al respecto en los informes anuales de avance previstos en el artículo 32 del Reglamento del Comité.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

Recomendación sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

Informar a la Secretaría General de la OEA, cuando corresponda, toda modificación en la designación de la autoridad central o de las autoridades centrales a los efectos de la asistencia y la cooperación internacionales previstas en la Convención.

[333] El Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de la anterior recomendación por cuanto mediante Nota No. 274, de 16 de noviembre de 2012, la Misión Permanente de Chile ante la OEA, informó al Secretario General y, por su intermedio, al Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que el Ministerio de

249. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 77 y 78, *supra* nota 199.

Relaciones Exteriores de Chile ha sido designado como Autoridad Central para los efectos previstos en el párrafo 1º del artículo XVIII de la Convención.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación 7.1:

[334] Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

Recomendación 7.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- 7.2. *Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en “Internet” de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 siguiente.*

[335] En su respuesta, el Estado analizado no presenta información adicional a la que ya fue analizada por el Comité en los informes de la Segunda y Tercera Rondas en relación con la anterior recomendación. Por lo tanto, el Comité reitera la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la misma. (Véase recomendación de la sección 7 del anexo I del presente informe).

Recomendación 7.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en los informes de la Segunda y Tercera Rondas:

- 7.3. *Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones contenidas en el mismo.*

[336] En su respuesta al cuestionario^{250/}, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la anterior recomendación, de la cual el Comité destaca, como pasos que le permiten estimar que la misma ha sido considerada satisfactoriamente, los siguientes:

[337] – El CAIGG ha desarrollado y viene perfeccionando un sistema que permite desagregar las recomendaciones realizadas en la Primera, Segunda y Tercera Rondas con el fin de enlazar cada una de las recomendaciones y sugerencias efectuadas con los órganos de la Administración del Estado afines con el tema en cuestión, con el propósito de avanzar en la implementación de las mismas. Dicho sistema fue presentado por el Auditor General de Gobierno con ocasión de la visita *in situ*.

[338] – Asimismo, desde 2011, se vienen realizando reuniones periódicas con los representantes de los Órganos del Estado, incluyendo a la CGR, el MP, los Ministerios Secretaría General de la

250. Véase respuesta del Estado analizado sobre los avances de las recomendaciones formuladas en el informe de la Primera Ronda de Análisis, pp. 83 y 84, *supra* nota 199.

Presidencia y de Hacienda, el CPLT, la UAF, la Superintendencia de Valores y Seguros, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, entre otros, con el fin de discutir las recomendaciones y dar soluciones en la medida que la legislación interna lo permita. Estas reuniones son coordinadas y efectuadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

[339] En este sentido, el Comité toma nota de la consideración satisfactoria por el Estado analizado de recomendación 7.3 de la sección 7 del capítulo IV de este informe.

ANEXO I

RECOMENDACIONES VIGENTES Y REFORMULADAS SOBRE LOS TEMAS ANALIZADOS EN LA PRIMERA RONDA

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 y 2 DE LA CONVENCION)

1.1. Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento

Recomendación:

Fortalecer las disposiciones relativas a las normas de conducta orientadas a prevenir los conflictos de intereses durante y con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, y los sistemas de verificación de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses.

Medidas sugeridas

- a) Complementar las restricciones previstas en la ley para quienes dejan de desempeñar un cargo público, incluyendo, cuando corresponda, otras eventualidades que también podrían configurar conflictos de intereses con posterioridad a la terminación del ejercicio de las funciones públicas, que fueren aplicables durante un período razonable.
- b) Fortalecer sistemas que permitan asegurar que las unidades de personal y de control interno de los servicios efectúen oportunamente y cuando corresponda la verificación o revisión de la información contenida en las declaraciones juradas de inhabilidades y en las declaraciones de intereses.
- c) Asegurar la aplicabilidad de sanciones a los servidores públicos que incurran en violación a las normas sobre conflictos de intereses.

1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección.

1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional

2. SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCION)

Recomendación:

Ampliar y complementar los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos, a través de las normas legales pertinentes, y adoptar las medidas relativas a su publicidad cuando corresponda.

Medidas sugeridas:

- a) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes, cuando corresponda, para dar publicidad a las declaraciones patrimoniales (incluye ingresos, activos y pasivos)
- b) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses con el objeto de detectar y prevenir conflictos de intereses.

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCION)

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA CONVENCION)

4.1. Mecanismos para el acceso a la información

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

4.2. Mecanismos de consulta

Recomendación:

Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la aprobación final de disposiciones legales.

Medidas sugeridas:

- a) Implementar los consejos de la sociedad civil en la totalidad de los órganos obligados de la Administración del Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley No. 20.500.
- b) Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas necesarias que permitan que los mecanismos de consulta se realicen de manera más oportuna, eficiente y expedita.

- c) Promover, a través de campañas de difusión u otros medios que se estimen pertinentes, la utilidad e incidencia de la participación ciudadana en los mecanismos de consulta que se desarrollen en relación con los planes, programas, proyectos y acciones de los órganos de la Administración del Estado.
- d) Promover la implementación de una normativa especial referida a la participación ciudadana en los órganos del Estado excluidos del ámbito de aplicación de la Ley No. 20.500.
- e) Considerar adoptar los reglamentos asociados a la Ley No. 20.500 y demás disposiciones necesarias para la completa implementación de dicho ordenamiento jurídico.

4.3. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública.

Medida sugerida:

- Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en la gestión pública, y especialmente en los esfuerzos para prevenir la corrupción, y promover el conocimiento de los mecanismos de participación establecidos y su utilización.

4.4. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública

Recomendación:

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública.

Medidas sugeridas:

- a) Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública.
- b) Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para utilizar tales mecanismos.

5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)

Las recomendaciones formuladas en relación con esta sección fueron consideradas satisfactoriamente y por lo tanto no requieren atención adicional.

6. AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)

La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no requiere atención adicional.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendación

- Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, que ha sido publicada por la Secretaría Técnica del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 del Informe de la Primera Ronda.

ANEXO II

AGENDA DE LA VISITA *IN SITU* A LA REPÚBLICA DE CHILE

<u>Domingo, 7 de abril de 2013</u>	
10:00 hrs. – 11:00 hrs. <i>Hotel Galerías</i>	Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
11:00 hrs. – 12:00 hrs. <i>Hotel Galerías</i>	Reunión de coordinación entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<u>Lunes, 8 de abril de 2013</u>	
8:30 hrs. – 12:30 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.^{251/}
8:30 hrs. – 10:30 hrs.	<u>Primera sesión:</u> Temas: <ul style="list-style-type: none">• Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda.• Participación ciudadana en el marco de la Ley No. 20.500.
	<u>Participantes:</u> - Chile Transparente: Francisco Sánchez Lay, Director de Asuntos Jurídicos. - Fundación AVINA: Francisca Rivero, Encargada de Estrategia Nacional. Alexander Repenning, Cooperante. - Fundación Pro Acceso: Federico Allendes, Presidente. Moisés Sánchez, Director Ejecutivo. - Docente con conocimiento en Probidad y Buen Gobierno: Nicolás Cobo, Subdirector del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile.

251. La organización de la sociedad civil “*Chile Transparente*” (Capítulo Chileno de Transparencia Internacional) participa en estas reuniones en virtud de lo previsto en la disposición 26 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ*, por cuanto presentó un documento relativo al Cuestionario para la Cuarta Ronda de Análisis, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 34 del *Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité*. Asimismo, se sugiere invitar a participar a las demás organizaciones y personas en virtud de lo previsto en la disposición 27 de dicha *Metodología*, que permite invitar a participar en estas reuniones a organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales, académicos o investigadores.

10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<p><u>Segunda sesión:</u></p> <p>Tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cooperación entre el sector privado y los órganos de control en la lucha contra la corrupción. <p><u>Participantes:</u></p> <p>- Colegio de Contadores de Chile Juan Lazo, Presidente de la Comisión de Auditoría Interna. Gladys Soto Villarroel, Vicepresidenta de la Comisión de Auditoría Interna.</p> <p>- Cámara de Comercio de Santiago (CCS) Cristián García-Huidobro, Secretario General. Thamar Jaramillo, Gerente de Asuntos Públicos. Andreas Wiechert, Gerente Relaciones Internacionales.</p> <p>- Fundación Generación Empresarial Paula Valenzuela, Gerente General. Luis Munita, Sociólogo de la Fundación. Ana Victoria Ochagavía- Gerente de Asuntos Públicos.</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 18:00 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Ministerio Público
14:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen de competencias y mecanismos de solución sobre eventuales conflictos respecto del mismo. • Acciones de capacitación. • Implementación de sistemas tecnológicos. <p><u>Participantes:</u></p> <p>Marta Herrera Seguel, Directora de Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Hernán Fernández Aracena, Subdirector de Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Marcela Díaz León, Jefa de la Unidad de Capacitación, División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional</p> <p>Carlos Martínez Jara, Jefe de Operaciones y Sistemas de la División de Informática de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Luz María Fernández Saldías, Abogada Asesora de la División de Atención</p>

	<p>a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Felipe Abbott Matus, Abogado Asesor de la Unidad de Capacitación, División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Erika Flores Arévalo, Abogado Asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Yelica Lusic Nadal, Abogada Asesora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.</p>
16:00 hrs. – 18:00 hrs.	<p>Panel 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de control interno. • La Unidad Especializada Anticorrupción. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. <p><u>Participantes:</u></p> <p>Marta Herrera Seguel, Directora de Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Hernán Fernández Aracena, Subdirector de Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Marcela Díaz León, Jefa de la Unidad de Capacitación, División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional</p> <p>Carlos Martínez Jara, Jefe de Operaciones y Sistemas de la División de Informática de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Luz María Fernández Saldías, Abogada Asesora de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Felipe Abbott Matus, Abogado Asesor de la Unidad de Capacitación, División de Recursos Humanos de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Erika Flores Arévalo, Abogado Asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional.</p> <p>Yelica Lusic Nadal, Abogada Asesora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional</p>
18:00 hrs. – 18:30 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	<p>Reunión informal^{252/} entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.</p>

252. El segundo párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la Realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas...”

Martes, 9 de abril de 2013	
8:30 hrs. – 12:30 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Contraloría General de la República
08:30 hrs. – 10:30 hrs.	<p>Panel 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Ámbito de funciones, excepciones al mismo y mecanismos para solucionar eventuales conflictos de competencia. • Régimen de recursos procedente en contra de las decisiones que adopta. • Máximas autoridades y régimen jurídico y administrativo de recursos humanos. • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. <p><u>Participantes:</u> Ramiro Mendoza, Contralor General de la República. Patricia Arriagada, Subcontralora. María Isabel Carril Caballero, Jefa de División Auditoría Administrativa. Priscila Marina Jara Fuentes, Jefa de División Municipalidades. Nancy Elizabeth Barra Gallardo, Subjefa División de Municipalidades. Milen Oliva Chiang, Jefa Unidad Acceso a la Información. Mauricio Muñoz Gutiérrez, Abogado Asesor Gabinete Subcontralora. Verónica Meneses Gutiérrez, Abogada Asesora Gabinete Contralor. Marcelo Araya Rojas, Abogado Tribunal de Cuentas. Pablo Soto, Coordinación y Apoyo, División de Análisis Contable. Constanza Tobar Castro, Abogada Fiscalía CGR.</p>
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	<p>Panel 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. • Información sobre buena práctica con relación a sus funciones. • Seguimiento de las recomendaciones de la Primera Ronda. <p><u>Participantes:</u> Patricia Arriagada, Subcontralora.</p>

	<p>María Isabel Carril Caballero, Jefa de División Auditoría Administrativa.</p> <p>Priscila Marina Jara Fuentes, Jefa de División Municipalidades.</p> <p>Nancy Elizabeth Barra Gallardo, Subjefa División de Municipalidades.</p> <p>Milen Oliva Chiang, Jefa Unidad Acceso a la Información.</p> <p>Mauricio Muñoz Gutiérrez, Abogado Asesor Gabinete Subcontralora.</p> <p>Verónica Meneses Gutiérrez, Abogada Asesora Gabinete Contralor.</p> <p>Marcelo Araya Rojas, Abogado Tribunal de Cuentas.</p> <p>Pablo Soto, Coordinación y Apoyo, División de Análisis Contable.</p> <p>Constanza Tobar Castro, Abogada Fiscalía CGR.</p>
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 18:00 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Poder Judicial
14:00 hrs. – 16:00 hrs.	<p>Panel 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos. • Los “autos acordados” • Fortalecimiento institucional. • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. <p><u>Participantes:</u></p> <p>Juan Manuel Escandón, Fiscal Judicial, Corte de Apelaciones de Santiago.</p> <p>Beatriz Pedrals García de Cortazar, Fiscal Judicial, Corte de Apelaciones de Santiago.</p> <p>Antonio Larraín Fernández, Director, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>León Paúl Castro, Subdirector, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Ricardo Guzmán Sanza, Contralor Interno, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Gustavo Poblete Morales, Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Andreina Olmo Marchetti, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p>

	<p>Rodrigo Herrera Marchant, Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Paulette Agustera, Actas del Consejo Superior, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p>
16:00 hrs. – 18:00 hrs.	<p>Panel 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recursos presupuestales necesarios. • Mecanismos de coordinación. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica. <p><u>Participantes:</u></p> <p>Juan Manuel Escandón, Fiscal Judicial, Corte de Apelaciones de Santiago.</p> <p>Beatriz Pedrals García de Cortazar, Fiscal Judicial, Corte de Apelaciones de Santiago.</p> <p>Antonio Larraín Fernández, Director, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>León Paúl Castro, Subdirector, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Ricardo Guzmán Sanza, Contralor Interno, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Gustavo Poblete Morales, Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Andreina Olmo Marchetti, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Rodrigo Herrera Marchant, Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p> <p>Paulette Agustera, Actas del Consejo Superior, Corporación Administrativa del Poder Judicial.</p>
18:00 hrs. – 18:30 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
<u>Miércoles, 10 de abril de 2013</u>	
8:30 hrs. – 12:30 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Unidad de Análisis Financiero
08:30 hrs. – 10:30 hrs.	<p>Panel 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Breve presentación sobre su propósito, funciones y estructura. • Adopción de decisiones.

	<ul style="list-style-type: none"> • Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos. • Acciones de capacitación. • Fortalecimiento institucional.
	<u>Participantes:</u> Javier Cruz Tamburrino, Director. Tomás Koch Shultz, Encargado de Asuntos Internacionales. Adrián Fuentes Campos, Abogado de la División Jurídica.
10:30 hrs. – 12:30 hrs.	Panel 8: <ul style="list-style-type: none"> • Difusión de sus objetivos y funciones. • Mecanismos de control interno y de rendición de cuentas. • Resultados con relación al cumplimiento de sus responsabilidades. • Dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades y necesidades de cooperación técnica.
	<u>Participantes:</u> Javier Cruz Tamburrino, Director. Tomás Koch Shultz, Encargado de Asuntos Internacionales. Adrián Fuentes Campos, Abogado de la División Jurídica.
12:30 hrs. – 14:00 hrs.	Almuerzo
14:00 hrs. – 18:00 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Seguimiento de las Recomendaciones de la Primera Ronda
	Panel 9: <ul style="list-style-type: none"> • Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses. • Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. • Mecanismos de participación ciudadana. • Asistencia mutua y cooperación técnica. • Recomendaciones generales.
	<u>Participantes:</u> Consejo para la Transparencia: Raúl Ferrada, Director General. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Gonzalo Guerrero, Jefe de Gabinete de Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia. Alberto Precht, Presidente Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia

	<p>Administrativa.</p> <p>Raimundo Varela, Abogado Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia Administrativa.</p> <p><i>Ministerio Secretaría General de Gobierno y su División de Organizaciones Sociales:</i></p> <p>Abraham Abugattas, Jefe de Gabinete del Subsecretario General de Gobierno.</p> <p>Aliro Caimapo Oyarzo, Director Nacional de la División de Organizaciones Sociales.</p> <p><i>Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno:</i></p> <p>Jorge Vio Niemeyer, Auditor General de Gobierno.</p> <p>Felipe Aliaga, Abogado Asesor.</p>
18:00 hrs. – 18:30 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Reunión informal entre los representantes de los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
18:30 hrs. – 19:00 hrs. <i>Sede de la Cancillería</i>	Reunión final ^{253/} entre los representantes del Estado analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.

253. El tercer párrafo de la disposición 20 de la *Metodología para la realización de las Visitas In Situ* señala: “...Al final de la visita in situ se realizará una reunión en que participarán los Expertos del Subgrupo, la Secretaría Técnica y el Experto Titular del Estado analizado y/o el funcionario que éste haya designado para apoyarlo de acuerdo con lo previsto en la disposición 10, segundo párrafo, de la presente Metodología. En dicha reunión se precisará, si fuere el caso, la información que excepcionalmente quede aún pendiente de suministrar el Estado analizado por conducto de la Secretaría Técnica y el término en que lo hará y se coordinará cualquier otro tema pendiente que resulte de la visita in situ.”

AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA COORDINACIÓN DE LA VISITA *IN SITU*, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA

ESTADO ANALIZADO:

CHILE

Jorge Vio Niemeyer

Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC
Auditor General de Gobierno, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

Felipe Aliaga

Experto Alterno ante el Comité de Expertos del MESICIC
Abogado Asesor, Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:

EL SALVADOR

Álvaro Magaña

Experto Alterno ante del Comité de Expertos del MESICIC
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible

Miguel Girón

Experto Alterno ante el Comité de Expertos MESICIC

HONDURAS

Rigoberto Córdova Laitano

Experto Alterno ante del Comité de Expertos del MESICIC
Asistente de Magistrado, Tribunal Superior de Cuentas de la República

SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC

Rodrigo Cortés

Oficial Jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA